

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
ESCUELA DE DERECHO

DISERTACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE
LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA

ANÁLISIS DEL CASO DEL ESPÍA Y AGENTE DIPLOMÁTICO ENRIQUE
DUCHICELA EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS

ANDREA VERÓNICA ÁLVAREZ MORQUECHO

DIRECTOR: RAMIRO ÁVILA SANTAMARÍA

QUITO, 17 DE JUNIO DE 2014

DEDICATORIA

*A JEHOVÁ, mi Padre y amor eterno,
quien me guía por sendas de justicia,
sustentándome con su diestra victoriosa.
Al Dios que se alegra en la justicia, sea
la gloria y la honra.*

AGRADECIMIENTO

Gracias infinitas a todas las personas que contribuyeron a la realización de éste trabajo; principalmente, a Dios, que afirma mis pasos,

A mi familia por su amor y apoyo,

A David Cordero y Ramiro Ávila por su sabia dirección y dedicación,

Al Centro de Derechos Humanos de la PUCE.

RESUMEN

En la presente tesina, se aborda el Caso del Sr. Enrique Duchicela, quien fue un agente diplomático de la Misión Diplomática de Ecuador en Perú, Estado en el que desapareció, sin que se haya sentado una versión oficial sobre lo acontecido.

Es así que, en el primer capítulo, se hace una descripción de los hechos, tomando como fuente varios documentos, que en su momento tuvieron el carácter de información reservada; tales como: télex intercambiados entre Instituciones del Estado ecuatoriano, cartas, noticias, informes que revelan la posibilidad de que el Sr. Duchicela haya sido detenido por agentes del Ejército Peruano (en razón de su presunta calidad de espía), entre otros.

En relación a la protección de Enrique Duchicela por su estatus diplomático, en el segundo capítulo, se analizan las obligaciones que tenían el Estado ecuatoriano, como Estado que envía y, el Estado peruano, como Estado de acogida.

En el tercer capítulo, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, se establece los derechos humanos que le fueron vulnerados al Sr. Duchicela y su familia; con el fin de abordar en el Cuarto Capítulo, las posibles medidas de reparación para las víctimas.

Como principales fuentes de investigación, me serví de la Jurisprudencia de Órganos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y de Órganos de Justicia Nacionales, Instrumentos Internacionales, normativa jurídica, doctrina, investigaciones periodísticas, entrevistas etc.

Finalmente, al término de la tesis, se cumple el objetivo de identificar las acciones y omisiones cometidas en el caso, en qué medida éstas constituyen una violación a los derechos humanos, una medidas de reparación concretas.

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS	v
INTRODUCCIÓN	vi
CAPÍTULO I: CASO ENRIQUE DUCHICELA	1
1.1 Principales antecedentes históricos.....	1
1.2 Hechos del Caso	3
1.2.1 Perfil de Enrique Duchicela, el hombre tras el uniforme.....	3
1.2.2 Sucesos relativos a la Desaparición del Sr. Duchicela.....	5
1.2.3 Acciones Legales en Perú	17
1.2.4 Acciones legales emprendidas en Ecuador	19
1.2.4.1 Proceso ante Fiscalía ecuatoriana	19
1.2.4.2 Defensoría del Pueblo	20
1.2.4.3 Acción de Protección	20
1.2.4.4 Acción Extraordinaria de Protección	22
1.2.4.5 Acciones de Acceso a la Información Pública.....	22
1.2.4.6 Comisión de la Verdad del Ecuador	24
CAPÍTULO II: ENRIQUE DUCHICELA COMO MIEMBRO DE MISIÓN DIPLOMÁTICA	26
2.1 Estatus del Sargento Enrique Duchicela	26
2.2 Obligaciones de los Estados ecuatoriano y peruano respecto al Sr. Duchicela en su calidad de Miembro de la Misión Diplomática de Ecuador en Perú.....	27
2.2.1 Obligaciones del Estado peruano derivadas del status del Sargento Duchicela	27
2.2.2 Obligaciones del Estado ecuatoriano derivadas del status del Sargento Duchicela.....	33
CAPÍTULO III: DERECHOS DE LA CONVENCIÓN AMERICA DE DERECHOS HUMANOS VULNERADOS EN EL CASO DUCHICELA	40
3.1 Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención).....	40

3.2 Derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención).....	47
3.2.1 Derecho a la integridad personal del Sargento Enrique Duchicela.....	47
3.2.2 Observancia del Derecho a la integridad personal de la Familia del Sargento Duchicela (Marta Escobar, Paulina y Jessica Duchicela) por parte de Estados ecuatoriano y peruano.	50
3.3 Derecho a la vida (artículo 4 de la Convención).....	55
3.3.1 Violación del Derecho a la vida por el Estado peruano.....	55
3.3.2 Violación del derecho a la vida por el Estado ecuatoriano	59
3.4 Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención)	63
3.5 Derecho a la Protección Judicial (artículo 25 de la Convención)- Estado peruano y ecuatoriano.	68
3.6 Derecho a las Garantías Judiciales (artículo 8.1 de la Convención) y Derechos a Protección Judicial (artículo 25 de la Convención) en relación al Derecho a la Verdad y la obligación de investigación de los Estados ecuatoriano y peruano.....	76
3.6.1 Análisis en relación a la Obligación de investigar del Estado peruano	81
3.6.2 Análisis en relación a la Obligación de investigar del Estado ecuatoriano.....	87
3.6.3 Derecho a la Verdad	91
3.6.4 Análisis en relación al Estado peruano	94
3.6.5 Análisis en relación al Estado ecuatoriano	96
3.7 Violación del Artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) respecto a los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica),4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales),25 (protección judicial) de la Convención.	101
CAPÍTULO IV: MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL CASO DUCHICELA	107
4.1 Reparación	107
4.2 Medidas de reparación	110
4.2.1 Evento de Develación de una Placa	111
4.2.2 Disculpas Públicas	111
4.2.3 Nombrar una parada de Eco-vía	111
4.2.4 Publicación de la Sentencia	111

4.2.5 Tratamiento médico y psicológico.....	112
4.2.6 Investigación, juicio y sanción.....	112
4.2.7 Capacitaciones en Derechos Humanos	113
4.2.8 Indemnización.....	113
4.2.9 Daño material.....	114
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES	119
BIBLIOGRAFÍA	121
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.2

ABREVIATURAS

CORTE IDH	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
SIDH	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos
MRTA	Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
ONU	Organización de Naciones Unidas
SIE	Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú
CPPP	Código de Procedimientos Penales de Perú
LOSEE	Ley Orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano
CVRD	Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
CVRC	Convención de Viena sobre Relaciones Consulares
CVE	Comisión de la Verdad de Ecuador
CVRP	Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú

INTRODUCCIÓN

Varios reportajes y artículos periodísticos se han efectuado sobre la desaparición en Perú del Sargento y agente diplomático Enrique Duchicela, resaltando en todos ellos, la hipótesis de que habría sido detenido y ejecutado por miembros del Ejército peruano, debido a las actividades de espionaje que presuntamente desempeñaba en favor del Estado ecuatoriano.

La primera vez que llegó a mi conocimiento lo acaecido al Sr. Duchicela, fue en una clase de Derecho Penal en la PUCE, despertando gran asombro y dudas. Al participar como pasante en el Centro de Derechos Humanos de la PUCE, me hallé con la sorpresa de que el caso era patrocinado por el Centro y me fue brindada la posibilidad de participar en el equipo que trabajaba en el mismo.

Generalmente, la palabra espía o espionaje conecta la imaginación con un supuesto de aventura, arte o peligro, en el que siempre el espía siempre resulta victorioso; mas, el estar en contacto con un genuino caso vinculado al espionaje, puso en evidencia el desamparo bajo el cual trabajan estos seres humanos reales, no nacidos de ficción.

Sin duda, el espionaje ha sido una herramienta recurrente y aprovechada por los Estados; sin embargo, en esa concepción emerge el serio problema de atribuirle al espía la calidad de instrumento, despojándolo de su condición de ser humano y generado, por tanto, la vulneración de sus derechos humanos.

¿Cuáles fueron los derechos humanos que le fueron vulnerados al Sr. Duchicela y su familia?, ¿hubo de parte del Estado ecuatoriano y del Estado peruano acciones y omisiones que generaron la vulneración de sus derechos humanos?, ¿cuáles eran las obligaciones que debían observar los dos Estados en virtud de la calidad de agente diplomático del Sr. Duchicela?, y más allá, ¿cómo deberían ser reparadas la esposa e hijas del Sr. Duchicela?

El trabajo desarrollado en esta tesina pretende dar respuesta a estas preguntas; para lo cual, la misma se ha distribuido en cuatro capítulos que comprenden la descripción de los hechos, el análisis de los derechos humanos vulnerados, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, las posibles medidas de reparación; y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Esta estructura responde al objetivo planteado de elaborar y presentar una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en base a lo construido en esta tesina.

Desde el punto de vista de las fuentes, esta tesina se sustenta en referencias bibliográficas, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diversas entrevistas mantenidas con la Sra. Martha Escobar, y los distintos expedientes derivados de los procesos judiciales emprendidos a nivel nacional en el Caso.

Con expectativa, anhelo que éste trabajo represente un aporte para que la Sra. Escobar e hijas alcancen la justicia por la que han luchado por 25 años y, estableciéndose el pendiente de que se plantee un régimen de protección para las personas que realizan actividades de espionaje.

CAPÍTULO I

CASO ENRIQUE DUCHICELA

A lo largo de este capítulo, se realizará una exposición de los hechos que rodean el caso de la desaparición del Sr. Enrique Duchicela con el fin de analizar más adelante, si tanto el Estado peruano como ecuatoriano incurrieron en responsabilidad internacional por la vulneración de los Derechos Humanos de este agente diplomático.

1.1 Principales antecedentes históricos

Desde 1830, a raíz de la disolución de la Gran Colombia, entre Ecuador y Perú nacieron tensiones debido a problemas limítrofes, los cuales desembocaron en conflictos armados. Entre estos podemos nombrar el conflicto bélico de 1941 que llega a su fin el 29 de enero de 1942, tras la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro.

En agosto de 1960, José María Velasco Ibarra –Presidente del Ecuador- declaró nulo el Protocolo de Río de Janeiro.

En enero de 1981, se dio el conflicto de Paquisha por el ataque del Ejército peruano a los destacamentos de Paquisha, Mayaycu y Machinaza. El último enfrentamiento bélico se dio en enero de 1995, en la llamada “Guerra del Cenepa”. Estas tensiones tuvieron lugar hasta que el 26 de octubre de 1998, ambos Estados firmaron un Acuerdo de Paz.

En este contexto en 1978, se organizó en Ecuador el Batallón de Inteligencia Militar y la Escuela de Inteligencia del Ejército del País, conformándose en 1983 el grupo de Inteligencia Militar, *“cuyas actividades se intensificaron aún más durante el gobierno de León Febres Cordero que había proclamado la teoría de la “herida abierta” en cuanto al conflicto con el Perú y que, en lo interno, se disponía también a enfrentar la acción de grupos subversivos”*¹.

¹ INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, Ecuador 2010, Tomo III, p 516.

En 1981, el Conflicto Armado entre Ecuador y Perú agudizó la pugna entre los dos Estados por la obtención secreta de información que pudiera generar una ventaja militar en caso de que a posteriori surgiera un conflicto armado, el cual efectivamente se llegó a dar en 1995².

Mientras en Perú, entre 1980 y 1992, se libraba un conflicto interno entre los grupos disidentes "Sendero Luminoso" y "Movimiento Revolucionario Tupac Amaru" (MRTA) y las fuerzas militares y policiales del Estado³. Dado las situaciones de violencia, el Estado peruano decretó un estado de excepción en varias zonas del País, amparado en la Constitución de 1979, que facultaba a los miembros del Ejército a ejercer funciones de control del Orden Público. Este conflicto dejaba a su paso la muerte y desaparición de miles de personas cuyos familiares presentaban sus denuncias en muchos de los casos.

Al respecto en uno de sus informes sobre las desapariciones forzadas en Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta:

La Comisión ha recibido una gran cantidad de denuncias de casos de desapariciones en Perú, muchos de los cuales incluyen en la misma denuncia a varias personas desaparecidas. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú de 1993, la Comisión planteó el problema de las desapariciones forzadas de personas ocurridas en ese país y señaló que ya para esa fecha había adoptado 43 resoluciones en relación con casos individuales, que afectaban a 106 víctimas. Con posterioridad a esa fecha, la Comisión ha seguido emitiendo Informes al respecto. Además, el propio Estado peruano ha reconocido oficialmente el fenómeno de las desapariciones forzadas y ha dado cuenta de 5.000 denuncias sobre desapariciones en el período comprendido entre 1983 y 1991. El elevado número de denuncias del mismo tenor es un indicio evidente para la Comisión de que las desapariciones en Perú respondían a un patrón oficial diseñado y ejecutado en forma sistemática. Dicho indicio se ve reforzado por el hecho de que, dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, establecido en

² Cfr. EL COMERCIO. *La Desaparición de un Espía Ecuatoriano*. 5 de diciembre de 2004. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 576.

³ Cfr. CIDH, INFORME N° 49/00, Caso 11.182 -Adolfo Gerbert Asencios Lindo, Rodolfo Dynnik Asencios Lindo, Marco Antonio Ambrosio Concha y Carlos Florentino Molero Coca – Perú, 13 de abril de 2000.

1980 por la Comisión de Derechos Humanos, había recibido 3.004 casos sobre desapariciones forzadas ocurridas en Perú⁴.

1.2 Hechos del Caso

1.2.1 Perfil de Enrique Duchicela, el hombre tras el uniforme.

ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ nació en Riobamba- Ecuador el 22 de agosto de 1951⁵. Fue el segundo de 6 hermanos en el matrimonio entre el Sr. José Duchicela y la Sra. Ángela Hernández, destacándose como un hijo y hermano responsable tanto en el ámbito familiar como en sus estudios.

Era un niño inquieto y en su despertar al mundo, se educó en la Escuela Juan Bernardo de León. En su juventud, se desarrolló en el Barrio “La Dolorosa” del Cantón Riobamba.

Enrique Duchicela era un hombre apasionado que disfrutaba tanto de la fotografía como del dibujo, pues le gustaba plasmar para siempre aquellas escenas inolvidables o aquellos paisajes que siempre le generaban asombro.

El andinismo le transportó a altas cumbres, que coincidían con el carácter bien disciplinado que sustentaba su persona. Siendo un hombre propiamente sociable y alegre, se integró al “Movimiento Juvenil de Cumbres del Chimbo”, de forma que con sus amigos abrazaron la victoria de cumplir su meta de conquistar el Tungurahua, Chimborazo, Carihuaairazo, y otras.

Enrique Duchicela añoraba una familia, sueño que concretó cuando contrajo matrimonio con doña Marta Rosario Escobar Andrade⁶, quien lo cautivó con su belleza y esencia. El fruto de este amor, vino al mundo para traer alegría a este hogar. Las niñas Jessica y Paulina

⁴ CIDH, INFORME N° 44/00, Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú, 13 de abril de 2000.

⁵ PARTIDA DE NACIMIENTO DE ENRIQUE DUCHICELA. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

⁶ PARTIDA DE MATRIMONIO ENTRE ENRIQUE DUCHICELA Y MARTA ESCOBAR. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

Duchicela, de 9 y 4 años respectivamente⁷, transformaron el mundo de sus padres, ya que ahora tenían nuevos amores por quienes luchar y esforzarse.

De ahí que como padre, el Sr. Duchicela fue profundamente tierno y amoroso, de manera que, no le costaba tornarse un niño para jugar junto a sus hijas e incursionar en un mundo de cuentos mágicos. Sin embargo, también inculcaba a sus hijas a ser disciplinadas, estudiosas, subrayándose que a la pequeña Paulina, con tan solo 4 años, le enseñó a leer durante los tres meses de vacaciones que vivió en Lima. Pero a su vez, era un padre que se complacía en mostrar a sus hijas la belleza de la naturaleza, por lo que las llevaba junto a su esposa de excursión al río los fines de semana.

Martha Escobar trae a su memoria la voz de su Enrique, levantándose a trotar a las 5 de la mañana y la imagen de él a su retorno, tampoco ha dejado ir aquel recuerdo del hombre carismático que era su esposo, quien no se perdía en los partidos de fútbol del barrio la oportunidad de frustrar el gol del equipo contrario al extenderse como arquero o defensa. Sin duda, Martha identificó en su amado Enrique una alegría y gracia particular que lo llevaba a ser el que fomentaba la unidad en el hogar y con los compañeros.

En lo profesional, Enrique siempre albergó el sueño de pertenecer a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y aun cuando su familia no disponía de recursos suficientes, el 13 de julio de 1971, ingresó a la Fuerza Aérea en calidad de alumno, graduándose como soldado el 16 de marzo de 1972⁸. En la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea, se ganó un espacio como instructor, a causa de su sobresaliente desempeño; y, los que fueron sus alumnos, hoy lo recuerdan con mucho respeto por ser un gran instructor, deportista y buen amigo.

En 1972, Enrique Duchicela empezó a formar parte de las Fuerzas Aéreas del Ecuador, donde se desempeñó en labores varias. Dentro de su carrera al interior de las Fuerzas Aéreas fue entrenado y capacitado en la Escuela Nacional de Inteligencia en ámbitos como

⁷PARTIDAS DE NACIMIENTO DE PAULINA Y JESSICA DUCHICELA. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

⁸ CURRÍCULUM VITAE DEL SEÑOR DUCHICELA. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 214.

Inteligencia Militar, Historia Ficticia y Caracterización⁹; y fue becado por el Estado para prepararse en Chile en Inteligencia Aérea¹⁰.

Enrique siempre fue un hombre esforzado, por lo que estudiando en sus horas libres después del trabajo, alcanzó el título de Contador Público la Universidad Técnica Equinoccial, y egresó de la Escuela de Administración y Cooperativas.

Su anhelo de superarse era grande, lo que se reflejaba en el tiempo que dedicaba a autoeducarse, lo cual le facilitó el ser aceptado en la Universidad Ricardo Palma de Lima, donde culminó su curso de Docencia Universitaria, Investigación Científica y Metodología.

1.2.2 Sucesos relativos a la Desaparición del Sr. Duchicela

Mediante Decreto Ejecutivo N.- 084, publicado en el Registro Oficial N° 1613-R del 17 diciembre de ese 1986, el ya Sargento Primero de Aviación Aérea del Ecuador, Enrique Duchicela, fue nombrado Ayudante Administrativo en la Agregaduría Aérea de Lima-Perú, cargo que debía desempeñar entre el 11 de enero de 1987 y junio de 1988¹¹.

De manera oficial, el Sr Duchicela realizaba las actividades determinadas para el cargo asignado, mas en el fondo cumplía a cabalidad la misión encomendada por el Estado ecuatoriano de acceder a información reservada y útil en aquel momento para el Estado¹². Esta misión consistió en comprar y filtrar información proveniente del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército de Perú) durante todo el año de 1986 y los primeros meses de 1987.

⁹ Currículum Vitae del Señor Duchicela, op. Cit., foja 214.

¹⁰ OFICIO NR.AH-1-0-80-155. 13 de noviembre de 1980. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 153 y 173.

¹¹ ACCIÓN DE PERSONAL. Incorporados al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 277.

¹² DIARIO LA REPÚBLICA DE PERÚ. 05 de marzo de 2010, Declaración de Jesús Sosa: “[Duchicela] tenía una red de agentes de inteligencia que habían sido captados para entregar información sobre armamento, logística y disposición del teatro de operaciones del norte (Ecuador), del teatro de operaciones del sur (Chile), así como de la disposición de la base de La Joya, en Arequipa, además del listado de los agentes de inteligencia que trabajaban en el exterior, específicamente en Ecuador y Chile. Era información de inteligencia que el vendía a Duchicela”. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 336.

En 1987, las autoridades pertinentes del SIE iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de la fuga de información al interior de su Ejército.

En 1988, una red de espionaje financiada por Ecuador y con integrantes que pertenecían al SIE fue descubierta por el departamento de Contrainteligencia SIE-27. En los resultados de la investigación se logró identificar al Subteniente peruano Marco Barrantes –quien desempeñaba funciones en el SIE- como el contacto directo que proveía de información al Sargento ecuatoriano Enrique Duchicela¹³.

El 18 de marzo de 1988, Marco Barrantes -Teniente de reserva de Fuerza Terrestre peruana- desapareció. En mayo de 1988, cuando a Barrantes ya se le consideraba un desaparecido, fue enjuiciado junto con otros siete militares por delitos contra el honor y seguridad de la Nación.

A mayo de 1988, el Sr. Duchicela residía solo en Lima-Perú cerca de la Embajada del Ecuador, en la dirección Garcilazo de la Vega No 2583; sin embargo, permanecía en contacto permanente con su esposa -la Señora Marta Rosario Escobar Andrade- y sus dos hijas -Jessica y Paulina Duchicela Escobar-, quienes vivían en Quito.

El viernes 27 de mayo de 1988, a las 16:00, la Sra. Marta Escobar recibió una llamada del Sargento Duchicela en la que él le confirmó que le enviaría el pasaje aéreo para que viaje a Lima el sábado 4 de junio. Este fue el último contacto que la Sra. Escobar tuvo con su esposo, quien ya no se comunicó con su esposa el domingo 29 de mayo, como lo había prometido.

En el transcurso del viernes 27 de mayo, el Sr *Duchicela* “*no acudió a su lugar de trabajo a cumplir con sus labores respectivas en la Embajada*”¹⁴, siendo que debía presentarse a las

¹³ Cfr. DIARIO PERUANO LA REPÚBLICA. 06 de febrero de 2007. *Declaración juramentada de Jesús Sosa*. , recogida en el Artículo “Ex agente confiesa la eliminación de espías peruano y ecuatoriano”. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha.

¹⁴ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS. Sección B, Párrafo 1. 21

18:00 para realizar la guardia aquella noche. El lunes 30 tampoco se presentó a laborar, llamando la atención de compañeros y autoridades por su posible desaparición¹⁵.

Lunes 30 de mayo (11:30 am), el Jefe inmediato del Sto. Duchicela –Coronel Palacio- informó al Sr. Embajador sobre la desaparición del Sr. Duchicela, esto es tres días después de la desaparición.

La Sra. Duchicela solicitó información a la Embajada ecuatoriana sobre la situación de su esposo, que de forma ligera tan solo le indicaban que el Sr. Duchicela está de misión, lo cual no era cierto. <<Ese mismo día Marcelo Rosero, [...] se comunicó con ella diciéndole:

yo quiero aconsejarte que no vengas [...] no quiero que vengas a ver lo que está sucediendo aquí con Enrique [...] él te está traicionando, está con otra mujer>>¹⁶

Transcurridos 5 días de la desaparición, el martes 31 de marzo, el Embajador Ayala delegó al Agregado Aéreo y Cónsul General de Lima la realización de las gestiones para confirmar los indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar de Perú.

Ese 31 de mayo, también la Cancillería ecuatoriana fue informada, por télex 181 del Embajador Ayala¹⁷, que el Sargento Duchicela desapareció desde el viernes 27 por la tarde y que el martes 31 a las 10:00 am, se presentaron indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar del Perú siendo así dice le parece indispensable que la Cancillería coordine acciones con las Autoridades Militares pertinentes del Ecuador; a su vez, que se informe a Torre Tagle (El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú), dejando constancia documentada de la información para obtener el esclarecimiento del caso.

de junio de 1988. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 697.

¹⁵ Cfr. Ibídem, foja 627.

¹⁶ INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, op. cit., p 519.

¹⁷ Cfr. TÉLEX 181. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 636.

El miércoles 1 de junio, con télex 182¹⁸ y 185¹⁹, la Embajada de Ecuador en Lima informó haber iniciado gestiones **informales** ante la Cancillería peruana ante Torre Tagle para obtener cooperación en la búsqueda del Sr. Duchicela. Así también que autorizó aceptar las intervención de la División de Desaparecidos de Policía de Investigaciones que actuaría con recomendación especial del Viceministro del Interior y en absoluta reserva.

El viernes 3 de junio, el Embajador Lasso señaló al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en el télex 190²⁰:

[...] que habiendo transcurrido una semana sin que la investigación reservada haya dado resultados conviene pedir a las autoridades peruanas que se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción. Agradeceré autorización expresa para proceder en este sentido.

Ese 3 de junio de 1988 en Ecuador, la Sra. Escobar se dirigió a la oficina del Jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana - Coronel Jaime Amaya-, quien admitió en presencia del compañero del Sr. Duchicela- Sr. Cornelio Álvarez- que Enrique estaba en poder del Ejército Peruano; e incluso, la Sra. Escobar pudo escuchar al Cnel. Amaya que en conversación con el Ministro de Defensa le solicitaba autorización para dar a conocer esta información a la Sra. Marta pues los medios de comunicación empezaría a presionar según la Sra. Escobar ha relatado en su Declaración Juramentada²¹:

¹⁸ TÉLEX 182. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 638.

¹⁹ TÉLEX 185. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 637.

²⁰ TÉLEX 190. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 646.

²¹ Cfr. NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR, *Declaración Juramentada realizada por Dra. Marta Rosario Escobar Andrade*, 23 de abril de 2013, pp 3 y 4.

Me fui a la oficina del Coronel Jaime Amaya, Jefe de Inteligencia, él estaba hablando por teléfono diciendo: “escuche esto mi General, quiero autorización para hablar con la señora, decirle lo que pasa, además, la prensa ya sabe y me están presionando”; yo pensé no debe tratarse de mí. Ese mismo instante llamó al Ministro de Defensa y le dijo lo mismo; no había otra señora en esa oficina, mi corazón latía. Yo pensé fue verdad que se descubrió que Enrique estaba con otra mujer, eso era prohibido para los militares que estaban en funciones diplomáticas, y hoy se enteraron, ¿que grave será y qué pasará?

Cuando me paré porque mi corazón latía rápidamente, el Coronel Amaya le dijo: “Señor Ministro, este momento voy a hablar con la señora y luego lo llamaré”. Cerró el teléfono y se dio la vuelta y me dijo “no hay el negro [...]”, yo le dije ¿“lo cogieron, lo cogieron”, y me dice “quién?”, le dije: “cómo que quién?, los peruanos!”, hablé desesperada lo que sabía, el Coronel Amaya se admiraba de que yo sepa el peligro que corría en ese País mi esposo por el hostigamiento de los peruanos a los ecuatorianos. Él con su mirada me dijo que hizo?!, que dijo?!, ese momento recordé cuánto Enrique me había advertido que era entre marido y mujer, que no contara ni comentara con nadie; bueno, la desesperación me hizo hablar.

Tras esta escena, el Coronel Amaya prometió a la Sra. Escobar recuperar a su esposo siempre y cuando ella colabore con discreción y no hable con nadie pues decía que la vida de Enrique Duchicela estaba en juego. En pos de este propósito, instruyó a la Sra. Escobar que no salga de su domicilio explicándole que los peruanos le podrían estar filmando a ella y sus hijas con el afán presionar con la cinta a Enrique Duchicela para que hablara. Al segundo día, le citó a las 11:00 am a una reunión con el Presidente de la República y los Ministros de seguridad del Estado, sobre lo mencionado cito las palabras de la Sra. Marta Escobar:

*El Coronel Amaya me solicitó que todo lo que dije lo repitiera al segundo día, sábado a las 11:00, en una reunión entre el Sr. **Presidente León Febres Cordero** y los Ministros de Seguridad por la gravedad del caso. El Coronel decía que estaban haciendo todo para un canje pero que entienda que él no era un hombre cualquiera, que está en peligro un país, que era muy delicado, que alguna imprudencia mía sería motivo para que el Perú presione a Enrique a hablar, ya que nos podían estar grabando y ésta sería una forma de presión, pues Enrique físicamente podía soportar, menos que amenacen a su familia y entonces sí él se debilitaría, razón por la que no debíamos viajar a Lima por el peligro que correríamos, que vaya a casa a cuidar a mis hijas, que ellos lo retornarán a Enrique y que les deje a ellos trabajar.*

*Recuerdo que me pusieron una inyección, me fui a mi casa, desesperada, tenía mucho miedo de que cometa alguna imprudencia.*²².

Mientras la Sra. Escobar, sumida en la desesperación, hacía cuanto estaba a su alcance para llegar al fondo de lo sucedido y recuperar a su esposo; el caso se manejaba con reserva al interior de las Instituciones ecuatorianas llamadas a actuar respecto a lo sucedido.

El 6 de junio, con télex 190-a, la Embajada informó haber dirigido a Torre Tagle la nota 4-2-121/88²³, solicitando resultados de la investigación sobre la desaparición del Sargento Duchicela. Con télex 196²⁴, la Embajada del Ecuador informó a MRE de Ecuador que el Viceministro de Relaciones Exteriores del Perú había comunicado vía telefónica que el caso Duchicela había sido llevado a conocimiento del Presidente del Perú, Alan García.

El 8 de junio, en télex 200²⁵, el Embajador Ayala puso en conocimiento de la Cancillería ecuatoriana que el “*Ministro del Interior al conocer que el Ecuador había resuelto levantar la reserva que rodeaba la investigación del caso solicitó que se mantenga dicha reserva hasta cuando se encuentren los primeros indicios*”.

El viernes 10 de junio de 1988, en respuesta al télex 190-a del 6 de junio, el Canciller del Perú -Luis González Posada- contestó a la Nota de la Embajada de Ecuador en Lima que:

[...] la Cancillería ha cumplido con transmitir toda la información del caso a las autoridades pertinentes [...]

²² NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR, *Declaración Juramentada* [...], op.cit., p 4.

²³ NOTA 4-2-121-88, dirigida al Sr. Ministro. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 650.

²⁴ TÉLEX 196. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 649.

²⁵ TÉLEX 200. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 511.

El 13 y 27 de junio, 26 de septiembre y 26 de diciembre de 1988, con las notas 4-1-312, 4-1-332, 4-1.527 y 4-1-703, la Embajada comunicó al MRE de Ecuador sobre las investigaciones y respuestas de Perú sin resultados positivos.

De su lado, el 6 de junio de 1988, la Sra. Escobar acudió al Ministerio de Defensa de Ecuador preocupada por la reunión programada con las altas autoridades del Ministerio para el sábado 4 de junio, la cual no se realizó por el accidente de avión sufrido por varios miembros de la Fuerza Aérea el 3 de junio.

Pasaron los días y la Sra. Duchicela se entrevistó con el Coronel Joel Hidalgo del Ministerio de Defensa (ante la negativa del Coronel Amaya de recibirla), quien le dice que el Sargento Duchicela dejó una carta informando que no regresará a su País y lo dejará todo por su nueva relación con la Sra. Marta Gonzales. Basándose en la supuesta carta, que nunca apareció, el Ministerio de Defensa sostuvo ante la Sra. Marta Escobar que el Sr. Duchicela había desertado y huido con una amante.

Tiempo después, la Sra. Escobar acudió al domicilio del Embajador José Ayala Lasso, quien le dijo que se había formulado la hipótesis de que el Sargento Duchicela fue capturado por el Ejército peruano, cuando en Cablegrama del 1 de junio aseguraba esos indicios se habían desvanecido.

El 1 de julio de 1988, el Embajador Ayala entregó –de forma informal- al Presidente del Perú la carta escrita el 21 de junio de 1988 por la Sra. Escobar. En la carta²⁶, se expresaba la situación dolorosa que estaba atravesando y le solicitaba por humanidad, que disponga se ejecuten todas las gestiones pertinentes para solucionar lo ocurrido.

Del 21 al 24 de julio de 1988, es decir aproximadamente 2 meses después de la desaparición, se ejecutaron las actividades de investigación de los dos oficiales Superiores asignados por el

²⁶ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS. *Carta de Marta Escobar Dirigida al Presidente de Perú Alan García*. Anexo j, op. cit., foja 697.

Comandante General de la FAE para ese propósito, de la cual supuestamente no hubo resultados positivos, según el informe de la Dirección de Inteligencia de FAE –suscrito por el Crnl Luis Cárdenas²⁷. Cuando en este informe ya se reportaba de forma certera que el Sr. Duchicela había sido detenido por los Servicios de Contrainteligencia peruano, estableciendo entre sus conclusiones:

1. *Las Agregaduría Militar, Naval y Aérea, a la Embajada del Ecuador, han desarrollado actualmente y en el pasado, actividades de colección de información, en forma ilegal.*
4. *El Sargento Enrique Duchicela fue detenido por un Servicio de Contrainteligencia local; debido, a sus esfuerzos dedicados a la colección de información*²⁸.

La Sra. Escobar acudió también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecuador, siendo que el Presidente de dicha Comisión, Julio Prado Vallejo, se dirigió, el 21 de noviembre de 1988, al Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Dr. Diego Cordovez, con el fin de adoptar las medidas más convenientes dado que, en sus palabras:

*[...] estaba “en juego el irrenunciable derecho a la vida de un ciudadano ecuatoriano en un país extranjero, y la consiguiente obligación del Estado para proteger su integridad personal, tanto más que el afectado disponía de un status diplomático*²⁹.

Ya para el 21 de diciembre de 1988, la versión de que el Sargento Duchicela había desertado por una relación sentimental extra marital se tornó pública cuando el Ministro de Defensa de Ecuador, Jorge Félix, ante la pregunta de una periodista sobre el Sr. Duchicela, durante una rueda de prensa, declaró que:

Lo que sabemos y le podemos decir a la familia es que tengo la información, y desgraciadamente tengo que decirlo, que de las investigaciones realizadas en Lima, el sargento desapareció con una

²⁷ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección C, párr. 1, foja 27.

²⁸ INFORME DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE LA FAE. 14 de julio de 1988. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 240 y 241.

²⁹ OFICIO 034-88. Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ministro de Relaciones Exteriores, 21 de noviembre de 1988. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 546.

mejor”³⁰. Fue así que se dejó sentada como versión oficial de las Fuerzas Armadas que el Sargento Duchicela se fugó con otra mujer y su desaparición tenía raíz en problemas sentimentales; conclusión a la que habían llegado después de las investigaciones realizadas en Perú.

Durante este tiempo, la Sra. Duchicela tuvo una reunión con el Presidente del Ecuador - León Febres Cordero-, quien en su domicilio y de mal agrado le reprochaba si acaso quiere ver que se derrame sangre solo por un hombre.

Terminado el período de Febres Cordero, Marta Escobar concertó una cita con el electo Presidente de la República – Rodrigo Borja³¹-, quien ofreció ahondar en el caso e indagar la verdad por dolorosa que fuera, sin realizar lo prometido.

Mas, dada la pasividad de las Autoridades ecuatorianas, la Sra. Escobar decidió viajar a Perú a investigar la verdad según lo ha relatado:

Me fui a Huaquillas, revisé como pasarme a Perú para averiguar y pagar a algún militar peruano a que me cuente que ha escuchado, qué pasó con mi esposo; solo se pasaba con la cédula, al tercer día crucé por el puente y en la cadena me detuvieron tres personas que me dijeron vamos acá y me llevaron a una caseta que estaba cerca o junto al puente, me dijeron que para qué cruzaba al Perú, que ellos sabían quién era, yo les dije que iba a comprar una falda, me dijeron despóticamente que si no declaraba para qué me había ido que me llevarían a Iquitos a que declare, que les de nombres de informantes. Me puse nerviosa, pensaba en mis hijas; me quitaron la cartera me revisaron todo, incluso los bolsillos y todo pusieron sobre una mesa, yo les dije “ustedes saben quién soy, de acuerdo, si me detienen se hará un bullón hasta que me devuelvan a mi esposo, miren yo estoy protegida por los Derechos Humanos, ellos saben que estoy aquí”, me dijeron “sí, sabemos que anda con cinco personas más, quiénes son?”, yo les dije “familia y de los Derechos Humanos, ustedes son tres, les propongo, repártanse los dólares que llevaba para los tres y déjeme en la cadena en mi país y no ha pasado nada, mi esposo trabaja como ustedes y hoy cayó en desgracia, y su país lo paga mal”. Fueron a hablar entre ellos, me dijeron bueno, me entregaron un poco de intis que era la moneda de ese tiempo, mis papeles y la cartera, salimos y me dijeron “compra la falda que dijiste que quieres

³⁰ *TÉLEX INNUMERADO. Dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. * Nota de prensa diario la República de Perú. *Diversas notas de prensa de Diarios ecuatorianos. Incorporados al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, fojas 556, 557, 559 a 563.

³¹ Marta Escobar también envió una Carta dirigida al Presidente Rodrigo Borja: Incorporados al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 272 - 275.

comprar”, yo les dije que ya no quería y con prepotencia me dijeron “compra”. Yo cogí un vestido y ellos me dijeron “fue una falda. No?”. Le ordenaron al vendedor que me den una falda y punto. Lo compré y me pusieron en la cadena.

*Esos momentos fueron muy difíciles para mí porque temía que me pase algo como ya me habían advertido en mi país, y qué pasaría con mis hijas?*³²

El 18 de junio de 1991³³, el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha declaró la muerte presunta del Sr. Duchicela por la desaparición³⁴. Con esta declaración el Estado ecuatoriano proclamó el ascenso Post-Mortem³⁵ del Sr. Duchicela a Suboficial Segundo.

Años después, la Sra. Escobar recibió una llamada del jefe directo del Sargento Duchicela en la Embajada de Ecuador en Perú - Coronel Marco Palacio- con el propósito de concertar una reunión con ella; sin embargo ya citados, el Cnel. Palacios tan solo sacó a relucir su pretensión de amenazar a Marta Escobar, dejándole claro que si no acepta que Enrique Duchicela había huido con otra mujer la involucraría en drogas. Al respecto la Sra. Escobar ha declarado:

*El Coronel Marco Palacios me dijo “quiero hablar con usted” [...], yo le dije que sí, me dijo **“no avise a nadie**, yo le voy a ver en el trabajo, en mi carro a las 4pm [...].*

*Efectivamente, a esa hora nos encontramos, me invitó a que subiera en su carro, lo hice [...] yo le dije, “lo que vamos a hablar es muy delicado, creo que si me dice en el carro me da igual”. Me dice “¿sabe con cuántas mujeres ha estado Enrique!?”, yo le contesto “¿todas mujeres?”, él me dice “con 7 mujeres”, [...] Y qué tiene que ver con su desaparición?”, ‘el me dice “usted ha sido muy testaruda. **Si no acepta que se ha ido con una mujer, yo lo voy a involucrar en drogas**”; yo le digo “hágalo, pero piense bien lo que va a hacer. Usted va a enlodar no solo el nombre de un hombre, sino de su institución, que es la FAE. Mi esposo llevaba el mismo uniforme que el suyo. Usted va a escupir al cielo para que le caiga en la misma cara. Hágalo porque ahí sí saldrá la verdad, porque me voy a los Derechos Humanos”. Ahí me dijo: **“¿sabe quiénes acuden a los Derechos Humanos?, los***

³² NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR, *Declaración Juramentada* [...], op.cit., p 15 y 16.

³³ ACTA DE DEFUNCIÓN DE ENRIQUE DUCHICELA. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador

³⁴ DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA. Sentencia del Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha, 18 de junio de 1991.

³⁵ DISPOSICIÓN DEL COMANDO GENERAL. Publicada en la Orden General de la Fuerza Aérea, 18 de junio de 1991. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 186 y 187.

terroristas y no le da miedo ser apresada como guerrillera?”. Yo le dije “Coronel en qué tiempo cree usted que está?. No estoy botada, usted cree que yo no avisé que usted me llamó y que me citó a estas horas? Mi gente me vio que me subí en este carro”. Yo le dije “mire, tengo recomendaciones como éstas” y le saqué la tarjeta del Dr. Borja y le dije es hora que me baje porque mi gente se estará preocupando; él me dijo “que pena Enrique desaparecido y su esposa loca”, yo le dije “porqué? Ya quisieran que me vuelva loca pero a pesar del dolor estoy bien cuerda”. Me dijo “si usted cuenta lo que le he dicho lo negaré y les diré que está loca”. Paró el carro y abrí la puerta y me bajé del carro. Al segundo día me fui a la Fuerza Aérea a contarles lo que el Coronel Palacios me dijo, que le iban a involucrar en drogas, que por esa razón yo me voy a los Derechos Humanos, ellos movieron la cabeza y me dijeron que haga lo que yo quería pero que igual me atenga a las consecuencias³⁶ (la negrita es mía).

9 años después, no se realizó diligencia alguna hasta el 15 de diciembre de 1997, fecha en que mediante oficio N.-23024-046-501-DGAHM-DTDHR, suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores el 24 de noviembre de 1997, se requirió información sobre supuestas desapariciones de ciudadanos durante el conflicto bélico Ecuador –Perú en 1995; esto por la gestión de la Sr. Escobar con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Entre amenazas, infructuosas entrevistas con Autoridades ecuatorianas, y finalmente la indiferencia del Estado frente al caso; en el año 2000 el Sr. Periodista peruano Ricardo Uceda realizó una llamada a la Sra. Escobar, asegurándole tener información certera sobre lo ocurrido con Enrique Duchicela e informándole que realizaría una publicación al respecto, después no se volvió a contactar más hasta el día previo a la efectiva publicación del libro.

En el 2004, Ricardo Uceda publicó el libro “*MUERTE EN EL PENTAGONITO. Los cementerios secretos del Ejército Peruano*”, cuyo capítulo VIII, titulado “*El espía que no regresó a Quito*”³⁷, relata lo ocurrido al desaparecido Sargento Duchicela.

En lo concerniente al caso, este capítulo describe los hechos desde que Jesús Sosa es convocado por el Coronel Oswaldo Hanke a una reunión con el Jefe del SIE-2 –Harry Rivera

³⁶ NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR, *Declaración Juramentada* [...], op.cit., p 12 y 13.

³⁷ UCEDA, Ricardo. *Muerte en el Pentagonito. Los Cementerios Secretos del Ejército Peruano*. Bogotá, Editorial Planeta, 2004.

– cuyo resultado es la encomienda de la misión de secuestrar a Duchicela, hasta que tras un minucioso seguimiento y ágil operativo, el Sr Duchicela es capturado el 27 de mayo de 1988, torturado, ejecutado junto a Marco Barrantes el 10 de junio de ese año y finalmente, sus cuerpos incinerados el 11 de junio en las instalaciones del SIE.

El Periodista asegura que la información fue obtenida a partir de la entrevista directa con Jesús Sosa, autor del delito perpetrado contra el Sr. Duchicela, quien a futuro en una declaración dada a las Autoridades peruanas confirma su participación en el delito.

El 17 de agosto de 2008, el Viceministro de Defensa de Ecuador –Miguel Carvajal- en comunicación telefónica con el Diario EL COMERCIO, pronunciándose respecto al testimonio de Jesús Sosa en el Juicio contra Fujimori, dijo: *“Siempre existió la sospecha de que esa desaparición podía involucrar a las fuerzas de seguridad en el Perú [...]”*³⁸.

El 20 de noviembre de 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1446³⁹, el Suboficial Segundo Enrique Duchicela fue proclamado Héroe Nacional, ejemplar militar y ciudadano, paradigma de las generaciones que le sucedan.

El 8 de marzo de 2010, el Embajador de Ecuador en Perú –Diego Rivadeneira- comunicó al Subsecretario de Relaciones Bilaterales –Leonardo Arízaga- en nota⁴⁰ reservada CEB.-97/10 que la declaración de Jesús Sosa, en la que admite que junto a otros agentes peruanos plagieron y asesinaron por orden del exjefe del SIE –Oswaldo Hanke- al Sgto. Duchicela, fue aceptada por la Fiscal Alicia Chamorro como parte de la investigación fiscal por el asesinato del Sr. Duchicela. Así dio su opinión en el siguiente sentido:

³⁸ INFORME PRESENTADO POR EL AGREGADO AÉREO, CRNL. EMC. JORGE ESTRELLA VALLADARES AL SR. JEFE DEL CC.FF.AA. GRAD. FABIÁN VARELA MONCAYO, EN RELACIÓN A LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES DIFUNDIDAS EN LIMA- PERÚ SOBRE EL CASO, ENRIQUE DUCHICELA HERNÁNDEZ, Sección 2, punto 1, 17 agosto 2008. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 415

³⁹ DECRETO EJECUTIVO 1446. Incorporado al expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, fojas 55 y 56.

⁴⁰ NOTA RESERVADA CEB.-97/10. 08 de marzo de 2010. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 325.

*Considero fundamental que su familia inicie la respectiva acción penal privada en el Perú. Para ello la embajada a mi cargo podría tomar contacto nuevamente con el estudio jurídico Santiestevan de Noriega para encargarles el caso en cuestión. Sin embargo, es **imprescindible que se cuente previamente con el compromiso de la familia y/o las instituciones nacionales que se encarguen del caso, de correr con el pago oportuno de todos los gastos y honorarios especificados en la nota***⁴¹. (la negrita y la cursiva es nuestra).

1.2.3 Acciones Legales en Perú

En enero del 2007, la participación de Jesús Sosa⁴² en la ejecución extrajudicial del Sargento Duchicela es confirmada por el mismo Sosa por medio su declaración juramentada, la cual obra en el proceso seguido contra Julio Hernán Ramos Hernández y otros por delito Contra la Humanidad- Desaparición Forzada, en agravio de Marco Barrantes Torres.

La declaración de fecha 15 de enero de 2007, consiste en un manuscrito firmado por Jesús Sosa en el que inicia afirmando:

Esta declaración la realizo libremente, sin coacción ni motivación distinta a la que se conozca la verdad”. En su contenido procede a relatar las acciones que emprendió desde que fue contactado por el Jefe del SIE –Coronel Oswaldo Hanke- y el Jefe del Departamento SIE-2 –Harry Rivera- para coordinar el operativo de secuestro al Sr. Duchicela hasta que efectivamente, en el marco de la Operación “Lucero”, lo detuvieron e interrogaron. Durante la declaración, también menciona al Libro “Muerte en el Pentagonito”, aseverando que en su relato los “hechos están descritos con bastante exactitud y veracidad”.

El 10 de diciembre de 2007, se dio inició al juicio contra el ex Presidente Alberto Fujimori, por violaciones a los derechos humanos, con el interrogatorio a ex miembros del Grupo Colina en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú.

⁴¹ CE N.- 97/10. Dirigido a Subsecretaría de Relaciones Bilaterales, 08 marzo de 2010. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 325.

⁴² Jesús Sosa Saavedra es un ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano. “Fue uno de los primeros integrantes del Grupo Colina que se formó durante el régimen de Alberto Fujimori y estuvo a cargo del Mayor EP Santiago Martín Rivas; Sosa participó en todos los crímenes de dicho destacamento, entre ellos las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y El Santa; así como en innumerables desapariciones de miles de personas en Ayacucho; el ex militar era conocido entre sus compañeros con el sobrenombre de “Kerosene” por tener al costumbre de calcinar a sus víctimas”. EL COMERCIO, Ecuador, 03 de abril de 2008. Citado por: Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 413.

El 3 de abril del 2008, Jesús Sosa fue capturado por la Policía peruana.

El 30 de julio del 2008, Jesús Sosa compareció a la sesión pública N.-85 del juicio contra el ex presidente Fujimori, en calidad de testigo, y admitió haber sido autor del asesinato del Sargento Duchicela y Marco Barrantes. Sosa declaró:

En mayo de 1988 fui llamado a Lima donde se me ordenó capturar y desaparecer al Espía ecuatoriano Enrique Duchicela, por orden expresa del Presidente Alan García, orden que fue cumplida totalmente, luego de lo cual fui felicitado por el primer mandatario y por el Comandante General del Ejército. Este interrogatorio a Jesús Sosa fue transmitido en vivo y en directo por el canal de TV de Lima Canal N (Noticias)⁴³.

El 2 de junio de 2009, Jesús Sosa, durante la continuación de su declaración indagatoria, reconoció el contenido y firma de la declaración juramentada de fecha 15 de enero de 2007 y se ratificó en lo que estaba escrito.

Más adelante, en el proceso que se sigue contra Oswaldo Hanke -jefe del SIE- y todos los militares que tuvieron participación en el delito cometido en agravio de Marco Barrantes, la declaración de Sosa no fue admitida por la Jueza Emma Benavidez, quien presidía la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú, por ser extra temporánea mas no por su fondo.

Específicamente en cuanto a la desaparición de Enrique Duchicela, en la Primera Fiscalía Penal Supranacional – Fiscalía de la Nación, se realizó la investigación preliminar signada con el ingreso N.-004-2005, que fue derivada por la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Provinciales mediante oficio múltiple N.- 039-2006. Esta Primera Fiscalía Penal Supranacional avocó conocimiento de la investigación asignándole el ingreso N.-05-2007 y con fecha 14 de marzo de 2007 de folios 508/509, se dispuso proseguir con las investigaciones a nivel de despacho fiscal.

⁴³ Transcripción del interrogatorio a Jesús Sosa Saavedra, transmitido en vivo por el Canal de Tv DE Lima, Canal N (Noticias, 30 de julio del 2008. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 418 a 420.

El 29 de agosto del 2012, la Primera Fiscalía Penal Supranacional dispuso el archivo provisional de la causa por no haber mérito a formular la denuncia por la presunta comisión del delito Contra la libertad Personal –Secuestro y delito contra la Humanidad –Desaparición Forzada en agravio de Enrique Duchicela, esto en tanto no surjan nuevos indicios que permitan reabrir la causa.

Notificada la Sra. Marta Escobar con el auto de archivo provisional, no le ha sido posible continuar el proceso desde Ecuador y el Estado ecuatoriano, conociendo sobre dicho auto, no ha impulsado diligencia alguna ni ha apoyado a la viuda del Sr. Duchicela, dejando ver así su falta de interés.

1.2.4 Acciones legales emprendidas en Ecuador

1.2.4.1 Proceso ante Fiscalía ecuatoriana

En enero del 2005, la Sra. Marta Escobar presentó la denuncia N.- 140-2005 en contra del Estado ecuatoriano por los delitos de omisión y encubrimiento de la desaparición forzada de Enrique Duchicela.

El 16 de octubre de 2008, la Fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, Abg. Clara Aveiga Solórzano, resolvió inhibirse del conocimiento de la causa por falta de jurisdicción, alegando que el delito se ha cometido en Perú y los actores intelectuales y materiales son de Nacionalidad peruana.

En carta del 30 de diciembre de 2008, suscrita por el Fiscal General del Estado Subrogante - Dr. Alfredo Alvear Enríquez- dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador - Fander Falconí-, se puso en conocimiento del Ministro la inhibición de la Sra. Fiscal con el fin de que a través de la Embajada ecuatoriana en Lima se impulsen las acciones penales correspondientes⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. OFICIO N.- 009563. Quito 3 de diciembre de 2008, del Fiscal General del Estado Subrogante al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador.

1.2.4.2 Defensoría del Pueblo

El 13 de agosto de 2008, llegó a conocimiento del Adjunto Primero del Defensor del Pueblo por los medios de comunicación los hechos acaecidos con el Sr. Duchicela por lo que dispuso la apertura de un expediente defensorial de oficio, signado con el número 38964-AP⁴⁵.

El 3 de septiembre del 2008, se remitió una copia a la Sra. Escobar de la providencia del 28 de agosto del 2008 en la cual se dio a conocer el informe⁴⁶ suscrito por el Embajador Gonzalo Salvador Holguín, Asesor Técnico Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, gracias al cual se revelaron los cablegramas intercambiados entre la embajada de Ecuador en Lima y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Ecuador.

El 26 de septiembre de 2008, el Subsecretario de Defensa Nacional remitió a la Defensoría del Pueblo el informe del Señor Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana referente a las acciones tomadas con relación a la desaparición del Sargento Duchicela⁴⁷.

El 8 de marzo del 2010, la Sra. Escobar dirigió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño Aroca, en la que le solicita al Gobierno ecuatoriano realice el seguimiento judicial del caso en el Perú; también, se recuerda al Sr. Ministro que en Perú se encuentra detenido Jesús Sosa, quien presenta una primera declaración asegurando haber desaparecido al Sr. Duchicela.

1.2.4.3 Acción de Protección

El 22 de agosto del 2011, la Sra. Marta Escobar interpuso una Acción de Protección en contra del Ministro de Defensa Nacional –Javier Ponce-, el Ministro de Relaciones

⁴⁵Cfr. Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 35.

⁴⁶ Cfr. INFORME DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN. Incorporado al expediente de la causa 0842 VP de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Juzgado Segundo de Inquilinato de Pichincha, fojas 31 a 40.

⁴⁷Cfr. Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, op. cit., foja 41.

Exteriores Comercio e Integración –Ricardo Patiño Aroca-, el Procurador General del Estado –Diego García Carrión⁴⁸. Por medio de esta acción, la actora impugna los actos y omisiones de la autoridad pública no judicial, consistentes en:

La omisión de iniciar investigaciones, omisión de transmitir los resultados de las investigaciones a Marta Escobar e hijas, omisión de las autoridades ecuatorianas de reclamar por la detención. Así es petición de la Sra. Escobar al Sr Juez que: declare la violación de los derechos a la verdad y a la integridad personal; que obligue a los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración a promover procesos diplomáticos y judiciales dentro del Perú para esclarecer lo sucedido con el Sbo. Enrique Duchicela; se ordene dar toda la información referente a lo sucedido al Sbo Duchicela durante su estadía en Perú; se ordene la reparación integral por el daño inmaterial ocasionado a la Sra. Escobar e hijas por la violación del derecho a la verdad, a la integridad personal, y a la protección judicial, por parte del Estado ecuatoriano.

El 7 de octubre de 2011, el Juez Séptimo de Garantías Penales de Pichincha emitió la sentencia rechazando la Acción de Protección N.- 17257-2011-1084 interpuesta por la Sra. Escobar, alegando no existir la violación de un derecho constitucional⁴⁹.

El 1 de noviembre de 2011, la Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia avocó conocimiento de la causa, cuya sentencia de Primera Instancia es apelada por la Sra. Escobar.

El 18 de abril de 2012, la Corte Provincial de Justicia desestimó el recurso de apelación interpuesto por Mata Escobar y confirmó la sentencia subida en grado⁵⁰, pues a su criterio no existían derechos constitucionales vulnerados.

⁴⁸ AUTO CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, Oficina de Sorteos y Casilleros Judiciales.

⁴⁹ Cfr. SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA, Marta Escobar Duchicela contra el Ministro de Defensa, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y el Procurador General de Estado, Acción de Protección, 7 de Octubre de 2011.

⁵⁰ SENTENCIA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia, 8 de noviembre del 2011. Expediente de la causa 0842 VP de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Juzgado Segundo de Inquilinato de Pichincha, fojas 102 a 104.

1.2.4.4 Acción Extraordinaria de Protección

El 17 de mayo de 2012, la Sra. Escobar interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional debido a la falta de motivación por parte del Juez de la Corte Provincial que desestimó el recurso de apelación, quien sin hacer un análisis y aporte en derecho, se limitó a transcribir los argumentos de ambas partes y las normas jurídicas, concluyendo en las últimas tres líneas de la sentencia que no hubo violación de derechos constitucionales⁵¹.

El 19 de septiembre de 2012, la Corte Constitucional emitió un auto de la acción extraordinaria de protección N.- 0820-12-EP, en la que inadmitió a trámite dicha acción y dispuso su archivo. En su decisión, la Corte alegó que la petición realizada por la accionante versa sobre el asunto que fue motivo de la acción de protección, negada en primera y segunda instancia, cuando en realidad la acción extraordinaria de protección es una acción distinta de la acción de protección⁵².

1.2.4.5 Acciones de Acceso a la Información Pública

El 14 de junio de 2010, la Sra. Duchicela entregó una petición de Acceso a la Información Pública⁵³ en la que le solicitó al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Ricardo Patiño, le haga entrega a su abogado representante de toda la información que repose en los archivos de dicho Ministerio respecto a:

⁵¹Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Acción Extraordinaria de Protección N.-97-2011-MCH. Internet. http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17f48b86-dd27-4946-8ade-b51d14d83b6b/p_i.pdf?guest=true.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Expediente N.-082012 EP. Internet. http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/542e8cd9-5915-4873-b820-7ce39f8d9929/auto_sala_de_admision.pdf?guest=true.

⁵²Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Expediente N.-082012 EP. Internet. http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/542e8cd9-5915-4873-b820-7ce39f8d9929/auto_sala_de_admision.pdf?guest=true

⁵³ EXPEDIENTE DE LA CAUSA 0842 VP DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Juzgado Segundo de Inquilinato de Pichincha, fojas 1- 3.

1) Las actividades del Sbo. Duchicela durante su estadía en Perú, 2) la información recabada por ese Ministerio sobre lo sucedido al Sr. Duchicela desde su desaparición, 3) los nombres de los oficiales superiores que integraban la cadena de mando a la que obedecía el Sbo Duchicela, desde su jefe inmediato hasta el jefe máximo de la rama a la que pertenecía. Otra petición en los mismos términos fue dirigida al Sr. Ministro de Defensa Nacional.

En la misma fecha, se hizo llegar una petición de Acceso a la Información Pública de igual tenor al Ministerio de Defensa Nacional⁵⁴.

El 22⁵⁵ y 31⁵⁶ de agosto de 2011, Marta Escobar interpuso una Acción de Acceso a la Información Pública contra el Ministerio de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, respectivamente, debido a que transcurridos los 15 días determinados por la Ley, el Sr. Ministro no se pronunció sobre la petición de Acceso a la Información Pública; a través de ésta acción, se demandó judicialmente lo solicitado en la petición antes mencionada.

El 16 de septiembre de 2011, el Juez Segundo del Inquilinato, quien conoce la causa, emitió sentencia por la que acepta la acción de acceso a la información pública interpuesta por la Sra. Escobar, disponiendo al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración que en el término de 5 días proporcione a la parte accionante la información y documentación recabada por ese Ministerio sobre lo sucedido al Sbo. Enrique Duchicela desde su desaparición⁵⁷.

El 8 de noviembre del 2011, la Corte Provincial de Pichincha emitió sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual desestima, confirmando la sentencia de primera instancia a favor de la Sra. Escobar⁵⁸.

⁵⁴ Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, op. cit., fojas 1 – 3.

⁵⁵ *Ibidem*, foja 8

⁵⁶ EXPEDIENTE DE LA CAUSA 0842 VP DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, op. cit., foja 8.

⁵⁷ *Ibidem*, fojas 84 a 87.

⁵⁸ *Ibidem*, fojas 102 a 104.

El 16 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración hizo llegar un listado de documentos, en el que no se incluía toda la información solicitada y que el Juez Segundo del Inquilinato dispuso se haga llegar⁵⁹.

El 18 de junio del 2012, el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha emitió sentencia sobre la Acción de Acceso a la Información Pública contra el Ministerio de Defensa. En la sentencia, se aceptó dicha acción por lo que se dispuso que le sea entregada la información solicitada a la accionante⁶⁰.

1.2.4.6 Comisión de la Verdad del Ecuador

En mayo de 2010, se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad, conformada 3 de mayo de 2007, para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos comprendidos entre 1984 y 1988 (así como otros casos particulares posteriores a éste período).

En el tomo III de dicho informe, signado como Caso N.- 66, se exponen ciertos hechos en torno a la desaparición del Sargento Duchicela, destacándose de su contenido:

El 31 de mayo de 1988 el embajador de Ecuador en Lima, José Ayala Lasso, informó a la Cancillería de Ecuador, que el sargento Enrique Duchicela Hernández había desaparecido y que al respecto había dispuesto que se realicen las gestiones correspondientes para dar con el paradero del agente militar ecuatoriano [...].

Sin embargo de ello, el entonces ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Rafael García Velasco, no tomó las medidas que el caso exigía ni cumplió con su deber de realizar gestiones inmediatas para dar con el paradero de Enrique Duchicela, pese a su obligación jurídica de disponer el levantamiento de toda reserva en la información para determinar dicho paradero, aún cuando el embajador del Ecuador en Lima, una semana después de la desaparición, le dirigió un télex en el que le manifiesta que “conviene pedir a autoridades peruanas que se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción [...].

⁵⁹ EXPEDIENTE DE LA CAUSA 0842 VP DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, op. cit., fojas 110 y 111.

⁶⁰ Sentencia del 18 de junio del 2012, Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 730.

El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano tampoco puso el caso en conocimiento del procurador general del Estado para que este intervenga en representación del Estado y precautele la integridad de un ciudadano ecuatoriano.

*Desde la desaparición de Enrique Duchicela, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, pese a la insistencia de su familia **no presentaron ningún reclamo oficial o formal requerimiento de investigación ante el gobierno del Perú** u organismos internacionales **ni tampoco dispusieron a los organismos nacionales la realización de investigaciones para establecer los hechos**. La esposa del desaparecido, Martha Escobar Andrade, remitió cartas desde 1988 a los presidentes de la República del Ecuador en ejercicio, empezando por León Febres Cordero que a la época se encontraba en funciones, así como a los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, sin lograr que se iniciaran las investigaciones que solicitaba. Ese hecho permitió que se mantuviera la versión de su desaparición por razones pasionales, **por lo cual es evidente la omisión en la que incurrieron, a su turno, dichas autoridades nacionales.***

De la misma manera, remitió solicitudes a distintas dependencias del Perú a fin de obtener información sobre lo realmente ocurrido con su esposo, sin lograr tampoco respuesta [...].

***El caso de Duchicela no se judicializó en Ecuador, debido a la omisión de los funcionarios ecuatorianos que conociendo los hechos desde sus inicios no actuaron.** La Fiscalía, por su parte, archivó el caso: el 16 de octubre de 2008 un agente fiscal de Pichincha de la Unidad de Delitos contra la Vida, manifestó que por tratarse de un delito perpetrado en el Perú “...mal podrían autoridades ecuatorianas juzgar a los presuntos responsables...” [...]. **Además no han existido adecuados impulsos del Ecuador para que se adelanten las investigaciones en Perú**⁶¹. (la negrita y el subrayado son nuestros).*

En el siguiente capítulo, se examinará en relación a estos hechos y las Convención Americana de Derechos Humanos, si los derechos humanos del Sr. Duchicela y su familia han sido vulnerados.

⁶¹ INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, op. cit., pp 519 y 520

CAPÍTULO II

ENRIQUE DUCHICELA COMO MIEMBRO DE MISIÓN DIPLOMÁTICA

2.1 Estatus del Sargento Enrique Duchicela

La coexistencia organizada de los Estado soberanos para salvaguardar la paz es un alto interés de la Comunidad Internacional. En virtud de este, se favorece e impulsa la cooperación entre Estados, siendo las relaciones diplomáticas de alta importancia en el marco de las relaciones interestatales pacíficas.

En su soberanía, los Estados envían y reciben otros sujetos de derecho internacional público, concretados en misiones diplomáticas. Estas misiones vienen a ser representantes del órgano central de un Estado, la cuales se hacen visibles en la persona de varios miembros de misión acreditados por el Estado que envía y aceptados por el Estado receptor.

Al enviar y recibir una misión diplomática, se generan obligaciones tanto para el Estado que envía como para el receptor, algunas de ellas derivan de los privilegios e inmunidades de las que se dotan a los miembros de la misión, siguiendo la tendencia de reforzar la protección a este grupo de personas para la buena consecución de sus funciones y respeto al Estado a quien representan. Así, en virtud de las relaciones diplomáticas que existían entre Ecuador y Perú, Perú había recibido a la Misión Diplomática permanente de Ecuador.

2.2 Obligaciones de los Estados ecuatoriano y peruano respecto al Sr. Duchicela en su calidad de Miembro de la Misión Diplomática de Ecuador en Perú.

2.2.1 Obligaciones del Estado peruano derivadas del status del Sargento Duchicela

El Art 1 del Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas⁶² establece:

Art. 1.- A los efectos de la presente Convención:

b) por "miembros de la misión", se entiende el jefe de la misión y los miembros del personal de la misión;

c) por "miembros del personal de la misión", se entiende los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión;

f) por "miembros de personal administrativo y técnico", se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión [...].

En relación a la inviolabilidad personal y la inmunidad de jurisdicción penal, el citado Convenio prescribe:

Art. 29.- La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

Art. 37.- [...] 2. Los miembros del personal administrativo y técnico de la misión, con los miembros de sus familias que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan en el residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 29 a 35, salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado receptor especificada en el párrafo 1 del artículo 31, no se extenderán a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones [...].

En concordancia con el artículo precedente, la “*Convención sobre prevención y castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos*”⁶³, determina en sus artículos 1, 3 y 7:

⁶² CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS, 18 de abril de 1961.

⁶³ CONVENCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUSIVE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS, Nueva York, 14 de diciembre de 1973.

Artículo 1. [...] 1. Se entiende por «persona internacionalmente protegida»:

b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado, o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios de transporte, tenga derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que formen parte de su casa.

Artículo 3. 1. Cada Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos previstos en el párrafo I del artículo 2 en los siguientes casos:

a) Cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado;

c) Cuando el delito se haya cometido contra una persona internacionalmente protegida, según se define en el artículo 1, que disfrute de esa condición en virtud de las funciones que ejerza en nombre de dicho Estado.

Artículo 7. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, de no proceder a su extradición, someterá el asunto, sin ninguna excepción ni demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. (la negrita es mía).

En forma complementaria, en lo concerniente a los derechos que ampara -en general-, a una persona extranjera en un Estado, el artículo 36 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares⁶⁴ detalla:

Artículo 36

1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un

⁶⁴ CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, 24 de abril de 1963.

nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

*c) los funcionarios consulares **tendrán derecho a visitar al nacional** del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y **a organizar su defensa** ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello [...]. (la negrita es mía)*

La Ley Orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano⁶⁵ vigente en el año 1988, determinaba:

Art. 57.- Constituyen servicios técnicos, adscritos a las Misiones diplomáticas, los siguientes:

1) Militares, navales y de aeronáutica [...].

Art. 200.- El personal técnico comprende:

1) Los adjuntos militares, navales y de aeronáutica

Mediante Decreto Ejecutivo N.- 084, publicado en el Registro Oficial N° 1613-R del 17 diciembre de 1986, Ecuador envió a Perú al Sargento Enrique Duchicela en calidad de Ayudante Administrativo en la Agregaduría Aérea de Lima. Dicho nombramiento ubicaba al Sr. Duchicela como miembro del Servicio Exterior ecuatoriano, y al ser personal militar adjunto a la misión, conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano⁶⁶ de 1964, el Sr. Duchicela era, específicamente, un miembro del servicio técnico adscrito a la Misión Diplomática.

De este modo, a la luz del artículo 1, literales c y f del Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas, el Sargento Duchicela era un miembro del personal de la misión, concretamente, miembro del personal administrativo técnico. Dada esta calidad, al Sargento Duchicela le alcanzaba la inviolabilidad personal; por la cual, tenía inmunidad de

⁶⁵ LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO EXTERIOR, Decreto Supremo 2268, Registro Oficial 353 de 15-oct-1964; derogada por Codificación No. 3, publicada en Registro Oficial Suplemento 262 de 3 de Mayo del 2006.

⁶⁶ *Ibidem*.

jurisdicción penal conforme a los artículos 29 y 37.2 del citado Convenio; pues, según se identifica en estos artículos, los miembros del personal administrativo técnico, también gozan de la inmunidad de jurisdicción penal de los agentes diplomáticos; que cabe recalcar, a diferencia de la inmunidad civil y administrativa, ésta es una inmunidad absoluta.

De su lado, el Estado peruano puede notar que la Corte IDH no es competente para conocer violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; pues, en el artículo 1 del *“Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias Facultativo para la Solución de Controversias”*⁶⁷ (derivadas de la CVRD) claramente establece que las controversias originadas de la interpretación o aplicación de esa Convención, se deberán someter de forma obligatoria a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

No obstante, una vez hecha la alusión a dicha Convención, se puede empezar por distinguir que las misiones diplomáticas representan a un sujeto de Derecho Internacional en sus actuaciones formales y oficiales, de manera que es el propio Estado actuando a través de sus misiones⁶⁸. Luego, la naturaleza de la inmunidad de jurisdicción de la misión diplomática tiene sustento en la necesidad de efectuar actos inherentes al ejercicio de sus funciones, lo cuales se limitan a aquellos desempeñadas en estricto ejercicio de la acción internacional del Estado que envía.

En atención a lo anterior, es propio señalar que el estatus de agente diplomático y la inmunidad o inviolabilidad del agente diplomático, tiene sólo sentido en consideración a que representan a un Estado soberano y actúan a nombre de éste; mas dado el principio de buena fe, bajo el cual un Estado receptor los acoge, lo mínimo a exigir es lo previsto en el artículo 41.1 de la CVRD que reza:

⁶⁷ PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FACULTATIVO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, Artículo 1, Viena, 18 de abril de 1961.

⁶⁸ Cfr. VILARIÑO, Eduardo. *Curso de Derecho Diplomático y Consular*, Madrid, Tecnos, 2007, p 262.

*Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán **respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor**. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.(la negrita es mía).*

El Sargento Duchicela, en nombre y representación del Estado ecuatoriano, estaba realizando actividades de espionaje e incurriendo en un delito a la luz del Ordenamiento Jurídico peruano; con lo cual, contravino el art 41 de la CVRD en lo atinente a respetar la leyes y reglamentos del Estado receptor, así como a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

Adicionalmente, el Estado peruano bien podría sumarse a los comentarios al Proyecto de artículos sobre relaciones inmunidades diplomáticas de la Comisión de Derecho Internacional, en los que refiere que en aras de evitar que una agente diplomático cometa un acto lesivo contra el Estado receptor o una persona bajo su jurisdicción, podría adoptar medidas como una detención, con un límite temporal corto; con lo que se inclinaría como sustento a que la inviolabilidad del agente diplomático no es absoluta.

Más allá, el Estado peruano precisaría que el Estado ecuatoriano abusó de la buena fe del Estado peruano, que en un acto de consideración y respecto al Estado ecuatoriano, dio acogida a su Misión Diplomática. De forma que, amparándose en una figura de emblemática de Derecho Internacional, obró en contra del Estado peruano al ejercer actos de espionaje. En esa línea, si bien el Sargento Duchicela tenía derecho a la inviolabilidad personal, derivada de su estatus de agente diplomático, en razón de que cometía un delito de espionaje podía ser detenido por un corto tiempo, con fines investigativos.

En virtud de lo antes puntualizado, se puede esgrimir que sería cierta la afirmación del Estado peruano en lo concerniente a que la Corte IDH no tiene competencia para juzgar las violaciones a la CVRD; no obstante, es oportuno contemplar dicha Convención a efectos de reafirmar la obligación de garantía, protección y respeto que el Estado peruano tenía respecto al Sr. Duchicela, como una persona amparada bajo su jurisdicción y como miembro de una Misión Diplomática.

Así, en el artículo 29 de la CVRD, se distinguen dos obligaciones a las que debía responder el Estado peruano; en primer lugar, la obligación de respeto, por la que no podía detener o arrestar al Sr. Duchicela; y la segunda, es una obligación de garantía, en pos de la cual, el Estado debía haber adoptado todas las medidas para que este miembro de misión no sea ultrajado.

Este deber de garantía se refuerza con la “*Convención sobre prevención y castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos*”, la que demanda de los Estados la adopción de medidas⁶⁹ para proteger a las personas incluidas en su artículo 1. En razón de esta Convención, los Estados asumen el deber de tipificar en sus legislaciones internas actos como “*la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida*”⁷⁰. Luego, si hay una obligación de tipificarlos, también de perseguirlos según los citados artículos 3 y 7 de esta Convención.

Al gozar el Sgto. Duchicela de inmunidad de jurisdicción penal, no podía ser detenido; y, aun cuando el Estado peruano se adhiera a la tesis de que la inviolabilidad del agente diplomático no es absoluta, de ninguna forma, ese argumento da licencia a un Estado de que detenga ilegal y arbitrariamente a ningún ser humano.

⁶⁹CONVENCIÓN SOBRE PREVENCIÓN Y CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS, INCLUIDOS LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS, Artículo 4, dispone también la adopción de dichas medidas:

Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos en el artículo 2, en particular.

a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto dentro como fuera de su territorio.

b) Intercambiando información y coordinando la adopción de medidas administrativas y de otra índole, según convenga, para impedir que se cometan esos delitos.

⁷⁰ *Ibíd.*, **Artículo 2:**

1. Serán calificados por cada Estado parte como delitos en su legislación interna, cuando se realicen intencionalmente:

a) La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida;

b) La comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad;

c) La amenaza de cometer tal atentado;

d) La tentativa de cometer tal atentado, y.

e) La complicidad en tal atentado.

Por otra parte, guardando el análisis del Sr. Duchicela como miembro de una Misión Diplomática, cabe observar que la detención de la que fue sujeto el Sr. Duchicela por parte de agentes del Estado peruano, deja ver una falencia en cuanto a la adopción de las medidas necesarias para impedir cualquier atentado contra la persona, libertad y dignidad de los Miembros de la Misión Diplomática ecuatoriana, según dispone el CVRD. Esta ausencia de medidas no solo se refleja en la detención, sino también en el hecho de que tras la desaparición, el asunto no fue sometido a las autoridades judiciales competentes, para el ejercicio de la acción penal, sin iniciarse las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos, identificar y sancionar a los responsables.

Incluso, dejando un momento de lado la calidad de agente diplomático del Sr. Duchicela, al ser detenido, de acuerdo artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC), el Consulado ecuatoriano debió ser informado inmediatamente de cualquier detención con el fin de que Ecuador emprenda gestiones como informar a la familia, visitarlo para constatar su situación, y preparar una debida defensa, siendo más propio en este caso solicitar su inmunidad sea respetada.

En atención a lo expuesto, el Estado peruano faltó a sus obligaciones de precautelar la vida e integridad del Sr. Duchicela como miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana; e inobservó las disposiciones del Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas en lo concerniente a la inviolabilidad personal e inmunidad de jurisdicción penal; con lo que en general, faltó a su deber de adoptar las medidas necesarias para prevenir violaciones a los derechos de los agentes diplomáticos de los Estados que los envían.

2.2.2 Obligaciones del Estado ecuatoriano derivadas del status del Sargento Duchicela

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece:

Art. 3.-1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en:

b) proteger por el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional[...].

Por su parte, la Convención de Viena sobre relaciones Consulares señala:

Artículo 5.- Las funciones consulares consistirán en:

a) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional;

e) prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas;

i) representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente

Mientras en el marco del Ordenamiento Jurídico ecuatoriano, la Ley Orgánica del Servicio Exterior ecuatoriano disponía:

Art 58.- Las Misiones diplomáticas, como órganos de las relaciones internacionales, dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y solo a éste corresponde impartirles o transmitirles órdenes e instrucciones.

Se exceptúan de esta disposición los Agregados de las Fuerzas Armadas de la República que reciben órdenes directamente de las competentes autoridades [...]

Art. 202.- Los funcionarios técnicos que presten servicios en el exterior cumplen las funciones específicas que les corresponden, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, bajo la autoridad del Jefe de la respectiva Misión Diplomática u Oficina Consular.

Los Agregados de las Fuerzas Armadas mantienen directamente su correspondencia secreta con las competentes autoridades superiores.

El Estado ecuatoriano ha alegado dentro de procesos judiciales ante los Órganos Jurisdiccionales ecuatorianos, como la Acción de Acceso de Información Pública, que no hay respaldo para sustentar que el Sr. Duchicela desempeñaba actividades de espionaje en favor del Estado ecuatoriano; y, que no llegó de manera formal a su conocimiento la desaparición del Sargento Duchicela por parte de agentes del Estado peruano.

Siendo así, la línea argumental que podría adoptar el Estado ecuatoriano podría versar en que, una vez, llegado a su conocimiento la ausencia de información sobre el paradero del Sr. Duchicela, se realizaron gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con

el fin de que se investigue sobre el paradero del Sr. Duchicela, lo que consta en varios télex, intercambiados entre la Misión Diplomática de Ecuador en Perú y las correspondientes autoridades en Ecuador. Empero, se enfatizaría que la obligación de emprender investigaciones sobre un delito o desaparición ocurrida en el Territorio peruano, le corresponde al Estado peruano; de forma que, a más de informar y solicitar al Estado peruano que realice las investigaciones pertinentes, el Estado ecuatoriano no tenía competencia para emprender gestiones de otra índole. Pese a ello, Ecuador envió una comisión de Investigadores ecuatorianos para que den seguimiento a lo ocurrido al Sr. Duchicela y el Embajador Ayala Lasso, se contactó por varias ocasiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, quienes a su vez informaron haber puesto el Caso en conocimiento de las Autoridades peruanas competentes, con el fin de que se llegue al fondo de lo sucedido al Sgto. Duchicela.

Sobre la obligación del Estado ecuatoriano respecto al Sargento Duchicela, se ha de analizar que los miembros de una misión diplomática representan a un Estado y con el respaldo de éste son enviados a otro Estado para fomentar y fortalecer las relaciones interestatales, éstos no van por su cuenta y suerte al Estado de acogida; sino que, como es el caso del Sr. Duchicela, tras su nombramiento oficial viajó a Perú bajo el respaldo y amparo del Estado ecuatoriano.

Entre las funciones principales de una misión diplomática, que sustentan su razón de ser, está la de proteger los intereses del Estado que la ha enviado **y de sus nacionales**, de lo prescrito en el artículo 3.1 de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas.

Una misión no puede negar asistencia a uno de sus nacionales en el Estado huésped, pero es aún más grave que se abandone a uno de los miembros de su misión diplomática, quien está actuando al servicio y en representación del Estado, gozando de inmunidades y privilegios.

El Sr. Duchicela desapareció, presentándose indicios de que se encontraba en manos de agentes del Ejército peruano; en un contexto en el que las desapariciones forzadas eran una práctica sistemática y en atención a que uno de los objetivos de una desaparición forzada es

abstraer a la persona del orden jurídico y social instituido para dejarlo en la indefensión; es lógico que el Ecuador no haya sido notificado por el Estado peruano sobre la detención del Sgto. Duchicela. Lo que sí deja mucho por analizar, es que en este marco, el Estado ecuatoriano haya optado por iniciar tan solo acciones informales y mínimas para dar con el paradero del Sr Duchicela, negándole así a él y su familia la debida asistencia y faltando a su obligación de amparo de su servidor.

El que miembros del Ejército peruano hayan quebrantado los límites de la inviolabilidad personal que pesaba sobre el Sargento Duchicela, por su estatus especial, era una violación a la dignidad de un ser humano y una ofensa contra el mismo Estado ecuatoriano, representado por su misión diplomática. Sin duda estos actos constituían una inobservancia del Estado peruano tanto a las normas de Derecho Internacional consuetudinarias como de los Tratados internacionales ratificados por ambos Estados. Normas que daban fundamento al Estado ecuatoriano para iniciar gestiones diplomáticas formales al interior del Estado peruano, reclamando, pacífica pero contundentemente, por la vida de su representante en el Estado receptor.

El Estado ecuatoriano optó por no levantar la reserva del caso, aun sabiendo que era indispensable actuar con la mayor brevedad posible por la urgencia del mismo, y la Cancillería ecuatoriana tardaba entre 5 y 10 días en dar sus respuestas a la Embajada de Ecuador en Lima sobre las autorizaciones para hacer una u otra solicitud de búsqueda.

A la falta de rapidez para realizar las gestiones, se suma que no dieron a conocer la verdad a la esposa del Sr. Duchicela sobre su desaparición y las circunstancias que rodeaban el caso, de forma que la Sra. Escobar no pudo interponer recurso alguno en Perú. Al contrario, se le retiró el apoyo para que la Sra. Escobar impulsara cualquier gestión de investigación en el Estado peruano.

Aun dejando de lado la calidad de miembro de misión diplomática que revestía al Sargento Duchicela, por la que Ecuador estaba obligado a reclamar por la vida de su funcionario y el esclarecimiento de los hechos; salta de otro ángulo, que este hombre era un nacional del

Estado ecuatoriano; vínculo por el que el Estado ecuatoriano estaba en el deber de prestarle toda la asistencia a la familia del Sr. Duchicela según el artículo 5 del Convenio de Viena sobre relaciones Consulares.

Mas, ¿por qué tanta reserva y cautela para reclamar por la vida de su nacional y miembro de misión? La respuesta encuentra su base en que el Sargento Duchicela a más de las funciones oficiales que le correspondían desempeñar como Ayudante Administrativo en la Agregaduría Aérea de Lima, realizaba actividades de Espionaje, con el fin de obtener información que diera al Estado ventaja en caso de que estalle un posible conflicto bélico.

El hurto de información reservada se ha visto a lo largo de la historia del mundo, y sucedía entre Ecuador y Perú, sin embargo, nadie reclamaba por la vida de aquellos hombres y era restringido el grupo de personas que se daban cuenta de que no regresaban a casa. El mismo caso del Sargento Duchicela habría quedado en las sombras si no fuera porque gozaba de inmunidad por ser miembro de Misión Diplomática en un Estado en que había relaciones interestatales pacíficas y aun no bélicas.

Los Derechos Humanos velan por que se respete la dignidad humana en todo tiempo y sin discriminación alguna, por cuanto aquellos derechos han nacido con los seres humanos por el hecho de ser tales. Incluso en los momentos más cruentos y de mayor sufrimiento, como lo es el escenario de un conflicto armado, se ha buscado precautelar la dignidad de combatientes, no combatientes, aquellos que son afectados sin tener participación directa en las hostilidades; reflejándose este despertar en todos los Tratados de Derechos Internacional Humanitario y normas consuetudinarias que han regido durante los conflictos armados.

Empero, en desmedro de su dignidad, en la práctica se ha instrumentalizado a las personas que desempeñan actividades de espionaje para un Estado. Así, una vez cumplido el trabajo, el Estado que lo envía le felicita si regresa con vida pero si no lo suman en reserva a lista de pérdidas, mientras que un Estado que detiene al espía, lo desaparece procurando no dejar rastro y confiado en que nadie reclamará por él.

El espionaje es un acto desleal de un Estado hacia otro, más aun si tiene lugar en tiempo de paz, dado que aprovechando la buena fe de un Estado que acoge con la cortesía debida a su misión diplomática, esconde entre los miembros de la misión una persona con fines contrarios a los aceptados por el Derecho Internacional. Una práctica de tal naturaleza puede constituirse e incluso en un *casus belli* y con ello amenazar la paz y convivencia armónica de una región.

Es este el trasfondo que explica muy bien la acción por demás meditada del Ecuador, gestión que rayaba casi en el borde de la inacción, pues la razón por la que en principio se habría ordenado la detención del Sr. Duchicela era por la fuga de información que sufrió el Ejército peruano, misma que fue comprada por el Sargento Duchicela, según el mismo Jesús Sosa – presunto autor del delito- lo declaró y ratificó ante la Justicia peruana y públicamente en distintas ocasiones.

El escenario se concertaba en un Ecuador intentando desentenderse y Perú dándole el “*trato diferencial que se depara al enemigo, consistente en que el derecho le niega su condición de persona*”⁷¹. De esta forma, el Sargento Duchicela fue abandonado por Ecuador y por el Perú identificado como el *hostis judicatus* del Derecho Romano –el extraño, enemigo sustraído del Sistema.

Lo categóricamente cierto es que, las actividades de espionaje que el Sr. Duchicela haya desempeñado para el Estado ecuatoriano, no le transformaban en algo diferente a un ser humano, sigue siendo tal y por ello tenía derechos humanos, mismos que le fueron conculcados tanto por el Estado ecuatoriano como peruano.

Volviendo a el incumplimiento de obligaciones por el Estado ecuatoriano, el Sargento Duchicela como personal adscrito perteneciente a la Agregaduría Aérea ecuatoriana respondía a las órdenes directas de sus inmediatos superiores al interior del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas, quienes por consiguiente serían sus responsables directos, conforme se establecía en el artículo 58 de la misma.

⁷¹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *El Enemigo en el Derecho Penal*. Coyoacán, Ediciones, 2007, pp. 19

Si respondía el Sr. Duchicela a las órdenes en primera instancia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Relaciones Exteriores complementariamente, así como respondía, debía ser protegido. Por consiguiente, el Estado ecuatoriano faltó a su obligación de garantía de los derechos de su nacional, de su funcionario, al no realizar con la responsabilidad necesaria para cumplir su obligación, las gestiones para en un primer momento rescatar al Sr. Duchicela, luego de su muerte esclarecer los hechos, y poner todo a disposición de la familia del Sr. Duchicela para que iniciara las acciones judiciales correspondientes y fuera reparada integralmente, según también se argumentará en el transcurso de esta petición.

En síntesis se puede afirmar que de la relación de los hechos y demás instrumentos enunciados que, el Estado ecuatoriano faltó a su obligación de proteger y asistir a su agente diplomático; esto por su accionar inoportuno en cuanto a tiempo, ineficaz en cuanto a resultados por la vacilación en sus actos.

CAPÍTULO III

DERECHOS DE LA CONVENCIÓN AMERICA DE DERECHOS HUMANOS VULNERADOS EN EL CASO DUCHICELA

En relación a los hechos descritos en el Capítulo I, en este Capítulo se procederá a analizar, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos⁷², si aquellos hechos constituyen una vulneración tanto a los Derechos Humanos del Sr. Enrique Duchicela como de la Sra. Martha Escobar y sus hijas.

3.1 Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención)

El Artículo 7 de la CADH, establece:

- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.*
- 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.*
- 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.*
- 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.*
- 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.*
- 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.*

⁷² CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, San José - Costa Rica, noviembre de 1969.

En relación al Art 7 de la CADH, la Corte IDH ha dejado sentado que una detención es arbitraria e ilegal cuando se realiza al margen de los motivos y formalidades establecidas tanto en las Constituciones Políticas como en las leyes vigentes, incurriéndose en una desviación de las facultades de detención.⁷³ En este sentido, la detención debería obedecer a dos supuestos⁷⁴:

En el primer supuesto, hallamos que la detención debe observar un aspecto tanto formal como material. El aspecto material es suplido cuando la detención atiende exclusivamente a los casos, motivos y circunstancias previstos en la Ley; dentro del aspecto formal en cambio, es indispensable que la detención se realice con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente prescritos en la Ley.

El segundo supuesto es una condición según la cual nadie puede ser detenido con métodos y por causas que, cumpliendo con la dimensión formal, son violatorios de los derechos fundamentales por ser faltos de proporcionalidad, irrazonables e imprevisibles.

Como constancia de las causas, motivos y circunstancias de la detención, independientemente de la duración; la Corte ha prescrito que se debe llevar un registro en el documento pertinente, en el que como mínimo se señale con claridad las causas de la detención, quien la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como la constancia de que se dio aviso al juez competente⁷⁵, esto como garantía de salvaguarda fundamental contra la desaparición forzada⁷⁶.

A su vez, las personas privadas de la libertad deben ser trasladadas a un centro de detención oficialmente reconocido y autorizado; ya que la sola existencia de centros clandestinos de detención es una violación que atenta contra los derechos a la vida, integridad y libertad

⁷³ Cfr. CORTE IDH, *Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; 27 de febrero de 2012; párr. 77.

⁷⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Gangaram Panday Vs Surinam*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas; 21 de enero de 1994, párr. 47.

⁷⁵ Cfr. CORTE IDH. *Caso González Medina y Familiares Vs República Dominicana*. Op.cit., párr. 178.

⁷⁶ Cfr. CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 102.

personal⁷⁷. Del mismo modo ha de considerarse que, la persona detenida debe ser presentada sin demora, conforme a su legislación interna, a la autoridad judicial competente y que se le debe garantizar la posibilidad de interponer un recurso judicial efectivo que permita el control judicial sobre la legalidad de la detención⁷⁸.

El Estado peruano podría alegar que en el dictamen fiscal emitido el 29 de agosto de 2012, se determina como hecho probado que el Sr. Enrique Duchicela desapareció en Perú en el año de 1988. No obstante, no es un hecho probado que el Sr. Duchicela haya desaparecido en manos de agentes del Estado peruano o que tal desaparición haya sido realizada con anuencia de los mismos.

En la misma línea guardada en diversos casos de desaparición forzada en que la Corte IDH ha declarado la responsabilidad internacional al Estado peruano, el sustento sobre que no se ha probado la desaparición del Sr. Duchicela por Agentes peruanos podría girar en torno a que previo a la desaparición del Sr. Duchicela no se evidenciaron actos como amenazas, seguimientos por Agentes peruanos que hagan sospechar que efectivamente estos lo detuvieron. Reforzándolo al afirmar que un supuesto escenario general de violencia, *per se* no implica que una desaparición como la del Señor Duchicela sea atribuible al Estado peruano; siendo que las referencias con que se cuentan son meramente indicios o presunciones.

Sobre el párrafo anterior, en lo concerniente a la prueba, la Corte ha manifestado que a *contrario sensu* de lo ocurrido en los procesos penales de cada Estado; en primer lugar, el Estado no ha de basar su defensa en que el peticionario no pueda probar la desaparición, pues, se debe considerar que muchos de los elementos que constituirían una prueba tendrían que ser proporcionados por el propio Estado u obtenidos con su cooperación; segundo, es el Estado el que posee a su alcance los medios para aclarar hechos que giran en torno a violaciones de los derechos humanos en el territorio bajo su jurisdicción. En otro aspecto, la prueba indiciaria es particularmente importante en los casos de desapariciones forzadas a

⁷⁷ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 63.

⁷⁸ Cfr. CORTE IDH. *Caso J Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 27 de noviembre de 2013; párr. 170.

causa de que un de las características de este acto es precisamente la eliminación de todo elemento que permita verificar el paradero y suerte de la víctima⁷⁹.

En este sentido, también la Corte ha manifestado que si se demuestra que existió una práctica Estatal de desapariciones, realizada o tolerada por el Estado, y si es posible vincular la desaparición de una persona a esa práctica, el hecho se habría dado por probados⁸⁰.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú determinó en su Informe Final que entre 1988 y 1993, las desapariciones forzadas fueron empleadas por agentes estatales como una práctica sistemática, y siendo que a las Fuerzas Militares se les asignó funciones de control interno así como de lucha contra la subversión, éstas habrían actuado en el mayor porcentaje de casos de desapariciones forzadas. A decir del citado Informe, con las desapariciones forzadas perseguían entre sus objetivos: obtener información de los sospechosos y terminar con la vida del sospechoso de forma que se asegure la impunidad⁸¹.

En el Caso de estudio cabe determinar que: Primero, el Sr. Duchicela desapareció en Lima- Perú, la tarde del 27 de mayo de 1988. Segundo, la época de la desaparición del Sr. Duchicela corresponde a un contexto en que las desapariciones forzadas eran una práctica sistemática del Estado Peruano. Tercero, los hechos ocurrieron en un territorio donde miembros del Ejército tenían el control de la zona. Cuarto, según investigaciones clasificadas realizadas por el Estado ecuatoriano⁸², el Sr. Duchicela habría desaparecido en manos de agentes del Ejército peruano. Quinto, el autor material de la desaparición del Sr. Duchicela, Jesús Sosa, en más de una ocasión dentro de procesos judiciales así como ante medios de comunicación, declaró que por órdenes de las autoridades del Ejército peruano, detuvieron al Sr. Duchicela, lo trasladaron al Pentagonito, lo ejecutaron e incineraron sus restos.

⁷⁹ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr 131, 135 y 136.

⁸⁰ Cfr. *Ibíd*em, párr 126.

⁸¹ Cfr. INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, 28 de agosto de 2003, tomo VI, p. 70.

⁸² INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección C, párr. 1.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú conoció sobre la desaparición del Agente Diplomático Enrique Duchicela, ante lo cual aseveraron haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía correspondiente, sin embargo, nadie se pronunció formalmente sobre este caso y se ocultó la información sobre su paradero.

En virtud de lo especificado en el párrafo anterior y de lo establecido por la Corte IDH, se puede dar por probado la detención y desaparición del Sr. Duchicela por agentes del Ejército peruano.

Partiendo de lo antes dicho, es propicio señalar que a decir de la Corte IDH, toda detención debe responder a dos supuestos, con el fin de analizar si se cumplió el supuesto de orden formal y material, es propio identificar que la Constitución de la República del Perú vigente en 1988 era la del año 1979, que en relación al derecho a la libertad y seguridad personal, se pronunciaba en el siguiente sentido:

Artículo 2. Toda persona tiene derecho:

20.- A la libertad y seguridad personales.

En consecuencia:

g) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en flagrante delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de veinticuatro horas o en el término de la distancia, a disposición del Juzgado que corresponde. Se exceptúan los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas en los que las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales, con cargo de dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido el término.

Conforme al citado artículo, para que una detención proceda era indispensable que el juez competente haya emitido la correspondiente orden de detención y en el término máximo de veinticuatro horas debía ser la persona puesta a disposición del juez competente.

Sin embargo, en cuanto al delito de espionaje; esta norma planteaba una excepción por la que la persona podía ser detenida por las autoridades policiales por 15 días antes de ser llevada ante el juez competente; pero, siempre mediaba la obligación de los agentes policiales de rendir cuentas tanto al Ministerio Público como al juez.

En concordancia con el art 2 numeral 20 literal g de la referida Constitución, el Código de Procedimientos Penales de Perú de 1940, que se hallaba en vigor en la época de los hechos, manifestaba:

Artículo 82.- AVISO DE LA DETENCION

Llevada a cabo la detención, el jefe del establecimiento donde ha sido trasladado el detenido, dará aviso inmediato por escrito al juez instructor, o, en su defecto, al Ministerio Público. En caso de no hacerlo dentro de las veinticuatro horas, será responsable por detención arbitraria.

Artículo 84.- DETENCION DEFINITIVA

Si durante la Instrucción resultaren pruebas de que el inculpado es reincidente, cometió el delito en concierto o banda o el delito se encuentra comprendido en los alcances del mandato de detención a que se refiere el Artículo 79° del C.P.P., modificado por el Artículo 1° de la presente Ley, el Juez, de oficio, a petición del Fiscal Provincial o del agraviado ordenará detención.

Artículo 333.- PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

La pena de prisión se cumplirá en la cárcel de la capital del Departamento donde se dictó la sentencia. Las penas de internamiento, relegación y penitenciaría se cumplirán en la Penitenciaría Central de la Capital de la República, o en las demás que pudieran crearse.

La detención y las penas por faltas se cumplirán en las cárceles provinciales o distritales.

Estos artículos reiteran que tras la detención, la persona debía ser llevada ante un juez competente con el propósito de dar paso a la instrucción fiscal de existir indicios suficientes. En los artículos 82 y 84, se observa claramente que la finalidad de la detención era desvirtuar o confirmar la participación del detenido en un hecho delictivo; y, finalmente, el artículo 333 nos remite a la detención ya como una pena privativa de la libertad una vez concluido el proceso penal.

En los aspectos formal y material, que responden al primer supuesto mencionado por la Corte IDH, se observa que el Sr. Duchicela fue privado de su libertad sin hallarse en delito flagrante; y, que una vez detenido, no fue llevado ante un juez competente ni aun transcurridos los 15 días previstos en el segundo inciso del art 2.2.g para el delito de espionaje, lo que es un hecho pues no hay registro alguno de que un juez haya conocido esta causa. Este acto, en

los términos del art 82 del Código de Procedimientos Penales de Perú (CPPP), constituía **una detención arbitraria**.

De igual manera, la detención se realizó sin la orden del juez competente y por la forma en que se dieron los hechos, la misma no se podía enmarcar ya ni en los artículos 84 ni 333 del CPPP; ya que el art 84 supone que se llegó a la etapa de instrucción fiscal mientras que el art 333, que se finalizó el proceso penal, obteniendo como resultado una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Está también el hecho de que conforme al art 29 del Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Sr. Duchicela gozaba de inmunidad de jurisdicción penal por su calidad de agente diplomático por lo que no podía ser privado de su libertad ni incomunicado

Atendiendo al segundo supuesto, relacionado a que la detención debía realizarse con métodos y causas que no sean violatorios a los Derechos Humanos; hallamos que en los agentes estatales que detuvieron al Sr. Duchicela, desde el inicio no hubo la intención de que el detenido sea sujeto de un proceso penal, sino que esta privación de la libertad iba dirigida a terminar con la vida del Sr. Duchicela. Esta afirmación ha sido expresada por el agente Jesús Sosa (en la sesión pública N.-85 del juicio contra el ex presidente Fujimori) en estas palabras.

*En mayo de 1988 fui llamado a Lima donde se me ordenó capturar y desaparecer al Espía ecuatoriano Enrique Duchicela, por orden expresa del Presidente Alan García, **orden que fue cumplida totalmente**, luego de lo cual fui felicitado por el primer mandatario y por el Comandante General del Ejército.⁸³(la negrita es nuestra).*

Al detener al Sr. Duchicela, se busca abstraerlos del orden jurídico establecido, por lo que se lo mantuvo privado de su libertad en los sótanos del SIE (el “Pentagonito”), que no es ni fue un centro de detención oficialmente reconocido; no se llevó ningún tipo de registro de esta

⁸³ Transcripción del interrogatorio a Jesús Sosa Saavedra, transmitido en vivo por el Canal de Tv DE Lima, Canal N (Noticias, 30 de julio del 2008. Anexo A del Informe presentando por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández, Sección 2, punto 1, 17 agosto 2008. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 418 a 420.

detención; no se comunicó a nadie de la detención, aun cuando el Estado ecuatoriano informó a la Cancillería del Perú de la desaparición de este agente diplomático.

Así, en la detención del Sr. Duchicela no se siguió el procedimiento prescrito en la Constitución y la ley, ni por los casos determinados en las mismas; pues, la detención solo procedía en caso de delito flagrante, con fines investigativos tras haberse emitido una orden de detención, o cuando concluida la instrucción fiscal se identificaba la necesidad, y en este caso no fue por ninguno de aquellos motivos; tampoco, se realizó la detención con métodos y casusas que guarden armonía con los Derechos Humanos ya que se privó al Sr. Duchicela de su libertad, no para que sea sujeto de un proceso penal, sino para poner término a su vida a través de una ejecución sumaria.

Por lo antes expuesto, se vulneró el Derecho a la libertad personal del artículo 7 de la CADH en perjuicio del Sargento Enrique Duchicela.

3.2 Derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención)

3.2.1 Derecho a la integridad personal del Sargento Enrique Duchicela

El art 5 de la CADH determina:

- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.*
- 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.*

En la misma línea seguida en el apartado anterior, el Estado peruano podría conservar la postura de que no se ha establecido el nexo causal entre una práctica sistemática de desapariciones forzadas en Perú y la desaparición del Sr. Duchicela. Mas, aun en el supuesto de que se deje sentado dicho vínculo, no sería posible probar que en efecto el Sr. Duchicela fue víctima de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, pues se conocería que se dio la detención sin certeza de lo sucedido en adelante.

Sobre el artículo 5 de la CADH, la Corte ha señalado que la violación al derecho a la integridad personal se puede dar en una multiplicidad de formas y grados que pueden ir desde “la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad”⁸⁴.

Así la Corte IDH ha considerado que el solo riesgo real e inmediato de que una persona vaya a ser sujeta a un acto de tortura, constituye ya una violación al Art 5 de la Convención.⁸⁵

También es un acto que vulnera el citado artículo 5, el trato cruel, inhumano y degradante que corresponde a mantener a una persona sometida a un aislamiento prolongado, siendo víctima de una incomunicación que es coactiva, siendo esto lesivo para la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano.⁸⁶

A su vez, en relación al Art 1.1 de la Convención, la Corte ha manifestado que:

*[...] el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida, aún en el supuesto de que no puedan demostrarse los hechos de torturas o de privación de la vida de la persona*⁸⁷.

A decir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, entre 1980 y el año 2000, el Estado peruano vivía un conflicto de lucha contra el terrorismo que habría cobrado la vida de aproximadamente 69.280 personas.⁸⁸ Siendo la desaparición forzada una práctica sistemática, entre las etapas del *modus operandi* de los agentes del Estado peruano pueden distinguirse: la

⁸⁴ CORTE IDH, *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de septiembre de 1997, párr.57.

⁸⁵ Cfr. CORTE IDH. *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 18 de agosto de 2000, párr. 102.

⁸⁶ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 156.

⁸⁷ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 83.

⁸⁸ Cfr. INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, op. cit., Cap 1, p 1.

sección de la víctima, detención de la persona, depósito en un lugar de reclusión, **interrogatorio, tortura** y procesamiento de la información obtenida, en varios casos, seguida por la decisión de eliminación de la víctima y el ocultamiento de sus restos; finalmente, los cuerpos eran incinerados, mutilados, abandonados en zonas inaccesibles o aisladas, sepultados o esparcidos los restos en diferentes lugares⁸⁹.

Como ya se especificó en la porción relativa al Art 7 de la CADH, el Sr. Duchicela fue detenido en el año de 1988 en este contexto que incluía violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos; y, es un hecho que el Sr. Duchicela desapareció en manos de Agentes Estatales peruanos; cuya persona al mando, Jesús Sosa, años más tarde fue nombrado líder del grupo “Colina”, el cual habría perpetrado alrededor de 200 muertes, operando bajo las ordenes y aquiescencia del Estado peruano.

El Sr. Duchicela, ya en manos de estos agentes, se conoce fue aislado en las instalaciones del Pentagonito, y aun cuando no se pueda corroborar en que habrían consistido los actos de tortura, el solo aislamiento, el permanecer sin certeza sobre sus posibilidades de supervivencia, son tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra el art 5 de la Convención. De igual forma, el solo hecho de que haya sido privado de la libertad en un lugar clandestino, sujeto a la disposición de agentes estatales que torturaban y asesinaban, hallándose en una situación de vulnerabilidad por su estado de indefensión y la privación de derechos, ya hacía posible que sea sujeto de actos de tortura; y generan la presunción de que el Sr. Duchicela sufrió daños a su integridad física. En este mismo sentido, la situación descrita supone la responsabilidad del Estado peruano en relación a su deber de prevención de violaciones al derecho a la integridad personal en los términos del art 5 de la CADH.

En conclusión, el art 5 de la CADH habría sido vulnerado por parte del Estado peruano en desmedro de la integridad personal del Sr. Duchicela, al someterlo a tratos crueles inhumanos y degradantes, al ponerlo en una situación de indefensión que hacía posible se produzcan actos de tortura en su persona, y en general, al ponerlo, según la Corte ha

⁸⁹ Cfr. Ibídem, tomo VI, p. 84.

señalado, en una situación que acarrea daños psicológicos en un ser humano, lo que ya es un daño a la integridad.

3.2.2 Observancia del Derecho a la integridad personal de la Familia del Sargento Duchicela (Marta Escobar, Paulina y Jessica Duchicela) por parte de Estados ecuatoriano y peruano.

La Corte ha afirmado que en los casos de desaparición forzada:

[...] es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.⁹⁰

En el reciente caso de Janowiec y otros contra Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que, aunque no tenía competencia para conocer sobre la violación de Rusia por la masacre de Katyn (1940), si la tenía para determinar si la falta de información a los familiares de las víctimas constituía una violación a la Convención Europea de Derechos Humanos. De esta forma, determinó que Rusia había propinado un trato cruel, inhumano y degradante al negar información por tanto tiempo a los familiares de las víctimas:

150. The applicants claimed that a prolonged denial of information about the fate of their relatives, taken together with dismissive and contradictory replies by the Russian authorities in respect to their requests for information and the Russian courts' insistence of the version of "disappearance" in defiance of the established historic facts, amounted to inhuman or degrading treatment with the meaning of Article 3. The Court recalls that Article 3 has previously been relied on in a number of cases in which the applicants complained that they had suffered inhuman and degrading treatment on the part of the domestic authorities in the context of the death or disappearance of their next of kin.⁹¹ (la negrita es mía).

⁹⁰CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 161.

⁹¹ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Case of Janowiec and Others V. Russia*. Fifth Section, Applications nos. 55508/07 and 29520/09, decision of April 16th, 2013.

En ese mismo sentir la Corte IDH ha manifestado que:

*[...] la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos*⁹²

La Corte ha dejado sentado también que existe una presunción de daño psíquico y moral *juris tantum* respecto de madres y padres, hijas e hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes, cuando a consecuencia de las circunstancias de la desaparición y la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos, se genera en los familiares un sufrimiento, angustia, además de sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia.⁹³

Al mismo tiempo, la Corte ha dicho que considera razonable que las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos sufran a más de un daño psicológico un deterioro físico a raíz de la intensa afectación emocional producto de la desaparición forzada de su familiar y que estos daños físicos como reflejo de daños psicológicos o emocionales en los familiares de las víctimas ya han sido constatados en otros casos análogos⁹⁴.

Tomando como referencia el Caso *Gómez Palomino vs Perú*, el Estado peruano podría manifestar que es fundamental que se demuestre que la familia del Sr. Duchicela ha sufrido un grave daño, que va más allá del que naturalmente sobreviene a una persona por la pérdida de un familiar cercano⁹⁵.

En un similar sentido, el Estado ecuatoriano ha expresado en momentos, como la audiencia llevada dentro del proceso de la Acción de Protección presentada por la familia Duchicela-Escobar, que el Estado ecuatoriano comprende que la familia del Sr. Duchicela experimenten dolor por la pérdida de un miembro de su familia; sin embargo, este es un daño que no es

⁹² CORTE IDH. *Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia*. Sentencia de Reparaciones y Costas, 27 de febrero de 2002, párr. 114.

⁹³ Cfr. CORTE IDH. *Caso Blake Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, 24 de enero de 1998, párr. 114; y *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 27 de noviembre de 2008, párr. 119.

⁹⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*, op. cit., párr. 112.

⁹⁵ Cfr. CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005, párr. 57.

atribuible al Estado ecuatoriano en virtud de que no ha tenido parte en la desaparición del Sr. Duchicela ni en el natural y normal sufrimiento experimentado por la familia; de modo que, lo conveniente para la familia es emprender los correspondientes procesos contra el Estado peruano. De igual forma, podrían aseverar que en su momento se dio a conocer la información que había llegado a su conocimiento según las diligencias que se emprendió para dar con el paradero del Sr. Duchicela.

Es oportuno especificar que, el Sr. Duchicela desarrollaba su vida diaria en vínculo con su esposa, Martha Escobar, así como con sus dos hijas, Jessica y Paulina Duchicela. Al interior de la familia, el Sr. Duchicela cumplía el rol de esposo, padre, proveedor, protector; y más allá, a decir de la Sra. Martha Escobar, la dinámica familiar se desenvolvía en un marco de profundo amor y respeto del Sr. Duchicela a sus hijas y la Sra. Escobar, en la que el padre era identificado como cabeza de la familia.

Frente a la desaparición del Sr. Duchicela, la dinámica familiar se vio completamente alterada, iniciando porque de forma intempestiva se vio roto el lazo afectivo en la familia; luego, de la noche a la mañana, la Sra. Escobar empezó un proceso en el que tuvo que asumir nuevas responsabilidades como las de emprender gestiones para dar con el paradero de su esposo, expuesta al escrutinio público y en la mira de todas las personas que la rodeaban; a ello, se ha de añadir que la familia no tenía forma de sustentarse económicamente; y, haciendo grandes esfuerzos, la Sra. Escobar tuvo que asumir los costos de la búsqueda de su esposo, sin apoyo ni del Estado ecuatoriano ni peruano.

El dolor experimentado por la Sra. Escobar e hijas rebasa el natural que aqueja a una persona por la muerte de un familiar querido, pues es una consecuencia directa de la desaparición de la que fue víctima el Sr. Duchicela en manos de agentes del Estado peruano; este dolor está revestido de una mayor intensidad debido a la incertidumbre en que han vivido hasta el presente al no saber precisa y oficialmente el destino de su ser amado. Esta angustia ha llevado a la Sra. Duchicela e hijas a dedicar su vida entera a la búsqueda de su esposo y padre, trastocándose su proyecto de vida.

En la persona de la Señora Escobar e hijas el derecho a la integridad psíquica y moral ha sido vulnerado de forma permanente tanto por el Estado peruano como el ecuatoriano.

Este derecho es vulnerado por el Estado peruano; en primer lugar, por el mismo acto de desaparición forzada en la persona del Sr. Duchicela; luego, al haber omitido su obligación de iniciar las investigaciones correspondientes, y en un plazo razonable, cuando llegó al conocimiento de las autoridades la noticia sobre la desaparición de un miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana. Así también, en un segundo momento, tras la declaración de Jesús Sosa de haber sido autor del secuestro y ejecución del Sr. Duchicela en el 2007, la fiscalía inició una investigación que no acarrió resultados ni indicios suficientes, tomando como siguiente paso el abandono del caso sin emprender acciones para esclarecer los hechos.

Por su parte, el Estado ecuatoriano se constituye en responsable de la violación de este derecho al no haber transparentado la información sobre el caso y haber otorgado a la Sra. Escobar y la Sociedad ecuatoriana una versión oficial que distaba ampliamente de la verdad, es decir, hacer pública una versión mentirosa, degradante y que manchó el nombre del Sr. Duchicela y su familia (como es que desertó para huir con una amante).

Es una conducta violatoria del derecho a la integridad psíquica también, el que el Estado ecuatoriano, omitiendo sus obligaciones respecto a su miembro de misión diplomática y agente implicado en una actividad de riesgo, como es el espionaje, no haya emprendido una investigación seria y eficiente en Perú con el propósito de esclarecer los hechos en torno al caso y brindar tanto a la Sra. Escobar e hijas como a los ecuatorianos una versión oficial. Por el contrario, el Estado ecuatoriano adoptó una posición agresiva contra los familiares de Enrique Duchicela, optando por amedrentarlos con amenazas⁹⁶ para que no ahonden en lo sucedido y abandonándolos absolutamente al negarles el apoyo para investigar e iniciar acciones en Perú.

⁹⁶ La misma versión fue referida a la familia por Marcos Palacios, agregado aéreo de Ecuador en Lima, pues según refiere Martha Escobar, en una ocasión en que se encontraron para hablar de la desaparición de su esposo, le dijo: “¿sabe con cuántas mujeres ha estado Enrique? [...] si no acepta que se ha ido con una mujer, yo lo voy a involucrar en drogas”. Citado por: INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, op. cit., pp 519 y 520.

La Señora Escobar e hijas han recibido un trato cruel e inhumano por parte del Estado peruano y ecuatoriano al ser ignoradas sus constantes peticiones y súplicas sin dar una respuesta formal, digna y veraz; pues, según ha dicho la Corte, la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos, por tanto, un daño psíquico y moral.

Siendo el Sr. Duchicela víctima de una desaparición forzada, cabe la referida presunción *juris tantum*, sobre el daño a la integridad psíquica y moral sufridos por la Sra. Duchicela e hijas, daño que efectivamente ha sido acrecentado, como lo ha dicho la Corte, por la abstención de las autoridades del Estado del Perú de investigar los hechos, y del Estado ecuatoriano de investigar por su parte lo sucedido e impulsar que se lleve a cabo el correspondiente proceso de investigación ante los Órganos Jurisdiccionales peruanos; lo que según han declarado la esposa e hijas del Sr. Duchicela le ha generado sufrimiento, angustia, además de sentimientos de inseguridad, frustración e impotencia; según bien ha descrito la Corte en sus sentencias en relación a los familiares de víctimas de desapariciones forzadas.

Es de considerar también, que este daño psíquico y moral ha trascendido hasta generar daños físicos en las personas de Marta Escobar⁹⁷ y Paulina Duchicela⁹⁸, quienes por varios años han tenido que ser medicadas con el fin de aliviar los fuertes dolores provenientes de la inflamación de sus nervios en ciertas zonas del cerebro y dolores gástricos a causa de la tensión; situación que ha señalado la Corte ha observado en casos análogos y ha expresado es razonable que se produzca en las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos a raíz de la intensa afectación emocional producto de la desaparición forzada de su familiar.

En conclusión, tanto el Estado peruano como el Estado ecuatoriano han vulnerado el derecho a la integridad personal de la esposa e hijas del Sr. Duchicela, en virtud de que como consecuencia de la desaparición forzada de la que fue víctima del Sr. Duchicela, se generó un profundo daño psicológico y moral que devino e incluso en un daño físico en Marta Escobar y Paulina Duchicela. Este dolor fue acrecentado por la negativa del Estado peruano a realizar

⁹⁷ Certificado Médico, Hospital de Especialidades FFAA N.-1.

⁹⁸ Certificado Médico, Nova Clínica, S.A.

las investigaciones a las que estaba obligado, así como la resistencia de ambos estados a otorgar la verdadera información a la familia del Sr. Duchicela sobre lo ocurrido al mismo.

3.3 Derecho a la vida (artículo 4 de la Convención)

3.3.1 Violación del Derecho a la vida por el Estado peruano

El artículo 4 de la Convención establece:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

A decir de la Corte, en el marco de una desaparición forzada, “[...]el paso de los años y la carencia de información sobre el paradero de la víctima configuran una violación al derecho a la vida[...]⁹⁹”; por lo cual, según lo ha establecido la Corte, la desaparición de una persona por más de 7 años es un indicio suficiente de que fue privada de su vida, más aun cuando su destino estuvo en manos de autoridades cuya práctica sistemática era la ejecución sin fórmula de juicio y posterior ocultamiento del cadáver¹⁰⁰; pues de lo contrario, “[...]bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de la víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores, quienes en estas situaciones pretenden borrar toda huella de la desaparición[...]¹⁰¹

Al hecho de la desaparición del Sr. Duchicela en un contexto en el que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática, se le sumó como indicio, que genera un nexo causal, el testimonio del Sr. Jesús Sosa, ex líder del Grupo Colina de Perú (grupo especializado en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales); quien declaró que junto a otros

⁹⁹ CORTE IDH. *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 19 de enero de 1999, párrs. 74-76.

¹⁰⁰ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 188.

¹⁰¹ CORTE IDH, *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Sentencia de Reparaciones y Costas; 27 de noviembre de 1998, párr. 73.

compañeros privaron de su libertad al Sr. Duchicela por haber incurrido en actividades de espionaje; ulteriormente, ejecutando de forma simultánea tanto a Marco Barrantes como a Enrique Duchicela.

En la misma línea seguida en el *Caso Anzualdo Castro vs Perú*, el Estado peruano podría argüir que si bien en varias ocasiones el Sr. Jesús Sosa hizo declaraciones sobre haber sido el autor material de la ejecución de los Señores Barrantes y Duchicela, es también contundente el que posteriormente se retractó de lo dicho. En otro escenario, se ha de tomar en consideración que este testimonio no fue admitido dentro del proceso penal que se seguía por el delito de desaparición forzada en la persona de Marco Barrantes ante los Órganos de Justicia de Perú¹⁰². Se ha examinado de igual forma el libro Muerte en el Pentagonito, mas, el Estado peruano ha desvirtuado en varias ocasiones su fidelidad por basarse en las declaraciones de Jesús Sosa.

En atención a la afirmación de que los cuerpos de ambas personas fueron introducidas en los incineradores de los sótanos del SIE, en la indagación previa N.-05-2007, de fecha 14 de marzo de 2007, la fiscalía de Perú manifestó que no hay rastro de que dichos incinerados hayan existido en los sótanos del SIE; pero, que de haber existido, por las dimensiones de un incinerador, hubiera sido imposible que un cuerpo humano quepa y peor aún que sea consumido hasta tornarse en cenizas.

Considerando la que podría ser la postura del Estado peruano, se puede ingresar al análisis de la violación del derecho a la vida del Sr. Duchicela.

Desde la desaparición del Sr. Duchicela han transcurrido 25 años, siendo que el Juzgado Séptimo de los Civil de Pichincha en Ecuador declaró ya la muerte presunta de Enrique Duchicela por desaparición -conforme al Código Civil ecuatoriano- el 18 de junio de 1991 y en base a ello, el Estado ecuatoriano proclamó el ascenso Post-Mortem¹⁰³ del Sargento Duchicela a Suboficial. Adicionalmente, como ya se ha reiterado en este documento, el Sr.

¹⁰² Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*, op. cit., párr. 40.

¹⁰³ Cfr. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op.cit., Sección E, párr. 2, foja 32.

Duchicela fue detenido por agentes del Estado peruano, en un contexto histórico de lucha contra grupos subversivos en el que había una violación sistemática a los Derechos Humanos, en este aspecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú de 1993 expuso:

*[...] el propio Estado peruano ha reconocido oficialmente el fenómeno de las desapariciones forzadas y ha dado cuenta de 5.000 denuncias sobre desapariciones en el período comprendido entre 1983 y 1991. El elevado número de denuncias del mismo tenor es **un indicio evidente para la Comisión de que las desapariciones en Perú respondían a un patrón oficial diseñado y ejecutado en forma sistemática.***

Dicho indicio se ve reforzado por el hecho de que, dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, establecido en 1980 por la Comisión de Derechos Humanos, había recibido 3.004 casos sobre desapariciones forzadas ocurridas en Perú¹⁰⁴. (la negrita es mía)

Es así que conforme a los estándares de la Corte, habiendo desaparecido el Sr. Duchicela por más de 7 años; ya es posible presumir que **el Sr. Duchicela fue privado de su vida**, más aun cuando su destino estuvo en manos de agentes que actuando bajo la anuencia del Estado peruano habían incorporado como una práctica sistemática la ejecución sin fórmula de juicio y posterior ocultamiento del cadáver¹⁰⁵, *modus operandi* bajo el cual operaba el agente del Estado peruano Jesús Sosa, quien por desaparecer los cuerpos de sus víctimas rociándolos con combustible e incinerándolos llegó a ser conocido como alias **“Kerosene”**.

En lo concerniente a las operaciones del Sr. Jesús Sosa, en el 2004, el periodista Ricardo Uceda publicó un libro denominado *“Muerte en el Pentagonito. Los cementerios ocultos del Ejército Peruano”*, basándose en el testimonio del Sr. Sosa. En el capítulo 8 de este se relata que después de un operativo para desmontar la red de espionaje identificada, el Sr Duchicela fue drogado para dejarlo inconsciente, despertando en el sótano del SIE donde fue interrogado con torturas. El siguiente paso habría sido la ejecución del Sargento Duchicela y Marco Barrantes en manos de Jesús Sosa y sus compañeros -Ortiz, Figueroa, Sauni, Zambrano y Pino-. Dichas personas habrían procedido a desaparecer los cuerpos introduciéndolos en un

¹⁰⁴ CIDH, INFORME N° 44/00. Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú. 13 de abril de 2000.

¹⁰⁵ Cfr. CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 188.

incinerador al que le aplicaron fuego, mismo que empezó a consumir los leños impregnados de queroseno y petróleo hasta que los cuerpos ardieron, convirtiéndose la mayor parte en cenizas.

En el Caso *Anzualdo Castro vs Perú*, analizando la Corte las modalidades para destruir la evidencia del delito, hace referencia al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú en que se expone que las instalaciones del SIE –conocida como los sótanos del SIE- eran empleados como centros de detención clandestino en el que las personas desaparecidas eran torturadas y ejecutadas; detallando esta Comisión de la Verdad que se destruía las evidencias mutilando o incinerando los restos mortales de las víctimas en incineradores instalados en los sótanos del SIE y otros centros clandestinos estatales. En el *Caso Anzualdo Castro vs Perú*, la Corte dejó sentado que la existencia de los mencionados incineradores fue constatada en el libro “Muerte en el Pentagonito” y que dentro del relato del perito Baraybar a la Corte, tras su visita a los sótanos del SIE, se confirmó la existencia de los dos hornos, haciéndose el hallazgo de restos humanos en su interior¹⁰⁶.

En el mismo Caso, la defensa del Estado peruano argumentó que los testimonios recogidos en la investigación periodística del Libro Muerte en el Pentagonito eran inoficiosos por carecer de sustento en la ley o procesos oficiales. Ante esa afirmación la Corte dijo que:

*[...] ese testimonio estuvo a disposición del Estado o debería haberlo estado si éste hubiera procedido con la necesaria diligencia en las investigaciones. Asimismo, la Corte nota que la Procuraduría Pública Ad Hoc del Estado, un órgano judicial estatal, se basó mayormente en la información contenida en el referido libro para solicitar la ampliación del requerimiento de extradición activa del ex Presidente Fujimori, en relación con el caso del señor Anzualdo Castro. Ese requerimiento fue luego declarado procedente por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, es decir, en definitiva el testimonio de ese ex agente del SIE sí fue considerado a nivel interno por las más altas autoridades judiciales del Perú. Por ende, las referencias contenidas en esa investigación periodística no resultan “inoficiosas” ante esta instancia jurisdiccional, tal como lo sostiene el Estado [...]*¹⁰⁷. (la negrita y el subrayado son míos).

¹⁰⁶ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 83

¹⁰⁷ *Ibíd.*, párr. 40.

De la precedente cita y párrafos en relación al Caso Anzualdo Castro vs Perú, se ha de notar que la investigación contenida en el Libro “Muerte en el Pentagonito” fue considerada tanto por el Estado peruano como por la Corte IDH, quien a través de un perito, corroboró la existencia de elementos como el incinerador con restos humanos, lo que la Fiscalía del Perú negó, en su etapa de indagación previa en el proceso iniciado por la Desaparición del Sr. Duchicela.

El Sr. Duchicela fue privado de su vida cuando, incluso si el Sr. Duchicela hubiera sido declarado culpable bajo fórmula de juicio, no le habría correspondido la pena de muerte, pues en la Constitución peruana de 1979 dicha pena fue restringida al delito de traición a la patria durante conflicto armado internacional (*“No hay pena de muerte, sino por traición a la patria en el caso de guerra exterior”*¹⁰⁸); sin ser este el contexto en que actuó el Sr. Duchicela ni el delito que habría cometido.

En conclusión, el Derecho a la vida del Sr. Duchicela fue vulnerado por el Estado peruano, pues desapareció en manos de agentes estatales peruanos que llevan a cabo continuamente desapariciones forzadas, habiendo ya transcurrido 26 años desde el momento de la desaparición, lo que permite presumir que los mencionados agentes que actuaron bajo la aquiescencia del Estado peruano ejecutaron al Sr. Duchicela.

3.3.2 Violación del derecho a la vida por el Estado ecuatoriano

La Comisión de la Verdad del Ecuador, en su informe final refiriéndose al Caso de Enrique Duchicela manifestó:

El 31 de mayo de 1988 el embajador de Ecuador en Lima, José Ayala Lasso, informó a la Cancillería de Ecuador, que el sargento Enrique Duchicela Hernández había desaparecido y que al respecto había dispuesto que se realicen las gestiones correspondientes para dar con el paradero del agente militar ecuatoriano [...].

Sin embargo de ello, el entonces ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Rafael García Velasco, no tomó las medidas que el caso exigía ni cumplió con su deber de realizar gestiones

¹⁰⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, Artículo 235, 12 de julio de 1979.

inmediatas para dar con el paradero de Enrique Duchicela, pese a su obligación jurídica de disponer el levantamiento de toda reserva en la información para determinar dicho paradero, aún cuando el embajador del Ecuador en Lima, una semana después de la desaparición, le dirigió un télex en el que le manifiesta que “conviene pedir a autoridades peruanas que se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción [...]”.

El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano tampoco puso el caso en conocimiento del procurador general del Estado para que este intervenga en representación del Estado y precautele la integridad de un ciudadano ecuatoriano.

El Estado ecuatoriano puede alegar que la desaparición del Sr. Duchicela no ocurrió en el Territorio ecuatoriano, sino en territorio que está bajo la jurisdicción del Estado peruano; por lo que mal pudiera el Estado ecuatoriano por su cuenta emprender acciones que están dentro de la soberanía del Estado peruano, como iniciar un proceso de investigación formal, a cargo de la Fiscalía del Estado en mención, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

De su parte, el Estado ecuatoriano sí hizo todo lo que estaba a su alcance, como es informar a las Autoridades en Ecuador de la desaparición del agente diplomático Enrique Duchicela, y posteriormente, dar a conocer el suceso al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el cual a su vez, informó el hecho a la Policía peruana. A más de ello, el Embajador Ayala Lasso mantuvo varias reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para dar seguimiento a la investigación sobre lo sucedido al Sr. Duchicela.

El Estado ecuatoriano nunca tuvo la certeza de que el Sr. Duchicela fue detenido, y menos aún, ejecutado por agentes del Ejército peruano, de forma que efectuar una afirmación de esa magnitud sin pruebas concretas, sin duda habría dado lugar al deterioro de las relaciones diplomáticas con Perú; paso al que tal vez se habría llegado pero con el pleno conocimiento de que en efecto, Perú incurrió en un acto de desaparición forzada en contra del Sr. Duchicela.

A la familia del Sr. Duchicela sí se le prestó la correspondiente asistencia, pues se mantuvieron varias reuniones con la Sra. Escobar en las que se le dio a conocer las gestiones que se estaban siguiendo en Perú de cara a conocer el paradero del Sr. Duchicela, de igual

forma, se procuró agilizar todas las gestiones pertinentes para que la Sra. Escobar reciba por ejemplo el salario que percibía su esposo y más adelante una pensión.

En tal virtud, el Ecuador argumentaría, que no se le puede atribuir responsabilidad por la violación del derecho a la vida del Sr. Duchicela, ya que sí se realizaron las gestiones, que dentro de su competencia, debía llevar a cabo el Estado ecuatoriano.

Examinado lo antes dicho, se ha de dejar sentado que el Estado ecuatoriano procedió de formas que constituyeron omisiones, como que al conocer que el Sargento Duchicela no llegó a trabajar a la Embajada de Ecuador en Lima el viernes 27 de mayo de 1988 y con el antecedente de la desaparición del Subteniente peruano Marcos Barrantes (el Agente peruano que le vendía la información al Sr. Duchicela) el 2 de marzo de 1988; el Estado ecuatoriano no inició acciones formales inmediatas.

Al tercer día de la desaparición, el lunes 30 de mayo (11:30 am), el Jefe inmediato del Sto. Duchicela –Coronel Palacio- informó al Sr. Embajador sobre la desaparición del Sr. Duchicela. Para este momento, la esposa del Sargento Duchicela había llamado a la Embajada ecuatoriana para solicitar información sobre su esposo, debido a que no pudo comunicarse con él; recibiendo como respuesta que se fue de misión.

Transcurridos 5 días de la desaparición, el martes 31 de marzo, el Embajador Ayala delegó al Agregado Aéreo y Cónsul General de Lima la realización de las gestiones para confirmar los indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar de Perú. Ese 31 de mayo, también la Cancillería ecuatoriana fue informada, por télex 181 del Embajador Ayala¹⁰⁹, que el Sargento Duchicela desapareció desde el viernes 27 por la tarde y que el martes 31 a las 10:00 am, se presentaron indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar del Perú siendo así dice le parece indispensable que la Cancillería coordine acciones con las Autoridades Militares pertinentes del Ecuador; a su

¹⁰⁹ TÉLEX 181. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 636.

vez, que se informe a Torre Tagle (El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú), dejando constancia documentada de la información para obtener el esclarecimiento del caso.

El miércoles 1 de junio, con télex 182 y 185, la Embajada de Ecuador en Lima informó haber iniciado gestiones **informales** ante la Cancillería peruana para obtener cooperación en la búsqueda del Sr. Duchicela. A su vez informó que autorizó aceptar la intervención de la División de Desaparecidos de Policía de Investigaciones, quienes actuarían con recomendación espacial del Viceministro del Interior y en absoluta reserva.

El viernes 3 de junio, el Embajador Lasso señaló al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en el télex 190 que:

*[...] que habiendo transcurrido una semana sin que la investigación **reservada** haya dado resultados conviene pedir a las **autoridades peruanas que se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción**. Agradeceré autorización expresa para proceder en este sentido¹¹⁰ (la negrita es mía).*

La respuesta al télex 190 llegó 12 días después de la desaparición, el 8 de junio en télex 200, el Embajador Ayala puso en conocimiento de la Cancillería ecuatoriana que:

*[...] el Ministro del Interior al conocer que el Ecuador había resuelto levantar la reserva que rodeaba la investigación del caso **solicitó que se mantenga dicha reserva** hasta cuando se encuentren los primeros indicios¹¹¹. (la negrita es mía)*

En estos télex podemos observar que el Estado ecuatoriano no actuó con acciones formales lo antes posible con el fin de recuperar a su miembro de misión, el Sr. Duchicela, aun conociendo del peligro que corría. Además, cuando el Embajador observa que las

¹¹⁰ TÉLEX 190. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 646.

¹¹¹ TÉLEX 200. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 511.

investigaciones no están dando un resultado eficiente ya solicita que se levante la reserva para investigar sin restricciones el caso, mas el Ministerio del Interior da la orden de mantener la reserva, tardándose 5 días en dar la respuesta; este accionar descuidado hizo posible que el 10 de junio el Sargento Duchicela fuera asesinado sin que el Estado ecuatoriano haya iniciado acción alguna, cuando un habeas corpus pudo salvar su vida.

En segundo lugar, el Estado ecuatoriano ocultó a la Sra. Escobar que su esposo había desaparecido y en un primer momento, le dijeron que se fue de misión, luego no le daban información, hasta terminar diciéndole que desertó y huyó con una amante. Cuando el Estado ecuatoriano ocultó la verdad de lo sucedido a la Sra. Escobar impidió que ella pudiera iniciar acciones legales en Perú para que su esposo fuera liberado y siendo cada hora que transcurría determinante, tardaban varios días en darle respuestas.

Desde el momento de la desaparición hasta el asesinato del Sr. Duchicela transcurrieron 15 días, días en los cuales la actuación diligente y pronta del Estado ecuatoriano pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte de su miembro de misión diplomática. El Estado ecuatoriano no actuó ni permitió que la Sra. Escobar lo haga.

En conclusión, el Estado ecuatoriano es responsable de la violación del derecho a la vida en la persona del Sargento Enrique Duchicela por omisión en relación a su deber jurídico de obrar.

3.4 Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención)

El artículo 3 de la Convención establece:

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

En relación a este derecho la Corte IDH ha observad que:

*[...] este derecho representa un parámetro para determinar si una persona es titular o no de los derechos de que se trate, y si los puede ejercer, por lo que desconocer aquel reconocimiento hace al individuo vulnerable frente al Estado o particulares [...]*¹¹².

Reforzando estos criterios, la Corte ha explicado:

*[...] es propio que se considere la vulneración al artículo 3 de la Convención en la desaparición forzada porque ya la negativa a reconocer la privación de la libertad y paradero de la víctima generan junto con la sustracción a la ley o la vulneración a la seguridad personal de la persona que se le impida directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica [...]*¹¹³.

En ésta misma línea en relación a la desaparición forzada, la Corte ha puntualizado:

*De este modo, la Corte tiene presente que una de las características de la desaparición forzada, a diferencia de la ejecución extrajudicial, es que conlleva la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, **con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte, de provocar intimidación y supresión de derechos.**(la negrita es mía)*

La CIDH se ha pronunciado en ese mismo sentir indicando que en la desaparición forzada, necesariamente la persona fue excluida del orden jurídico e institucional del Estado “*[...] lo que significa la negación de la propia existencia como ser humano revestido de personalidad jurídica*”¹¹⁴

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en un sentido similar ha indicado que en una desaparición forzada el derecho a la personalidad jurídica es vulnerado cuando:

a) la desaparición forzada priva a la personas de su capacidad para ejercer sus derechos, incluyendo todos los demás derechos del Pacto, y el acceso a cualquier posible recurso como una consecuencia directa de las acciones del Estado;

¹¹² CORTE IDH. Caso Anzualdo Castro Vs Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 88.

¹¹³ CORTE IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 4 de septiembre de 2012, párr.118.

¹¹⁴ INFORME N° 44/00, Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú, 13 de abril de 2000, párr. 45.

- b) si el Estado no ha conducido una investigación apropiada respecto del paradero de la persona desaparecida o proveído un recurso efectivo, y
- c) la desaparición forzada pone a la persona fuera de la protección de la ley¹¹⁵.

En referencia a Perú, la Corte pormenorizó que, este limbo jurídico en el que es sumergido el desaparecido es constatado incluso por la existencia de la Ley No. 28.413120 que:

[...] regula la posibilidad de solicitar la ausencia por desaparición forzada, con el fin de “[...] facilitar a los familiares del ausente de desaparición forzada [...] los instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos [...]”, mediante declaración judicial, la cual tiene los mismos efectos que la declaración judicial de muerte presunta [...]”¹¹⁶.

El Estado peruano podría orientar su defensa por criterios previos establecidos en casos como *Bácama Velásquez Vs. Guatemala* o *La Cantuta Vs. Perú*, en los que se determina que no se debe declarar la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración del Artículo 3 de la CADH en el marco de una desaparición forzada, por cuanto el Derechos a la personalidad jurídica tiene un contenido jurídico propio, y es natural que una ejecución extraiga a una persona del orden jurídico. De manera que, el derecho consagrado en el Artículo 3 de la CADH se refiere a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, siendo que¹¹⁷ *“[...] la violación de aquel reconocimiento [de la personalidad jurídica] supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes”¹¹⁸.*

Dicho lo anterior, corresponde analizar que en sus últimas sentencias relacionadas a desapariciones forzadas, la Corte ha incluido la violación del Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica en el conjunto de derechos que son violados cuando una persona es víctima de una desaparición forzada dado que las pretensiones de abstraer a la víctima de

¹¹⁵ COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, *Caso de Zohra Madoui v. Algeria*, Comunicación No. 1495/2006, 94º período de sesiones, CCPR/C/94/D/1495/2006 (2008), 28 de octubre de 2008, párrs. 7.7 y 7.8, y *Caso de Messaouda Kimouche v. Algeria*, Comunicación No. 1328/2004, 90º período de sesiones, CCPR/C/90/D/1328/2004 (2007), 10 de julio de 2007, párrs. 7.8 y 7.9.

¹¹⁶ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*, op. cit., párr. 57.

¹¹⁷ Cfr. CORTE IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2006, párr. 119 y 120.

¹¹⁸ CORTE IDH. *Caso Bécama Velásquez Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párr. 179.

todo ámbito del ordenamiento jurídico **y negar su existencia**, coloca a la persona en una situación indeterminada ante la sociedad y el Estado. Este limbo jurídico en que permanece la víctima conlleva el desconocimiento en términos absolutos de la posibilidad de ser titular de los derechos y deberes civiles y fundamentales¹¹⁹.

Conforme al testimonio del Sr. Jesús Sosa y según el informe, suscrito por el Crnl. Luis Cárdenas, dos meses después de la desaparición del Sgto. Duchicela¹²⁰; el Estado peruano identificó al Sr. Duchicela como el beneficiario de la información filtrada ilícitamente por miembros de su ejército, por lo que lo detuvieron.

En virtud de la desaparición del Sr. Duchicela, el miércoles 1 de junio de 1988, con télex 182¹²¹ y 185¹²², la Embajada de Ecuador en Lima informó haber iniciado gestiones **informales** ante la Cancillería peruana ante Torre Tagle para obtener cooperación en la búsqueda del Sr. Duchicela y que habría aceptado la intervención de la División de Desaparecidos de Policía de Investigaciones que actuaría con recomendación especial del Viceministro del Interior, el cual informó¹²³, que el caso Duchicela había sido llevado a conocimiento del Presidente del Perú, Alan García. A su vez, el viernes 10 de junio de 1988, el Canciller del Perú -Luis González Posada- contestó a la Nota de la Embajada de Ecuador en Lima que “[...] la Cancillería ha cumplido con transmitir toda la información del caso a las autoridades pertinentes [...].”

¹¹⁹ Cfr. CORTE IDH. *Caso García y familiares Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 109; y *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 4 de septiembre de 2012, párr.119.

¹²⁰ Cfr. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección C, párr. 1, foja 27.

¹²¹ TÉLEX 182. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 638.

¹²² TÉLEX 185. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 637.

¹²³ Cfr. TÉLEX 196. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 649.

En concordancia a lo citado en párrafos precedentes de este apartado, la Corte ha distinguido que la **negativa a reconocer la privación de la libertad y paradero** de la víctima generan junto con **sustracción a la ley** o la **vulneración a la seguridad de la persona** que se le impida el reconocimiento de la personalidad jurídica, en adición a esto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU establece entre sus parámetros el que el Estado **no haya realizado una investigación apropiada respecto al paradero de la persona**.

En los hechos, se observa que aun cuando el Estado ecuatoriano puso en conocimiento de la Cancillería de Perú la desaparición del Agente Diplomático Duchicela, y la Cancillería en su respuesta informó que el Caso se había puesto en conocimiento de las autoridades competentes y del mismo Presidente de la República de Perú; **nunca se reconoció la privación de la libertad del Señor Duchicela y por ende, tampoco se pronunciaron sobre su paradero**. Como se analizará en el apartado relativo a la obligación de investigar del Estado peruano, no se realizó una investigación apropiada sobre el destino del Sr. Duchicela en un plazo razonables, tal es así, que han transcurrido 26 años desde la desaparición y aun cuando el Sr Jesús Sosa ha declarado públicamente lo que realizó al Sr. Duchicela, el Estado peruano no emprendido una investigación seria para aclarar los hechos y sancionar a los responsables.

Luego de ser detenido, el Sr. Duchicela fue trasladado a los Sótanos del SIE, que venía a ser un centro clandestino de privación de la libertad, en donde fue aislado y permaneció incomunicado, con lo que estaba siendo **sustraído del Orden Jurídico establecido**; pues, el Sr. Duchicela no podía ser sujeto de un proceso judicial según la ley, interponer recursos judiciales efectivos, y en general, fue impedido de ejercer sus derechos.

A esto se le suma que, el Sr. Duchicela estaba a la merced de agentes estatales que de forma sistemática practicaban actos como tortura y ejecuciones sumarias, lo que supone ya una **vulneración la seguridad personal del Sr. Duchicela**.

Por otra parte, la vulneración de este derecho, también provoca una consecuencia en relación a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, expresando la Corte que la

situación de indeterminación jurídica del desaparecido trasciende de su persona porque la incertidumbre sobre la vida o muerte, se traslada a terceros en cuestiones relacionadas a derechos hereditarios, laborales, de propiedad, entre otros¹²⁴. Concatenando el Caso Duchicela a lo puntualizado por la Corte, cabe decir que se evidencia que la familia directa del Sr. Duchicela también fue sumergida en un limbo jurídico, pues por la situación indeterminada en que se encontraba el Sr. Duchicela no podían seguir los procesos determinados para ejercer sus derechos hereditarios, gestionar la asignación de pensiones y demás.

En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que el Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica del Sr. Duchicela fue vulnerado al negar el Estado peruano que el Sr. Duchicela estaba bajo su control, no brindar información respecto a la situación de la víctima con el propósito de provocar incertidumbre sobre su paradero, vida y muerte, provocándose la supresión de derechos, y finalmente, no realizar una investigación apropiada sobre su destino. Igualmente, esta situación colocó en un limbo jurídico a su familia, lo que produjo que la misma también sea imposibilitada de ejercer derechos.

3.5 Derecho a la Protección Judicial (artículo 25 de la Convención)- Estado peruano y ecuatoriano.

El artículo 25 de la Convención prescribe:

- 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*
- 2. Los Estados Partes se comprometen:*
 - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;*
 - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y*
 - c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

¹²⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 57.

La Corte ha establecido que las obligaciones del Estado que se desprende del art 25:

"[...] no se refieren sólo a la existencia formal de los recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 [...]"¹²⁵

Así, en relación al derecho de acceso a la justicia, la Corte ha indicado que:

[...] no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables [...]"¹²⁶

A más de ello, la Corte especificó que:

[...] no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios [...]"¹²⁷.

En concordancia con la cita anterior, la CIDH ha expresado que:

*[...] en el marco de una “práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos **se convierte en una formalidad sin sentido** [...]"¹²⁸.*

Por lo que en estos casos, incluso la Corte hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención.

En relación a la desaparición forzada, la Corte ha dicho que:

¹²⁵ CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 63.

¹²⁶ CORTE IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 15 de septiembre de 2005, párr 216.

¹²⁷ CORTE IDH. *Caso Bárcena Velásquez Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párr. 191.

¹²⁸ INFORME N° 44/00. *Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú*. 13 de abril de 2000, párr. 10.

*[incluyéndose entre sus objetivos] impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud, o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva [...]*¹²⁹.

El Estado peruano podría afirmar que en la Legislación peruana sí se preveían y reglaba en su Sistema recursos judiciales contra la violación de derechos de las personas bajo su jurisdicción; sin embargo, la Sra. Escobar nunca interpuso los recursos judiciales a su disposición, como pudo ser un *habeas corpus*. En este sentido, no es posible alegar la vulneración de este derecho, si la Sra. Escobar, que sería la legitimada activa, no tuvo la voluntad de interponer el recurso.

En el Caso del Sr. Duchicela, el recurso efectivo habría sido un *habeas corpus*; señalando la Comisión en relación a este recurso en Perú:

*[...] el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad [...] dado que [...] existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, [se] tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones*¹³⁰ *(la negrita es mía)*.

En efecto, en el Caso del Sr. Duchicela, el recurso de *habeas corpus* era inaccesible por haber dado que en 1988 se vivía en un contexto de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en que se habían desplegado grupos especializados en desapariciones forzadas, mismo que operaban con anuencia del Estado peruano.

¹²⁹ CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 133.

¹³⁰ INFORME N° 44/00. *Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú*. 13 de abril de 2000, párr. 10.

Por otro lado, al ser el Sr. Duchicela aislado e incomunicado en los sótanos del SIE, fue sustraído del Ordenamiento Jurídico e institucionalidad, lo que le hacía imposible accionar cualquier recurso.

Este estado de incomunicación más la negativa del Estado de reconocer que el Sr. Duchicela víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto, a su vez hizo imposible que la familia del Sr. Duchicela interponga alguno de los recursos previstos en el Ordenamiento Jurídico peruano para evitar los actos violatorios de derechos de los que fue víctima el Sr. Duchicela, ante lo cual, la Corte ha dejado sentado que en casos de desapariciones forzadas es menester que los familiares de la víctima puedan acceder a judiciales rápidos y eficaces. En este caso, a la Sra. Escobar (esposa del Sr Duchicela) hasta miembros del Ejército peruano le prohibieron el ingreso a Perú, asegurando saber quién era Marta Escobar de Duchicela y lo que supuestamente quería en el Perú. Estos miembros del Ejército peruano inclusive tomaron ventaja de la situación de vulnerabilidad en que se hallaba la Sra. Escobar, apropiándose del dinero que llevaba y profiriendo amenazas para que no cruce la frontera. Sobre este hecho la Sra. Escobar relató:

*Me fui a Huaquillas, revisé como pasarme a Perú para averiguar [...] y en la cadena me detuvieron tres personas que me dijeron vamos acá y me llevaron a una caseta que estaba cerca o junto al puente, me dijeron que para qué cruzaba al Perú, **que ellos sabían quién era**, [...] me dijeron despóticamente que si no declaraba para qué me había ido que **me llevarían a Iquitos a que declare, que les dé nombres de informantes**. [...] me dijeron “sí, sabemos que anda con cinco personas más, quiénes son?”, yo les dije “familia y de los Derechos Humanos. [...] Fueron a hablar entre ellos, me dijeron bueno, me entregaron un poco de intis que era la moneda de ese tiempo, mis papeles y la cartera, salimos y me dijeron “compra la falda que dijiste que quieres comprar”, yo les dije que ya no quería y con prepotencia me dijeron “compra”. Yo cogí un vestido y ellos me dijeron “fue una falda. No?”. Le ordenaron al vendedor que me den una falda y punto. Lo compré y me pusieron en la cadena.*

Esos momentos fueron muy difíciles para mí porque temía que me pase algo como ya me habían advertido en mi país, y qué pasaría con mis hijas?¹³¹ (la negrita es mía).

¹³¹NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR, *Declaración Juramentada* [...], op.cit., p 15 y 16.

Por su parte, el Estado ecuatoriano alegaría que en ningún momento ha realizado actos conducentes a impedir que la Sra. Escobar interponga las acciones pertinentes en Perú, de forma que ella tenía plena libertad de iniciarlos.

En cuanto a la información proporcionada a la Sra. Escobar, sí se puso en su conocimiento todos aquellos datos de los que disponía el Estado ecuatoriano, considerando que el propio Estado ecuatoriano no sabía con certeza lo acaecido al Sr. Duchicela; frente a lo cual emprendió gestiones antes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú con el propósito de que se impulsen las investigaciones pertinentes.

Tiempo después, cuando la Sra. Escobar decidió interponer los recursos previstos en la Constitución de la República del Ecuador, también tuvo pleno acceso a los mismos; notando que interpuso una Acción de Acceso a la Información Pública, una Acción de Protección, que conforme le asiste su derecho, apeló; y, una Acción Extraordinaria de Protección. Siendo que el Juez competente emitió la respectiva resolución de forma motivada, observando en todo tiempo las normas pertinentes; es decir, atendiendo tanto al fondo como a la forma.

Por consiguiente, la Sra. Escobar si tuvo acceso a recursos judiciales efectivos en la Jurisdicción ecuatoriana; y, en lo concerniente a presentar recursos judiciales en Perú, en ningún momento fue impedida de hacerlo.

Atendiendo al posible argumento del Estado ecuatoriano, se hacer un análisis abordando varios elementos como que el Estado ecuatoriano, pudo no poseer información suficiente al tiempo de la desaparición, pero aquello no explica el que haya proporcionado a la Señora Duchicela información falsa sobre la desaparición de su esposo, como que había huido con una amante Peruana, con el fin de ocultar lo ocurrido; esto devino en que la Señora Escobar no interpusiera un recurso ante la justicia peruana, pues, si se trataba de que huyó ¿qué recurso cabía?

Después de la muerte del Sr. Duchicela, el Estado ecuatoriano dejó en la indefensión a la Sra. Escobar porque al difundir el Ministro de Defensa ecuatoriano como versión oficial, en rueda

de prensa, que el Señor Duchicela había desertado del servicio y escapado con una amante le cerraba a la Sra. Escobar la posibilidad de requerir a los órganos competentes información verídica sobre lo acontecido al Sr Duchicela, el solicitar que se inicien las investigaciones pertinentes en Perú, y, conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que se realicen las gestiones para que el Sr. Duchicela sea puesto en libertad.

En lo que concierne a este derecho, la Comisión de la Verdad de Ecuador manifestó en su informe final:

El caso de Duchicela no se judicializó en Ecuador, debido a la omisión de los funcionarios ecuatorianos que conociendo los hechos desde sus inicios no actuaron [...]. Además no han existido adecuados impulsos del Ecuador para que se adelanten las investigaciones en Perú.

Más adelante, tras ver la pasividad del Estado ecuatoriano, la Sra. Escobar inició múltiples acciones legales en Ecuador con el fin de conocer la verdad de lo sucedido. Estas acciones consistieron en:

- En enero del 2005, la Sra. Marta Escobar presentó la denuncia N.- 140-2005 por los delitos de delitos omisión y encubrimiento de la desaparición forzada de Enrique Duchicela. El 16 de octubre de 2008, la Fiscal resolvió inhibirse del conocimiento de la causa por falta de jurisdicción.
- El 22 de agosto del 2011, fue interpuesta una Acción de Protección. El 7 de octubre de 2011, el Juez Séptimo de Garantías Penales de Pichincha emitió la sentencia rechazando la Acción de Protección. El 1 de noviembre de 2011, la Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia avocó conocimiento de la apelación. El 18 de abril de 2012, la Corte Provincial de Justicia desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado.
- El 17 de mayo de 2012, la Sra. Escobar interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional debido a la falta de motivación en la sentencia emitida respecto a la Acción de Protección. El 19 de septiembre de 2012, la Corte

Constitucional emitió un auto de la acción extraordinaria de protección, e inadmitió a trámite dicha acción, disponiendo su archivo.

- El 31 de agosto y 15 de septiembre de 2011, Marta Escobar interpuso una Acción de Acceso a la Información Pública contra el Ministerio de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, respectivamente, debido a que transcurridos los 15 días determinados por la Ley, el Sr. Ministro no se pronunció sobre la petición de Acceso a la Información Pública.
- El 16 de septiembre de 2011, el Juez Segundo del Inquilinato, quien conoce la causa, emitió sentencia por la que acepta la acción de acceso a la información pública interpuesta por la Sra. Escobar, disponiendo al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración que en el término de 5 días proporcione a la parte accionante la información y documentación recabada por ese Ministerio sobre lo sucedido al Sbo. Enrique Duchicela desde su desaparición. El 16 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración hizo llegar un listado de documentos, en el que no se incluía toda la información solicitada y que el Juez Segundo del Inquilinato dispuso se haga llegar.
- El 18 de junio del 2012, el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha emitió sentencia sobre la Acción de Acceso a la Información Pública contra el Ministerio de Defensa. En la sentencia se aceptó dicha acción por lo que se dispuso que le sea entregada la información solicitada a la accionante, más en la práctica no se recibió todo lo solicitado.

En cuanto a estas acciones, cabe destacar que aun cuando en las acciones de Acceso a la Información Pública, se dispuso en las sentencias que se entregue a la Sra. Escobar las acciones requeridas, toda la información no fue entregada. En este aspecto, el artículo 25.2.a de la CADH establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de toda decisión en que se haya considerado procedente un recurso, de forma que al no hacer

llegar a la Sra. Duchicela toda la información dispuesta por el juez, se ha vulnerado este derecho.

En vista de lo expuesto en el párrafo anterior, la Sra. Escobar interpuso una Acción de Protección, la cual fue rechazada en todas sus instancias sin la debida motivación de las autoridades judiciales, quienes se limitaron a transcribir los alegatos de las dos partes, dejando de lado un análisis en derecho en el que se tengan en cuenta las obligaciones contraídas por el Estado ecuatoriano en materia de Derechos Humanos en virtud de ser parte de la CADH, enunciado brevemente que no se habían vulnerado en este caso derechos constitucionales dado que el derecho a la verdad no se encuentra reconocido en la Constitución y que propiamente es contra el Estado peruano contra quien se debe emprender acciones.

En esta afirmación se dejó de lado que a la luz de la CADH, los Estados se comprometen a garantizar los derechos contemplados en la misma (artículo 1.1) y a adoptar todas las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de la CADH (artículo 2); y que en concordancia con estas obligaciones, la Constitución del Ecuador¹³² prescribe que los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador se entienden incorporados al Ordenamiento Jurídico ecuatoriano, siendo que los tratados en materia de Derechos Humanos incluso alcanzan una jerarquía supraconstitucional cuando son más favorables a la persona. De ésta forma no se consideró que el derecho a la verdad se halla contemplado en la Constitución y que a más de ello ese parte del ordenamiento jurídico en su desarrollo, pues el SIDH lo ha establecido como parte del derecho contemplado en el artículo 25 de la CADH.

Al término vemos que, como lo dijo la Comisión de la Verdad, hubo negligencia en la inacción de los funcionarios públicos de aquella época sin embargo, no se realizaron las investigaciones pertinentes esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada funcionario llamado a actuar y se llevaron procesos judiciales que no contribuyeron a esto por la orientación ligera con que se desarrollaron, lo que se refleja en la argumentación de los

¹³² Cfr. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

jueces. En este obrar se puede distinguir que se procedió en sentido contrario a la Corte en cuanto a que el derecho de acceso a la justicia:

[...] no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.

En conclusión tanto el Estado peruano como el Estado ecuatoriano han vulnerado el derecho contemplado en el artículo 25 de la Convención en perjuicio tanto del Sr. Duchicela como de Marta Escobar, Paulina y Jessica Duchicela. Esto en consideración a la falta de efectividad del recurso de *habeas corpus* contemplado en el Ordenamiento Jurídico peruano. Mientras que el Estado ecuatoriano impidió que la Sra. Escobar inicie las acciones pertinentes en Perú al negarle la información verídica, difundir como oficial una versión falsa y rechazar las acciones iniciadas por la Sra. Escobar ante los Órganos de Justicia ecuatoriano sin la debida motivación.

3.6 Derecho a las Garantías Judiciales (artículo 8.1 de la Convención) y Derechos a Protección Judicial (artículo 25 de la Convención) en relación al Derecho a la Verdad y la obligación de investigación de los Estados ecuatoriano y peruano.

El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

El artículo 25.1 de la Convención dispone que:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

El artículo 1 de la Convención prescribe:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Corte ha identificado que hay un vínculo inseparable entre la obligación de los Estados de investigar y la lucha contra la impunidad, por lo que advierte:

*[...] el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares [...]*¹³³

En concordancia con la cita precedente, la Corte aclara que el Estado tiene un deber jurídico tanto de investigar como de sancionar a las personas que han incurrido en violaciones a los Derechos Humanos; buscando como mínimo a través de la investigación *ex officio*, el esclarecimiento de los hechos dentro de un plazo razonable¹³⁴; así la Corte expresa:

*El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación [...]*¹³⁵.

De igual forma, la Corte afirma que la obligación de iniciar una investigación va más allá de una mera formalidad de modo que para entender que un Estado ha cumplido con ésta, la

¹³³ CORTE IDH. *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia*. Sentencia, 15 de septiembre de 2005, párr. 237.

¹³⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005, párr. 80.

¹³⁵ CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 174.

investigación debe ser asumida con tal seriedad, que tenga sentido y no esté condenada de antemano a ser infructuosa. Se añade que el Estado debe realizar la investigación como un deber jurídico propio por el cual efectivamente busca la verdad, de modo que no sea una simple gestión de intereses particulares que depende la iniciativa de la familia¹³⁶.

En términos de la Corte:

*[...] para que una investigación se considere seria, imparcial, y asumida como un deber jurídico propio es necesario que se haga la determinación de los hechos que se investigan en un plazo razonable.*¹³⁷

Como parámetros para determinar si un plazo es razonable, la Corte analiza los siguientes parámetros: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso¹³⁸. Sin embargo, cuando es evidente que se ha traspasado la barrera del tiempo razonable, la Corte indica:

*[...] no es necesario realizar el análisis de los criterios mencionados dado que es evidente que el tiempo transcurrido sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para que el Estado investigara los hechos [...], máxime si se tiene en cuenta que a ese tiempo se deberá sumar el tiempo que tome el procesamiento, individualización e identificación de otros posibles responsables y el trámite del proceso penal en sus distintas etapas, hasta la obtención de una sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una flagrante denegación de justicia y una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas*¹³⁹.

De igual forma, en los casos de desapariciones forzadas es propio recordar que:

¹³⁶ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 177.

¹³⁷ CORTE IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de mayo de 2010, párr. 196.

¹³⁸ CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 153.

¹³⁹ *Ibidem*, párr. 153.

[...] es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse privada de libertad¹⁴⁰.

Asimismo, en el caso de desapariciones forzadas, la obligación de investigar del Estado subsiste mientras exista incertidumbre sobre el paradero del mismo, sosteniendo la Corte que:

[...] en casos de desaparición forzada, la investigación tendrá ciertas connotaciones específicas que surgen de la propia naturaleza y complejidad del fenómeno investigado, esto es que, adicionalmente, la investigación debe incluir la realización de todas las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de la víctima y la localización de su paradero. El Tribunal ya ha aclarado que el deber de investigar hechos de esta naturaleza subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, pues el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance [...]¹⁴¹.

Haciendo alusión la obligación de investigar del Estado y los derechos de la familia de las víctimas en caso de desapariciones forzadas, la Corte ha dicho:

En consecuencia, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo sucedido a aquéllas sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares han sufrido¹⁴².

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la actitud del Estado es importante de cara a la investigación de los hechos como una forma de respeto del

¹⁴⁰ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 134.

¹⁴¹ CORTE IDH. *Caso Conteras y otros Vs El Salvador*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2011, párr. 129.

¹⁴² CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005, párr. 79.

derecho de los familiares de las víctimas quienes podrían resultar víctimas por la actitud displicente del Estado:

151.The essence of the issue under Article 3 is not that there has been a serious human rights violation concerning the missing person; it lies in the authorities' reactions and attitudes to the situation when it has been brought to their attention. The relevant factors include the proximity of the family tie, the particular circumstances of the relationship, the extent to which the family member witnessed the events in question, the involvement of the family member in the attempts to obtain information about the disappeared person. The Court emphasises that the finding of such a violation is not limited to cases where the respondent State has been held responsible for the disappearance but can arise where the failure of the authorities to respond to the quest for information by the relatives or the obstacles placed in their way, leaving them to bear the brunt of the efforts to uncover any facts, may be regarded as disclosing a flagrant, continuous and callous disregard of an obligation to account for the fate of the missing person [...].¹⁴³ (La negrita es mía)

También, el referido Tribunal Europeo considera que aun si el Estado no fuese legalmente responsable por la muerte o desaparición de una persona, éste debe mostrar respeto ante el dolor de los familiares de la víctima, lo que deviene en obtener información sobre hechos relevantes; ya que el silencio de las autoridades en relación a las verdaderas preocupaciones de los familiares corresponde a un trato inhumano, expresándolo al siguiente tenor:

163.The scope of the State's obligation under Article 3 is significantly larger than an acknowledgement of the fact of death. Even though the State is not legally responsible for the death or disappearance, Article 3 requires it to exhibit a compassionate and respectful approach to the anxiety of the relatives of the deceased or disappeared person and to assist the relatives in obtaining information and uncovering relevant facts. The silence of the authorities of the respondent State in face of the real concerns of the relatives may only be categorised as inhuman treatment.¹⁴⁴

En cuanto al artículo 8 de la Convención la Corte ha dejado sentado:

El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por

¹⁴³ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Case of Janowiec and Others V. Russia*. Fifth Section, Applications nos. 55508/07 and 29520/09, decision of April 16th, 2013.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

*lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que se procure determinar la suerte o paradero de la víctima*¹⁴⁵.

Ahora, en lo relativo al art 8.1 y 25.1 en relación al Art 1 de la Convención, y en general a las investigaciones efectuadas en el marco de un proceso penal, la Corte ha considerado:

[...]Estado está en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).

Para que una investigación penal constituya un recurso efectivo para asegurar el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, así como para garantizar los derechos que se han visto afectados en el presente caso, debe cumplirse con seriedad y no como [...] una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos Probatorios.

3.6.1 Análisis en relación a la Obligación de investigar del Estado peruano

En consideración a los hechos del Caso, se debe notar que tras la desaparición del Sr. Duchicela, el miércoles 1 de junio de 1988, con télex 182¹⁴⁶ y 185¹⁴⁷, la Embajada de Ecuador en Lima informó haber iniciado gestiones informales ante la Cancillería peruana ante Torre Tagle para obtener cooperación en la búsqueda del Sr. Duchicela, aceptando la intervención de la División de Desaparecidos de la Policía de Investigaciones. También, la desaparición del Sr. Duchicela habría llegado a conocimiento del Ministerio del Interior,

¹⁴⁵ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr.124.

¹⁴⁶ TÉLEX 182. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 638.

¹⁴⁷ TÉLEX 185. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 637.

cuyo Viceministro informó al Estado ecuatoriano que el Caso se expuso al Presidente del Perú Alan García¹⁴⁸. A su vez, el viernes 10 de junio de 1988, el Canciller del Perú -Luis González Posada- contestó a la Nota de la Embajada de Ecuador en Lima que “[...] la Cancillería ha cumplido con transmitir toda la información del caso a las autoridades pertinentes [...]”.

En el 2007, por medio la declaración juramentada que Jesús Sosa hizo durante el proceso seguido contra Julio Hernán Ramos Hernández y otros por delito Contra la Humanidad-Desaparición Forzada, en agravio de Marco Barrantes Torres, llegó a conocimiento de las Autoridades judiciales peruanas la participación de Jesús Sosa en la ejecución del Sargento Duchicela. Para esto, ya en el 2004, se había publicado el libro “*MUERTE EN EL PENTAGONITO. Los cementerios secretos del Ejército Peruano*”, cuyo capítulo VIII -titulado “El espía que no regresó a Quito”- presentaba un relato de lo que le habría ocurrido al Sargento Duchicela.

El Libro tuvo un alto impacto mediático, tanto en Ecuador como en Perú, por haber sido la fuente del autor el Sr Jesús Sosa así como por la revelación de los hechos posteriores a la detención del Sr. Duchicela, lo que contemplaba que había sido sujeto de tortura, ejecutado junto a Marco Barrantes, y finalmente sus cuerpos incinerados en los Sótanos del SIE.

El 30 de julio del 2008, Jesús Sosa compareció en calidad de testigo a la sesión pública N.-85 del juicio contra el ex presidente Fujimori, y admitió haber sido autor del asesinato del Sargento Duchicela y Marco Barrantes. Incluso la declaración de Jesús Sosa fue transmitida por el canal de TV de Lima Canal N (Noticias)¹⁴⁹ cuando decía:

¹⁴⁸ TÉLEX 196. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 649.

¹⁴⁹ Cfr. Transcripción del interrogatorio a Jesús Sosa Saavedra, transmitido en vivo por el Canal de Tv DE Lima, Canal N (Noticias, 30 de julio del 2008. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández, Sección 2, punto 1, 17 agosto 2008. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 418 a 420.

En mayo de 1988 fui llamado a Lima donde se me ordenó capturar y desaparecer al Espía ecuatoriano Enrique Duchicela, por orden expresa del Presidente Alan García, orden que fue cumplida totalmente, luego de lo cual fui felicitado por el primer mandatario y por el Comandante General del Ejército.

En marzo de 2007, durante la segunda Presidencia de Alan García, la Fiscalía Penal Supranacional inició una indagación previa de oficio. No obstante, el proceso no prosperó, disponiendo la Fiscalía peruana el archivo provisional de la causa por no haber mérito para formular la denuncia por comisión del delito Contra la libertad Personal –Secuestro y delito contra la Humanidad –Desaparición Forzada en agravio de Enrique Duchicela; alegando, entre otras cosas, que los incineradores que se describen en el Libro “Muerte en el Pentagonito” no existen y que de ser reales no cabrían cuerpos humanos en su interior.

El 2 de junio de 2009, durante la continuación de su declaración indagatoria, Jesús Sosa reconoció el contenido y firma de la declaración juramentada de fecha 15 de enero de 2007 y se ratificó lo escrito, cuyo texto confesaba su participación como autor material de la muerte del Sr. Duchicela.

La Corte ha señalado que el Estado tiene la obligación de luchar contra la impunidad, para lo cual es indispensable que ante las violaciones de derechos humanos emprenda las correspondientes investigaciones.

De su lado, el Estado peruano podría dejar sentada una postura en el similar sentido del Caso *Gómez Palomino vs Perú*; en la cual asumió que pudieron ocurrir violaciones a los artículo 8 y 25 de la CADH desde 1988 hasta el año 2000, a causa de que a partir de la transición a la democracia, se produjeron las “[...] condiciones de libertad y autonomía institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial para que las autoridades jurisdiccionales actúen libres de presiones de interferencias del poder político”¹⁵⁰.

¹⁵⁰ CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005, párr. 71.

En cuanto a las investigaciones en relación al Caso, podrían señalar que una indagación previa fue abierta en el año 2007, una vez instaurado el antes dicho proceso de transición a la democracia, más estas han experimentado una demora en razón de que los delitos de lesa humanidad, como es una desaparición forzada, son de carácter complejo. Sin embargo, sí ha habido la voluntad del Estado peruano de cumplir con su obligación de investigar.

Observando un posible argumento del Estado peruano, sí es propio especificar que la desaparición del Sr. Duchicela era de conocimiento de altas autoridades del Estado peruano, según se desprende de las notas diplomáticas que éstas remitieron al Estado ecuatoriano; siendo así, el Estado peruano debió inmediatamente realizar las investigaciones de cara a dar con el paradero del Señor Duchicela, sobre todo teniendo en cuenta que mientras más tarda en iniciarse la investigación, son menos las probabilidades de encontrar con vida a una persona; pero, el Estado no dio pie a una investigación, dejando el caso en la impunidad. Esto pese a que incluso, el Estado peruano tenía esta obligación respecto al Estado ecuatoriano por ser el Estado de acogida del Sr. Duchicela en su calidad de miembro de la Misión Diplomática del Ecuador, lo que al amparo del Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas, colocaba al Estado peruano frente a un deber de protección en estos términos:

Art. 29.-La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. (la negrita es mía).

A más de ello, la Corte deja sentado que para que sea cumplida la obligación de investigar del Estado, la investigación debe ser seria y no una mera formalidad que este destinada a ser infructuosa.

En el año 2004, se publica el libro “Muerte en el Pentagonito”, el cual alcanza de alto impacto mediático y recoge hechos delictivos aseverando que son verdaderos, ante esto el Estado peruano no inició investigaciones sobre el Caso del Sr. Duchicela, lo que era una obligación como bien ha manifestado la Corte en relación a este libro en el *Caso Anzualdo Castro vs Perú*:

*[...] ese testimonio estuvo a disposición del Estado o debería haberlo estado si éste hubiera procedido con la necesaria diligencia en las investigaciones.*¹⁵¹. (la negrita y el subrayado son míos).

Realizadas de forma pública las declaraciones del ex agente del SIE, Jesús Sosa, la Fiscalía inicia en el 2007, una indagación previa en el Caso Duchicela, y luego dispone el archivo provisional de la causa sosteniendo, entre otras cosas, que los incineradores que se describen en el Libro “Muerte en el Pentagonito” no existen y que de ser reales no cabrían cuerpos humanos en su interior. La Fiscalía presenta estos argumentos cuando en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, publicado en el año 2003, se constata la existencia de dichos incineradores con restos humanos en los Sótanos del SIE. De igual forma, en el Caso *Anzualdo Castro vs Perú*, el perito enviado por la Corte IDH corroboró lo dicho por la Comisión de la Verdad. Contradicciones como estas por parte de la Fiscalía, permiten ver que la investigación fue asumida como una mera formalidad pero que no se realizaron gestiones con la debida diligencia para conducir al esclarecimiento de los hechos, la determinación del paradero de los restos de la víctima y se sanciones a los responsables.

En este mismo, sentido, el Estado peruano ha vuelto a realizar ninguna gestión de investigación desde el archivo provisional de la Causa, con lo que ha dejado de la lado lo establecido por la Corte en cuanto a que en los casos de desapariciones forzadas, la obligación del Estado de investigar, subsiste mientras exista incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida, en virtud de que es una expectativa razonable y derecho de los familiares de la víctima el conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos.

El Estado peruano podría manifestar que entre 1988 y el 2000, en efecto no se había dado las condiciones de libertad suficientes para que las autoridades competentes emprendan procesos de investigación; mas, a partir del año 2000 tampoco se observa una gestión de investigación seria y continúa de cara a esclarecer los hechos de la desaparición del Sr. Duchicela.

¹⁵¹ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 40.

La Corte establece que también una investigación para que sea seria, imparcial y asumida como un deber jurídico propio, debe efectuarse en un plazo razonable. En el Caso del Sr. Duchicela transcurrieron 19 años desde el momento de la desaparición hasta que la fiscalía inicio una indagación previa, en la que tuvieron lugar diligencias superficiales y sin resultado ante lo que se dispuso el archivo del expediente. A la fecha, han mediado ya 26 años sin investigación y resultados que den lugar a un proceso penal para identificar y sancionar a los responsables.

En el Caso *García y Familiares vs Guatemala*, transcurrieron 25 años sin que se realice la debida investigación desde la desaparición del Sr. García¹⁵²; siendo a criterio de la Corte claramente un plazo excesivo, por lo que analiza los parámetros citados en los primeros párrafos de este apartado sino que asevera que la investigación no había tenido lugar en un plazo razonable. Tomando este precedente de la Corte, al haber transcurrido 25 años sin que se efectúen investigaciones orientadas a obtener un resultado, se puede afirmar que en el Caso Duchicela, el Estado peruano ha excedido el plazo razonable.

En esta misma línea, se ha de recordar también, que esta demora prolongada constituye *per se*, una violación a las garantías judiciales y del derecho de acceso a la justicia, que conforme lo manifestado por la Corte requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos, que se investiguen y se identifique la responsabilidad penal.

Por prolongada inacción del Estado en relación a las investigaciones y por haber realizado mínimas diligencias una vez abierta la indagación previa en el Caso Duchicela, de la cual se dispuso el archivo provisional sin emprender proceso investigativo alguno, podemos concluir que el Estado peruano ha faltado a su obligación de iniciar una investigación, vulnerando los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en perjuicio de la esposa e hijas del Sr. Duchicela.

¹⁵² Cfr. CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012, párr. 153.

3.6.2 Análisis en relación a la Obligación de investigar del Estado ecuatoriano

En relación al Caso del Sr. Enrique Duchicela, la Comisión de la Verdad de Ecuador en su informe manifestó:

*Desde la desaparición de Enrique Duchicela, los sucesivos gobiernos ecuatorianos, pese a la insistencia de su familia **no presentaron ningún reclamo oficial o formal requerimiento de investigación ante el gobierno del Perú** u organismos internacionales **ni tampoco dispusieron a los organismos nacionales la realización de investigaciones para establecer los hechos**. La esposa del desaparecido, Martha Escobar Andrade, remitió cartas desde 1988 a los presidentes de la República del Ecuador en ejercicio, empezando por León Febres Cordero que a la época se encontraba en funciones, así como a los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, **sin lograr que se iniciaran las investigaciones que solicitaba**. Ese hecho permitió que se mantuviera la versión de su desaparición por razones pasionales, **por lo cual es evidente la omisión en la que incurrieron, a su turno, dichas autoridades nacionales**.*

*De la misma manera, remitió solicitudes a distintas dependencias del Perú a fin de obtener información sobre lo realmente ocurrido con su esposo, sin lograr tampoco respuesta [...]. **Además no han existido adecuados impulsos del Ecuador para que se adelanten las investigaciones en Perú**. (la negrita y el subrayado son míos).*

En relación a lo dicho por la Comisión de la Verdad de Ecuador, en el expediente del proceso de acceso a la información pública dentro del Caso del Sr. Duchicela, se ha podido identificar, entre otros, los siguientes hechos:

En el transcurso del viernes 27 de mayo, el Sr Duchicela “*no acudió a su lugar de trabajo a cumplir con sus labores respectivas en la Embajada*”¹⁵³, siendo que debía presentarse a las 18:00 para realizar la guardia aquella noche. El lunes 30 tampoco se presentó a laborar.¹⁵⁴

Tres días después de la desaparición, lunes 30 de mayo (11:30 am), el Jefe inmediato del Sto. Duchicela –Coronel Palacio- informó al Sr. Embajador sobre la desaparición del Sr. Duchicela

¹⁵³ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección B, Párrafo 1, foja 627

¹⁵⁴ Ibídem, foja 627.

Transcurridos 5 días de la desaparición, el martes 31 de marzo, el Embajador Ayala delegó al Agregado Aéreo y Cónsul General de Lima la realización de las gestiones para confirmar los indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar de Perú.

Ese 31 de mayo, también la Cancillería ecuatoriana fue informada, por télex 181 del Embajador Ayala¹⁵⁵, que el Sargento Duchicela desapareció desde el viernes 27 por la tarde y que el martes 31 a las 10:00 am, se presentaron indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar del Perú siendo así dice le parece indispensable que la Cancillería coordine acciones con las Autoridades Militares pertinentes del Ecuador; a su vez, que se informe a Torre Tagle (El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú), dejando constancia documentada de la información para obtener el esclarecimiento del caso.

El viernes 3 de junio, el Embajador Lasso señaló al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en el télex 190¹⁵⁶:

*[...]que habiendo transcurrido una semana sin que la investigación reservada haya dado resultados conviene pedir a las autoridades peruanas que **se levante el carácter de reservado a este caso y se prosiga la investigación sin ninguna restricción.** Agradeceré autorización expresa para proceder en este sentido (la negrita es mía).*

El 8 de junio, en télex 200¹⁵⁷, el Embajador Ayala puso en conocimiento de la Cancillería ecuatoriana que el “*Ministro del Interior al conocer que el Ecuador había resuelto levantar la reserva que rodeaba la investigación del caso solicitó que se mantenga dicha reserva hasta cuando se encuentren los primeros indicios*”.

¹⁵⁵ Cfr. TÉLEX 181. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 636.

¹⁵⁶ TÉLEX 190. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 646.

¹⁵⁷ TÉLEX 200. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 511.

Del 21 al 24 de julio de 1988, es decir aproximadamente 2 meses después de la desaparición, se ejecutaron las actividades de investigación de los dos oficiales Superiores asignados por el Comandante General de la FAE para ese propósito, de la cual dijo no hubo resultados positivos, según el informe de la Dirección de Inteligencia de FAE –suscrito por el Crnl Luis Cárdenas¹⁵⁸. Cuando en este informe ya se reportaba de forma certera que el Sr. Duchicela había sido detenido por los Servicios de Contrainteligencia peruano, estableciendo entre sus conclusiones:

1. Las Agregaduría Militar, Naval y Aérea, a la Embajada del Ecuador, han desarrollado actualmente y en el pasado, actividades de colección de información, en forma ilegal.

4. El Sargento Enrique Duchicela fue detenido por un Servicio de Contrainteligencia local; debido, a sus esfuerzos dedicados a la colección de información¹⁵⁹.

El 17 de agosto de 2008, el Viceministro de Defensa de Ecuador –Miguel Carvajal- en comunicación telefónica con el Diario EL COMERCIO, pronunciándose respecto al testimonio de Jesús Sosa en el Juicio contra Fujimori, dijo: **“Siempre existió la sospecha de que esa desaparición podía involucrar a las fuerzas de seguridad en el Perú [...]”**¹⁶⁰.

El Estado ecuatoriano podría argumentar que sí se realizaron gestiones para averiguar el paradero de Enrique Duchicela; siendo que esto ha quedado documentado a través de télex, oficios, incluso, se cita un informe de una investigación realizada por una Comisión ecuatoriana enviada a Perú; pero, pese a los esfuerzos realizados, nunca se pudo llegar al fondo del asunto. En lo concerniente a la negativa del Ministerio de Defensa a levantar la reserva del Caso, cabría indicar que en un contexto histórico marcado por fuertes tensiones con el Estado peruano, era una decisión de prudencia, la de no exponer el Caso al escrutinio

¹⁵⁸ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección C, párr. 1, foja 27.

¹⁵⁹ INFORME DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE LA FAE, op.cit., foja 240 y 241.

¹⁶⁰ Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández, Sección 2, punto 1, 17 agosto 2008. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 415

público hasta que hayan evidencias contundentes sobre la participación de Agentes peruanos en la desaparición del Sr. Duchicela.

Sentado un probable argumento del Estado ecuatoriano, sigue puntualizar que el Sr. Duchicela desapareció mientras desempeñaba funciones para el Estado ecuatoriano en Perú, siendo así, debía impulsar toda investigación necesaria para que salgan a la luz los hechos que giraban en torno a la desaparición y muerte del Sargento Duchicela, y poner todos los medios a disposición de la familia del Sr. Duchicela para que accedieran a la justicia y fueran reparados; pues en una desaparición forzada, la familia directa de la víctima, como lo son la esposa e hijas, del Sr. Duchicela son también víctimas.

En este Caso, según lo manifestó el Sr. Embajador de la época, se debía retirar la reserva del caso para que las investigaciones se dieran abiertamente, mas, el Sr. Ministro de Defensa dispuso que no se levante la reserva y en ese marco, se efectuaron gestiones informales solamente para hallar al Sr. Duchicela. La Corte ha señalado que en los Casos de desapariciones forzadas, la investigación y gestiones deben ser realizadas a la brevedad posible con el fin de dar con el paradero de la víctima; en el Caso Duchicela, es claro que el que no se haya levantado la reserva del caso, hizo que no se pueda proseguir ágilmente; a lo que se le debe añadir que entre nota y nota diplomática enviada, transcurrían varios días antes de obtener respuestas mínimas por parte de las Autoridades ecuatoriana; también cabe resaltar que, antes de que el Estado envíe oficiales para que levanten información sobre lo ocurrido, habían transcurrido ya 2 meses.

En este sentido, la investigación debería ir dirigida a identificar el deber jurídico de obrar de los funcionarios ecuatorianos que debían intervenir, tomando las acciones pertinentes para que el Estado peruano responda por el paradero del agente diplomático Duchicela; y así lo ha afirmado la Corte al decir que, el que lo sucedido a las víctimas sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, se siga un proceso contra los presuntos responsables y, en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes es un derecho de los familiares de las víctimas y una obligación del Estado.

Esto como miembro misión; pero, además, por el solo hecho de ser el Sr. Duchicela un nacional ecuatoriano, según el Convenio de Viena sobre relaciones Consulares en su artículo 5, era deber del Estado prestarles asistencia al Sr. Duchicela y su familia. Por el contrario, el Ecuador tomó la posición de ocultar la verdad y hacer oficial la versión falsa de que el Sargento huyó con una Mujer limeña. Todo esto con el fin de que el caso quedará en la impunidad, de forma que no se ahondara en el hecho de que el Ecuador envió un agente diplomático con órdenes de que ejecutar actividades de espionaje.

Luego ante la notoriedad del Caso, se realizaron determinadas gestiones sin la debida diligencia para dar la apariencia de que se accionaba formalmente ante Perú, cuando en realidad existía la intención de que no se dé al caso un seguimiento público -como lo estaban haciendo los medios de comunicación-, lo que deja ver, que el Estado no realizó una investigación seria e imparcial, como la Corte ha dejado sentado que es menester realizar.

En conclusión, el Ecuatoriano no inicio las acciones oportunas y pertinentes para requerir al Estado peruano que dé a conocer el paradero del Sr. Duchicela, ante esto, también, el Estado debió emprender investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios de aquella época que no obraron conforme a su deber jurídico; siendo así el Estado ecuatoriano faltó a su obligación de efectuar las debidas investigaciones en relación al Agente Diplomático Enrique Duchicela, y con ello vulneró los derechos reconocidos en los Artículo 8.1 y 25.1 de la Convención.

3.6.3 Derecho a la Verdad

En relación al Derecho a la Verdad, la Corte ha manifestado que se enmarca en el derecho al acceso a la justicia aseverando que:

En este tipo de casos se entiende que los familiares de la persona desaparecida son víctimas de los hechos constitutivos de la desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados. La Corte ha

*reconocido que el derecho a conocer la verdad de los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos se enmarca en el derecho de acceso a la justicia.*¹⁶¹

La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención:

*[...] el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables [...]*¹⁶²

Afirmando en ese mismo sentir, la Corte señala que:

*[...] toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en determinadas circunstancias el artículo 13 de la Convención, el derecho a conocer la verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido*¹⁶³.

El derecho a la verdad ha sido desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y dentro de su contenido, se ha hecho el análisis de su carácter colectivo e individual.

Siendo que en su ámbito colectivo, reviste el derecho de la sociedad a acceder a información verídica y esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos¹⁶⁴. Mientras que en su carácter particular, este se encuentra subsumido en el derecho que asiste a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares a conocer la verdad de los hechos, e

¹⁶¹ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 118

¹⁶² CORTE IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 18 de septiembre de 2003 párr 100.

¹⁶³ CORTE IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de octubre de 2012, párr. 298.

¹⁶⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Bácamá Velásquez Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párr. 197.

identificar a los agentes responsables de tales violaciones a través de la acción investigativa y juzgamiento efectuado por los órganos competentes del Estado¹⁶⁵.

Así la Corte ha considerado que tanto la investigación como los resultados de la misma, son necesarios para dar satisfacción a este derecho:

[...] el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación pública de los resultados de los procesos penales e investigativos¹⁶⁶.

Por otro lado, la Corte ha contemplado el respeto del derecho a la verdad, como una forma de reparación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos:

[...] la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta, y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo [...]¹⁶⁷.

Reforzando la cita precedente, la Corte también ha manifestado que al fundarse el derecho a la verdad principalmente en el establecimiento judicial de los hechos que rodean violaciones de los Derechos Humanos y sacar a la luz ante la sociedad y la familia de las víctimas lo sucedido, el reconocimiento y ejercicio de este derecho en una situación concreta se constituye en un medio de reparación a las víctimas

Siendo que el derecho a la verdad es una forma de reparación que al no ser respetado, inclusive genera una nueva violación de derechos en las personas de los familiares de las

¹⁶⁵ Cfr. CORTE IDH. *Caso Daniel Tibi Vs Ecuador*. Sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 7 de septiembre de 2004, párr. 256 y 257; y *Caso González Medina y Familiares Vs República Dominicana*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 27 febrero de 2012, párr. 263.

¹⁶⁶ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 119.

¹⁶⁷ CORTE IDH. *Caso Bárcena Velásquez Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párr. 76.

víctimas cuyo sufrimiento vulnera su integridad personal, lo que lo ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al siguiente tenor:

*In sum, the Court finds that the applicants were left to bear the brunt of the efforts to uncover any facts relating to the manner in which their relatives died, whereas the Russian authorities demonstrated a flagrant, continuous and callous disregard for their concerns and anxieties. The Court therefore considers that the manner in which the applicants' enquiries have been dealt with by the Russian authorities has attained the minimum level of severity to be considered inhuman treatment within the meaning of Article 3 of the Convention.*¹⁶⁸

3.6.4 Análisis en relación al Estado peruano

Para abrir este apartado, traeré a colación que en cuanto a la vulneración de este derecho, un argumento que podría emplear el Estado peruano, es que sí se realizó una investigación para esclarecer los hechos de la desaparición del Sr. Duchicela, y se empleó todos los procedimientos a la mano del Estado para en la indagación previa abierta por este caso específicamente, reunir todos los elementos de convicción e indicios que conduzcan a un resultado sobre el suceso. Concluida, la etapa de indagación previa, el 29 de agosto del 2012, se emitió un auto de sobreseimiento provisional de la causa, dado que no fueron hallados tales elementos pese al esfuerzo aplicado.

Una vez sentado lo anterior, procede subrayar que cuando el Estado peruano tuvo conocimiento de la desaparición del Sr. Duchicela, no inicio una investigación hasta el 2007, la Fiscalía peruana diera lugar a una indagación previa, dentro de la cual no se realizaron las debidas diligencias y finalmente se dispuso el archivo provisional de la causa.

Al archivarse la causa sin que exista un esclarecimiento de lo sucedido en torno a la desaparición forzada del Sargento Duchicela, el Estado peruano ya no emprendió más acciones orientadas a determinar la verdad, la persecución, identificación de los presuntos responsables, su captura y enjuiciamiento, cuando en los casos de desapariciones forzadas,

¹⁶⁸ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. *Case of Janowiec and Others V. Russia*. Fifth Section, Applications nos. 55508/07 and 29520/09, decision of April 16th, 2013.

reitero, es una obligación que persiste mientras exista la incertidumbre sobre el paradero de la persona desaparecida.¹⁶⁹

La Corte ha dejado sentado que el reconocimiento y ejercicio del Derecho a la Verdad en una situación concreta, se constituye en un medio de reparación a las víctimas¹⁷⁰. En el caso de la familia del Sgto. Duchicela se ha ocultado información sobre lo sucedido y al no haber una investigación seria, se está vulnerando el Derecho a la verdad de la Familia directa del Sr. Duchicela, y a su vez a impedido que el ejercicio de este derecho se constituya en una medida de reparación para esta familia; colocado a las víctimas en una situación de daño permanente a su integridad psíquica y moral; pues, al no ser respetado el derecho a la verdad, se genera una nueva violación de derechos en las personas de los familiares de las víctimas.

El que las víctimas y la sociedad puedan ejercer este derecho es una obligación que recae en el Estado, llamado a poner al alcance de las víctimas todos los medios idóneos posibles para que se realice una efectiva investigación, y se active el sistema judicial para que los responsables sean sancionados, al tiempo que los familiares reparados por los daños y perjuicios sufridos. Más allá, el hecho de que los autores de tales hechos violatorios de los derechos humanos hayan sido agentes estatales, genera al Estado la responsabilidad internacional de reparar a la víctima por los daños generados en ellos a causa de la violación de sus derechos.¹⁷¹

El caso en su curso despertó el interés de la Sociedad tanto peruana como ecuatoriana por la cobertura dada por los medios de comunicación a causa del contenido del libro “Muerte en el Pentagonito”, las declaraciones de Jesús Sosa en el proceso contra el Ex Presidente Alberto Fujimori, y por ser el Sr. Duchicela un Miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana vinculado a actos de espionaje. Siendo así, era y es necesario que el Estado presente una versión oficial producto de un proceso investigativo y judicial legal y legítimo, el cual cale

¹⁶⁹ Cfr. CORTE IDH. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 4 de septiembre de 2012, párr.192.

¹⁷⁰ Cfr. CORTE IDH. *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de julio de 2004, párr.230.

¹⁷¹ Cfr. CORTE IDH. *Caso Durand y Ugarte Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 16 de agosto del 2000, párr. 46.

en las consciencia de la sociedad y mengue la incertidumbre e inseguridad que genera la falta de respuesta de los órganos de justicia ante una violación de derechos humanos.

En síntesis, por la falta de investigación seria, eficaz y llevada a cabo en un plazo razonable; no se podido esclarecer los hechos sobre la desaparición del Sr. Duchicela al interior del Estado peruano, lo que a su vez ha impedido que identifique y sancione a los autores de aquel delito así como que la familia del Sr. Duchicela sea reparada y la sociedad informada de un caso de interés colectivo; por consiguiente, el derecho a la verdad ha sido vulnerado.

3.6.5 Análisis en relación al Estado ecuatoriano

Para empezar este apartado, se traerá a colación que, sobre el derechos a la verdad, el Estado ecuatoriano podría indicar que toda la información que tenían a su alcance, de la hicieron llegar a la Sra. Escobar, incluso, en la sentencia emitida dentro de la Acción de Acceso a la Información Pública, interpuesta por la Sra. Escobar, el Juez dispuso que se haga llegar a la Sra. Escobar la información solicitada; y, así se hizo, nuevamente, se le entregó la información que reposaba en los archivos de varias Instituciones públicas.

También, el Estado ecuatoriano constituyó una Comisión de la Verdad con el propósito de esclarecer los hechos que giran en torno a varios casos de presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos. En su informe final, esta Comisión de la Verdad emitió unos resultados sobre el Caso del Sr. Duchicela, de manera que el Derechos a la Verdad, tanto en los casos particulares, como en general de la Sociedad ecuatoriana sea observado.

Con lo anteriormente expresado, se ha de iniciar definiendo que en el transcurso del viernes 27 de mayo, el Sr Duchicela *“no acudió a su lugar de trabajo a cumplir con sus labores respectivas en la Embajada”*¹⁷² y el lunes 30 tampoco se presentó a laborar¹⁷³. Tres días

¹⁷² INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección B, Párrafo 1, foja 26

¹⁷³ INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS. Sección B, Párrafo 1. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 26.

después de la desaparición, el Jefe inmediato del Sto. Duchicela informó al Sr. Embajador sobre la desaparición del Sr. Duchicela. El 31 de mayo, la Cancillería ecuatoriana fue informada, por télex 181 del Embajador Ayala¹⁷⁴, que el Sargento Duchicela desapareció y que hay indicios de que el Sr. Duchicela fue detenido por Fuerzas de Inteligencia Militar del Perú.

Conociendo ya la Embajada del Ecuador en Lima que el Sgto. Duchicela había desaparecido irregularmente, las autoridades ecuatorianas no se contactaron con su esposa para informarle y cuando la Sra. Escobar de Duchicela, solicitó información a la Embajada ecuatoriana sobre el Sr. Duchicela, lo que le indicaron falsamente es que estaba de misión.

Del 21 al 24 de julio de 1988, se ejecutaron las actividades de investigación de los dos oficiales Superiores asignados por el Comandante General de la FAE para ese propósito, investigación de la que dijeron que no había resultados, según el informe de la Dirección de Inteligencia de FAE –suscrito por el Crnl Luis Cárdenas¹⁷⁵. Aseveraron aquello, aun cuando en ese informe¹⁷⁶ ya se reportaba que el Sr. Duchicela había sido detenido por los Servicios de Contrainteligencia peruano, estableciendo entre sus conclusiones:

1. Las Agregaduría Militar, Naval y Aérea, a la Embajada del Ecuador, han desarrollado actualmente y en el pasado, actividades de colección de información, en forma ilegal [...]

4. El Sargento Enrique Duchicela fue detenido por un Servicio de Contrainteligencia local; debido, a sus esfuerzos dedicados a la colección de información.

Pese al informe recibido, el Ministerio de Defensa sostuvo ante la Sra. Escobar que el Sr. Duchicela había desertado y huido con una amante. Esta versión, el Estado ecuatoriano la hizo oficial y pública cuando el 21 de diciembre de 1988, el Ministro de Defensa de Ecuador

¹⁷⁴ TÉLEX 181. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 636.

¹⁷⁵ CFR. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FAE, SOBRE LA DESAPARICIÓN DEL SEÑOR SGOP. TEC. AVC. ENRIQUE ROBERTO DUCHICELA HERNÁNDEZ Y LAS ACCIONES REALIZADAS, op. cit., Sección C, párr. 1, foja 27.

¹⁷⁶ INFORME DEL DIRECTOR DE INTELIGENCIA DE LA FAE, op. cit., foja 240 y 241

-Jorge Félix- ante la pregunta de una periodista sobre el Sr. Duchicela, durante una rueda de prensa, asegurando que esas son las conclusiones de las investigaciones realizadas por el Estado ecuatoriano, declaró:

*Lo que sabemos y le podemos decir a la familia es que tengo la información, y desgraciadamente tengo que decirlo, que de las investigaciones realizadas en Lima, el sargento desapareció con una mejer.*¹⁷⁷

La Sra. Marta Escobar, en su esfuerzo por llegar a la verdad de lo acontecido a su esposo, emprendió varias acciones en la vía judicial: realizó la denuncia ante la Fiscalía ecuatoriana, interpuso una Acción constitucional de Acceso a la Información Pública, una Acción constitucional de Protección, en su dos instancias y una Acción Extraordinaria de Protección respecto a la sentencia de segunda instancia de la Acción de Protección.

La Acción de Acceso a la información pública contra los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa fue concedida a la Sra. Escobar en los tres puntos solicitados:

- 1) Las actividades del Sbo. Duchicela durante su estadía en Perú,*
- 2) la información recabada por los Ministerio sobre lo sucedido al Sr. Duchicela desde su desaparición,*
- 3) los nombres de los oficiales superiores que integraban la cadena de mando a la que obedecida el Sargento Duchicela, desde su jefe inmediato hasta el jefe máximo de la rama a la que pertenecía.*

Sin embargo, no se hizo llegar información sobre las actividades de espionaje que realizaba el Sgto. Duchicela, ni toda la información recabada por los Ministerios; por tanto, la Sra Escobar interpuso la Acción de Protección contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, y Procuraduría General de Estado de conformidad a la Constitución ecuatoriana:

¹⁷⁷ TÉLEX INNUMERADO. Dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. * Nota de prensa diario la República de Perú. *Diversas notas de prensa de Diarios ecuatorianos

Incorporados al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, fojas 556, 557, 559 a 563.

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

Durante la audiencia de esta Acción en el 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el que no toda información sobre el caso fue entregada cuando alegó:

*[...] ésta Cartera de Estado, como se evidenció, se le ha informado a la accionante de todo cuanto este Estado es competente y se encuentra en nuestras manos, **excepto**, los documentos que por mandato constitucional y legal, **son calificados como reservados (la negrita es mía)***

El inconveniente con la reserva que sostienen es que impide esclarecer los hechos del caso, contraviniendo el Artículo 18 de la Constitución del Ecuador que prescribe:

*[...] no existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley” aclarando al final que “en caso de **violación de los derechos humanos**, ninguna entidad negará información.*

Esta acción de Protección fue rechazada; sin una debida motivación en la sentencia, pues el juez transcribió los alegatos de ambas partes y en el párrafo final de la sentencia determina que la acción es negada porque el derecho a la verdad no está reconocido en la Constitución y dicha acción, solo procede en contra de la violación de derechos constitucionales; no obstante, el derecho a la verdad sí se halla contemplado en la Constitución que establece en el Artículo 78:

*[...] Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, **el conocimiento de la verdad de los hechos** y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.*

A más de ello, el Derecho a la Verdad no solo se encuentra reconocido en la Constitución del Ecuador, sino que su fuente eminentemente internacional, ha sido ampliamente desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento para Ecuador así como los derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por el Ecuador; mismos que sin excepción se **entienden incorporados al Ordenamiento Jurídico ecuatoriano**¹⁷⁸; e incluso, los tratados de derechos humanos tienen una jerarquía supraconstitucional¹⁷⁹ y aquellos derechos que reconocen los tratados y órganos internacionales son directamente aplicables¹⁸⁰. Adicionalmente, la Corte ya ha dejado sentado que el derecho a la verdad ha sido reconocido y ampliamente desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que debe ser respetado y su vulneración puede ser alegada¹⁸¹.

De lo anteriormente relatado, se observa que el Estado ecuatoriano, ya teniendo información sobre la desaparición del Sargento Duchicela no comunicó a la Sra. Escobar para que pudiera emprender todas las acciones posibles para recuperar a su esposo, sino que al contrario, inicialmente le dicen que está de misión y más adelante que desertó con el propósito de huir con una amante, oficializando una versión falaz. Estos actos definitivamente violaron el derecho de la Sra. Escobar a conocer lo sucedido a más de generar en ella y sus hijas un fuerte impacto psicológico.

El 20 de noviembre de 2008, mediante Decreto Ejecutivo 1446, el Suboficial Segundo Enrique Duchicela fue proclamado Héroe Nacional, ejemplar militar y ciudadano, paradigma

¹⁷⁸ Constitución del Ecuador: **Art. 425.-** “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y *convenios internacionales* [...]” (la **negrita es mía**).

¹⁷⁹ Ibídem, **Art. 425.-** [...] *La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.* (la **negrita** y el **subrayado** son nuestros).

¹⁸⁰ Ibídem, **Art. 426.-** [...] *Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.*

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. (la **negrita** y el **subrayado** son nuestros).

¹⁸¹ CORTE IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de noviembre de 2003, párr. 274.

de las generaciones que le sucedan; pero el Estado ecuatoriano aun no brinda aun una versión oficial de lo sucedió al Sr. Duchicela ni ha continuado una investigación con el fin de otorgar una respuesta y reparación por su omisión de investigar la desaparición de su agente diplomático, haber dado una información falaz, incierta, ocultar la información sobre las funciones de Enrique Duchicela. Esto constituye una violación del derecho a la verdad hacia la Sociedad ecuatoriana, ya que como lo ha dicho la Corte, es una justa expectativa de una sociedad democrática conocer la verdad de los hechos y una obligación del Estado en reconocimiento del derecho a la verdad, el investigar y hacer públicos los resultados de la investigación.

Por estos motivos, se concluye que el Estado ecuatoriano ha vulnerado el derecho a la verdad de la esposa e hijas del Sr. Duchicela y también en su dimensión colectiva en relación a la Sociedad ecuatoriana.

3.7 Violación del Artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) respecto a los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (derecho a las garantías judiciales), 25 (protección judicial) de la Convención.

Conforme al Artículo 1.1 de la Convención:

Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La Corte ha señalado que el artículo 1.1 de la Convención:

[...] contiene la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención¹⁸².

¹⁸² CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 162.

La obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, contempla que el Estado está sujeto en su actuar a los límites que emanan de los derechos humanos, como atributos inherentes a todos por cuanto humanos, de ahí que el poder estatal tiene restricciones y su obrar violatorio de estos derechos, por acción u omisión, genera responsabilidad internacional¹⁸³.

De su lado, la obligación de garantía el libre y pleno ejercicio de los derechos comporta el deber de asegurar a todas las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos a través de la organización efectiva de toda estructura y órgano estatal por medio del que se materializa el poder público. Esta obligación, no se concreta tan solo con la existencia formal de los diferentes mecanismos para garantizar el ejercicio de estos derechos, sino que más ella requiere que se cristalicen en la realidad mediante una conducta gubernamental que respalda lo escrito y actúa conforme a ello con el genuino fin de que las personas puedan ejercer sus derechos. Siendo los Estado consecuentes con esta obligación contraída, deben adoptar las medidas pertinentes para prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención; de la misma manera y gestionar el posible el restablecimiento del derecho transgredido y la reparación de los daños que deriven de la vulneración de los derechos humanos.¹⁸⁴

Reafirmado lo previamente dicho en relación al deber de garantía de los Estados, la Corte ha manifestado también que:

[...] como parte de las obligaciones generales de los Estados, éstos tienen un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a su jurisdicción. Esta obligación de garantía supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce¹⁸⁵.

¹⁸³ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 37.

¹⁸⁴ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 166 y 167.

¹⁸⁵ CORTE IDH. *Caso Bárcena Velásquez Vs Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000, párr. 194.

El Estado ecuatoriano podría insistir en este apartado en que no vulneró los derechos ni del Sr. Duchicela ni de su familia, en virtud de que tras la desaparición del Sr. Duchicela, emprendieron todas las gestiones a su alcance, como poner en conocimiento de las Autoridades peruanas y dar un seguimiento a dicho requerimiento. Así también, se proporcionó a la Sra. Escobar toda la información de la que el Estado podía disponer, considerando que la desaparición se dio en un territorio bajo la jurisdicción y soberanía de otro Estado. En cuanto a las declaraciones efectuadas por el Ministro de Defensa de aquella época sobre el paradero del Sr. Duchicela, posteriormente, de forma ampliamente pública, se desvirtuaron dichas declaraciones y se realizó un acto, igualmente público, por el que se declaraba a Enrique Duchicela como héroe nacional. Finalmente, estaban a disposición de la Sra. Escobar, todos los recursos judiciales que requirió, y tal es así que interpuso al menos tres de estos, obteniendo como resultado sentencias debidamente motivadas.

Mientras que el Estado peruano, podría reiterar que no se ha probado que agentes del Ejército peruano fueron los que gestaron la desaparición del Sr. Duchicela; y, para esclarecer los hechos se realizó una investigación dentro de la indagación previa abierta en la Fiscalía del Perú, de la cual no se obtuvieron como resultado pruebas que corrobore la versión que, el mismo Jesús Sosa, contradijo.

Así, ambos Estados sustentarían que no vulneraron el Artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Con dicha antesala, se ha de especificar que el Estado peruano si habría faltado a su deber de respetar los derechos y libertades del Sr. Duchicela pues, el Sr. Duchicela fue privado de su libertad de forma ilegal y arbitraria por un equipo de miembros del Ejército peruano, comandados por Jesús Sosa, quien a su vez recibió la orden de desarticular la red de espionaje y asesinar a Enrique Duchicela y Marco Barrantes de altas autoridades del Estado.

En consecuencia, el Sr. Duchicela fue sometido a la actuación de agentes estatales que, bajo la aquiescencia del Estado e impunemente, torturaron y asesinaron a Enrique, actos por los cuales el Estado debe responder como lo ha dicho la Corte al sostener que:

[...] es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes [...] por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno [...].

Además, establece que *"es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención de los poderes que ostentan por su carácter oficial"*¹⁸⁶.

A más de ello, se observa que hay una falta al deber de prevención del Estado en el solo hecho de que existieran agentes estatales que con anuencia del Estado, y bajo sus órdenes, proceden en los términos descritos, según lo ha dicho antes la Corte¹⁸⁷. Igualmente, el Estado, como parte de este deber, debió adoptar todas las medidas eficaces en el ámbito jurídico, cultural, político y administrativo para la salvaguarda de los derechos humanos, y de conocer de la desaparición forzada de una persona, hacer lo posible para dar término a aquello¹⁸⁸; lo que no sucedió en cuanto el Estado tuvo conocimiento de la desaparición del Agente Diplomático ecuatoriano Duchicela y que fue una víctima de esa ausencia de medidas adecuadas.

A la vez, la existencia de centros de detención clandestinos, como los llamados “sótanos del SIE” en donde se ocultaba al Sr. Duchicela, compone una violación al deber de garantía del Estado por atentar directamente contra los derechos a la libertad e integridad personal y vida¹⁸⁹.

Tras su detención ilegal y arbitraria, el Sr. Duchicela quedó en un estado de indefensión total, ya que el Estado no asumió la posición especial que tiene de garante de los derechos de los detenidos, posición por la que está obligado a garantizar la vida, integridad personal y condiciones compatibles con la dignidad de todo detenido¹⁹⁰.

¹⁸⁶ CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 170-172.

¹⁸⁷ Cfr. CORTE IDH. *Caso González Medina y Familiares Vs República Dominicana*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 27 febrero de 2012, párr. 181.

¹⁸⁸ Cfr. CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009, párr. 63.

¹⁸⁹ Cfr. *Ibíd.*, párr. 63.

¹⁹⁰ Cfr. CORTE IDH. *Caso Fleury y otros Vs. Haití*. Sentencia de Fondo y reparaciones, 23 de noviembre de 2011, párr. 84; y *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 19 de enero de 1995, párr. 60.

Tampoco, el Estado permitió que el Sargento Duchicela el goce de su derecho a las garantías al debido proceso, y al aislarlo le impidió interponer un recurso para que la autoridad judicial competente decidiera sobre la legalidad de su detención, sustrayéndole del sistema vigente de forma que le negó el acceso a la justicia.

En lo relacionado al derecho a la vida del Sr. Duchicela, el Estado peruano faltó a su deber de respeto cuando los agentes del Ejército, bajo órdenes de autoridades Estatales, ejecutaron al Señor Duchicela, respaldando esta afirmación el contexto de la época, caracterizado por la práctica de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Dicho derecho a más de su obligación negativa, conlleva una obligación positiva de protegerlo, consistente en juzgar y sancionar la vulneración de este derecho y prevenir ejecuciones arbitrarias por sus agentes, correspondiendo la protección integral de este derecho a toda institución del Estado.¹⁹¹

Además, para no crear una ambiente de impunidad es indispensable que el Estado realice una investigación exhaustiva, procese, y sancione a los agentes estatales responsables de la desaparición forzada de una persona, de no ser así el Estado favorece que violaciones a los derechos humanos como las relatadas, se vuelvan a presentar¹⁹². El Estado peruano hasta la fecha no ha iniciado una investigación seria que permita esclarecer los hechos, procesar, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas; desatendiendo su obligación de garantía, pues *“la investigación constituye un medio para garantizar los derechos contemplados en el mencionado instrumento y, por ello, debe ser cumplida de manera seria”*¹⁹³.

En suma, Enrique Duchicela fue víctima de una desaparición forzada, por tanto, el Estado peruano tendría el deber de determinar el destino y situación del Sr. Duchicela, sancionar a los culpables e indemnizar a sus familiares¹⁹⁴. En este caso, esas obligaciones no se han

¹⁹¹ Cfr. CORTE IDH. *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de julio de 2004, párr.129.

¹⁹² Cfr. CORTE IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de noviembre de 2003, párr. 156.

¹⁹³ CORTE IDH. *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, op. cit., párr.134.

¹⁹⁴ Cfr. INFORME N° 44/00. CASO 10.820, *Américo Zavala Martínez – Perú*. 13 de abril de 2000, párr. 62.

cumplido; más aún, el que la desaparición forzada haya sido una práctica en aquella época en Perú, supone *per se* una falta de organización del aparato estatal respecto a el propósito de garantizar los derechos contenidos en la Convención¹⁹⁵.

De su lado, el Estado Ecuatoriano al no tomar las acciones legales que le correspondían en un tiempo prudente para recuperar a su agente diplomático del Estado de Acogida faltó a su deber de garantía del derecho a la libertad personal, integridad y vida del Sargento Duchicela.

Así también, al ocultar la verdad, no iniciar investigaciones en Perú para aclarar los hechos en torno a la desaparición del Sargento Duchicela, y finalmente al negar las acciones judiciales interpuestas, sin motivar sin que el juez motivara debidamente en la sentencia; desembocan en una denegación del acceso a la justicia, el derecho a la verdad, y a las garantías judiciales de la Sra. Duchicela y sus hijas, Jessica y Paulina Duchicela.

Por todo lo expuesto a lo largo del presente escrito, concluyo que el Estado peruano ha conculcado el derecho a la libertad e integridad persona, vida, garantías judiciales y protección judicial en relación al Art 1.1 de la Convención. Igualmente, el Estado ecuatoriano ha violado los derechos a la vida, garantías judiciales, y protección judicial en relación al mismo Art. 1.1.

¹⁹⁵ Cfr. CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988, párr. 158.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE REPARACIÓN EN EL CASO DUCHICELA

4.1 Reparación

La esposa e hijas del Señor Enrique Duchicela, como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, desde la desaparición de su ser amado experimentaron un cambio radical en su vida orientado, en principio, a hallar al Sr Duchicela y durante 25 años a la búsqueda de justicia. Esta lucha constante ha generado en la Familia del Sr. Duchicela un desgaste psicológico físico, que a más de trastocar su proyecto de vida, ha conllevado un deterioro en la salud de las víctimas.

Como es normal en casos como el presentado, las víctimas han perdido la confianza en las instituciones sociales y les es preciso alcanzar un proceso de reintegración social, en el que se muestre solidaridad con la Familia Duchicela Escobar, se les brinde la ayuda necesaria para mejorar su situación, de forma que el derecho violado sea restituido de manera integral, en la medida de lo posible, considerando que ninguna medida puede aliviar totalmente el dolor de la pérdida, los años dedicados a alcanzar justicia, la esperanza perdida¹⁹⁶.

En este sentido, la reparación comprende una serie de medidas encaminadas a restituir el derecho a las víctimas, haciendo el Estado el máximo esfuerzo por que la reparación sea lo más próxima a ser integral¹⁹⁷. Para las víctimas, la reparación debería ser la manifestación más tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño que han sufrido. “[...] *Para el Estado la reparación es una oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad, pero también de prevenir nuevas violaciones en el futuro* [...]”¹⁹⁸.

En el tiempo, se ha ido reforzando la ideal de que el objetivo central de los sistemas de protección internacional de Derechos Humanos más que la mera declaración de

¹⁹⁶ Cfr. BERISTAIN, Carlos. *Diálogos sobre la Reparación*. Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009, pp 173 y 174.

¹⁹⁷ Cfr. *Ibidem*, pp 173 y 174.

¹⁹⁸ *Ibidem*, 2009, p 174.

responsabilidad internacional de los Estados, es la reparación plena de las víctimas. La Corte Interamericana en su desarrollo jurisprudencial ha desarrollado una doctrina de reparación que ha ido evolucionando con el tiempo y ha incorporado medidas que van más allá de las tradicionalmente conocidas¹⁹⁹.

Refiriéndose a las reparaciones la Corte ha manifestado que:

[...] consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial²⁰⁰.

Este derecho que asiste a las víctimas se halla en el Art 63.1 de la Convención en los siguientes términos:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En análisis de este Artículo de la Convención, la Corte ha señalado que:

[...] distingue entre la conducta que el Estado responsable de una violación debe observar desde el momento de la sentencia de la Corte y las consecuencias de la actitud del mismo Estado en el pasado, o sea, mientras duró la violación. En cuanto al futuro, el artículo 63.1 dispone que se ha de garantizar al lesionado el goce del derecho o de la libertad conculcados. Respecto del tiempo pasado, esa prescripción faculta a la Corte a imponer una reparación por las consecuencias de la violación y una justa indemnización²⁰¹.

¹⁹⁹ Cfr. ROUSSET, Andrés. “El Concepto de Reparación Integral en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. *Revista Internacional de Derechos Humanos*, 2011, I – N° 1 59 /, p 60 -61. Recuperado de: www.revistaidh.org.

²⁰⁰ CORTE IDH, *Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.

²⁰¹ CORTE IDH. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, Párr. 46.

La Corte ha diseñado las medidas de reparación considerando 5 dimensiones en pos de la reparación integral²⁰²:

- **Restitución:** Comprende el restablecimiento de derechos procurando volver a la víctima a su situación anterior a la vulneración de los derechos. En casos como del Sr. Duchicela, la *restitutio in integrum*, es imposible debido a que al principal bien afectado es la vida. La Corte ha expresado este particular en las siguientes palabras:

*Es preciso tomar en consideración que en muchos casos de violaciones a derechos humanos, como el presente, no es posible la restitutio in integrum, [...], teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado [...]*²⁰³

- **Indemnización:** Cabe aclarar que esta medida tiene un carácter compensatorio y no de sanción. Se evalúan los daños morales, lucro cesante, daño emergente considerando el proyecto de vida de la víctima con el fin de determinar una cantidad pecuniaria en compensación. A decir de la Corte, el proyecto de vida atendería a:

*[...]la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.*²⁰⁴

- **Rehabilitación:** Busca la readaptación de la víctima a la sociedad, para lo cual se le debe brindar la atención médica, psicológica, legal, necesaria.
- **Satisfacción:** Preciso para cerrar un círculo, que se dé la verificación de los hechos en pos de que salga a la luz la verdad, de forma que haya una versión oficial pública y los correspondientes actos de desagravio, tributo a la víctima, sanción a los responsables.

²⁰² Cfr. BERISTAIN, Carlos. *Diálogos sobre la Reparación*, op. cit., p 174 y 175.

²⁰³ CORTE IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 189

²⁰⁴ CORTE IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 147.

- **Garantías de no repetición:** El Estado ha de garantizar que no vuelva a ser víctima de violaciones a los derechos humanos, y que en general la situación no se repita por medio de promoción a los derechos humanos, reformas legales, institucionales.

En cuanto a lo que representan estas dos últimas dimensiones, la Corte ha dicho:

*[...] el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso.*²⁰⁵

Las medidas de reparación adoptadas han de corresponder a criterios de proporcionalidad y jerarquía. La proporcionalidad hace referencia a que la reparación ha de estar “a la altura de las violaciones”, mientras que la jerarquía es relativo a la dimensión de reparación que cobra mayor importancia para las víctimas. En el caso de la Familia Duchicela Escobar, la prioridad versa sobre medidas de satisfacción como es conocer la verdad de lo sucedido, haya una versión oficial que limpie el honor de su esposo, y los responsables sean sancionados.

La familia Duchicela Escobar solicitó en su Petición a la Comisión el considerar las alegadas violaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ordenar al Estado peruano y ecuatoriano reparar integralmente el daño provocado a través de las acciones que procederé a describir.

4.2 Medidas de reparación

En razón de lo expuesto en el apartado precedente, se ha de considerar como beneficiarios del derecho de reparación, por un lado al Sr. Enrique Duchicela, como víctima directa, y por otro lado, a su familia directa; es decir, Marta Escobar Andrade, Jessica y Paulina Duchicela, planteando las acciones que procederé a describir:

²⁰⁵ CORTE IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 268.

4.2.1 Evento de Develación de una Placa

La Sra. Escobar acudió por múltiples ocasiones al Ministerio de Defensa con el fin de que se le informe sobre la situación y el paradero de su esposo, sin obtener una respuesta certera al respecto y siendo sujeto de varios maltratos; en virtud de ello, la Familia Escobar Andrade solicita que se coloque en el Edificio del Ministerio de Defensa una placa de disculpas y de reconocimiento de responsabilidad del Estado ecuatoriano en relación a los hechos que constituyeron una violación a los Derechos Humanos del Sr. Duchicela.

Por otro lado, al haber emitido el Ministro de Defensa de aquella época, Jorge Félix, una declaración en la que aseveraba que el Sr. Duchicela huyo con una amante, es propio que se haga un acto público de develación de la placa y de disculpas públicas con la presencia de altas autoridades estatales.

4.2.2 Disculpas Públicas

En varias oportunidades, altas autoridades estatales, tanto de Ecuador como de Perú, emitieron declaraciones falsas sobre los motivos de la desaparición del Sr. Duchicela a través de medios de comunicación de amplio alcance, como medios televisivos y prensa; en razón de ello, el Estado ecuatoriano y el Estado peruano deberán publicar en un diario nacional de amplia circulación un texto de disculpas y reconocimiento de responsabilidad por las acciones y omisiones en que incurrieron en el Caso Duchicela.

4.2.3 Nombrar una parada de Eco-vía

La Sra. Duchicela vive al frente de una parada de la Eco-vía de Quito, y con el fin de recordar continuamente a su esposo, así como el restablecimiento de la justicia, es una importante medida que se pueda nombrar a aquella parada de la Eco- vía “Enrique Duchicela”.

4.2.4 Publicación de la Sentencia

En función del alto impacto mediático que tuvo el caso de la desaparición del Sr. Duchicela, de declarar la Corte la responsabilidad internacional de los Estados ecuatoriano y/o peruano

por la violación a los Derechos Humanos del Sr. Duchicela, los Estados ecuatoriano y peruano, deberán publicar el resumen oficial de la sentencia en:

- El Registro Oficial
- Un Diario nacional de amplia circulación.
- Las páginas web oficiales de las Instituciones públicas que hayan tenido o tengan relación con el caso.

4.2.5 Tratamiento médico y psicológico

Como consecuencia directa de la desaparición forzada del Sr. Duchicela y la constante negativa de las autoridades de los Estados ecuatoriano y peruano a investigar y proporcionar información verdadera sobre los hechos en torno al Caso Duchicela, tanto la Sra. Escobar como la sus hijas han experimentado un deterioro en su salud física y psicológica. En este sentido, el Estado ecuatoriano y peruano han de brindar apoyo psicológico a la Sra. Martha Escobar y sus hijas, Paulina y Jessica Duchicela, según el diagnóstico recomendado por un profesional en la materia escogido por las víctimas.

Otorgar atención médica, de especialidad, a la Sra. Escobar en un centro médico de su preferencia, sea público o privado, por toda afección que la aqueja como consecuencia de las desaparición de su esposo, y se le contrate un seguro médico.

Dar atención médica a Paulina Duchicela en el centro médico de su elección, sea privado o público, según lo acuerden.

4.2.6 Investigación, juicio y sanción

Ambos Estados realicen una investigación efectiva y sin dilación alguna de hechos que giran en torno a la desaparición del Sr. Duchicela y se identifique a los responsables de los mismos, incluidas las autoridades que tras su desaparición incurrieron en acciones u omisiones que devinieron en violaciones a los Derechos Humanos de la Sra. Escobar e hijas del Sr. Duchicela. Esto de cara a que la verdad salga a relucir y se sancione a los responsables.

Hacer públicos los resultados de la investigación.

4.2.7 Capacitaciones en Derechos Humanos

Tanto el Estado ecuatoriano como el peruano realicen capacitaciones permanentes a la policía nacional, fuerzas armadas y operadores de justicia en la temática de Derechos Humanos (particularmente a aquellos operadores que conocen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos), incluyendo en el programa el análisis del Caso de Enrique Duchicela, con el fin de evitar que hechos similares a los ocurridos al Sr. Duchicela y a su familia se vuelvan a repetir.

4.2.8 Indemnización

Con el fin de mantener una referencia, en la siguiente matriz, procederé a identificar los montos que fueron asignados a las víctimas en lo concerniente a costas y gastos, daño emergente, pérdida de ingresos, y daño inmaterial; en tres de los casos más recientes de desapariciones forzadas en los que la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano.

Caso	Costas y Gastos	Daño emergente	Pérdida de ingresos	Daño inmaterial	Familiares
Osorio Rivera y familiares Vs Perú ²⁰⁶ .(2013)	\$ 10.000,00 USD	\$10.000,00 USD	\$ 57.500,00 USD	\$ 80.000,00 USD	Santa Fe Gaitán (esposa) Hijos: Edith Osorio, Neida Osorio, Vannesa Osorio, Jerisy Osorio. A cada uno de los anteriores: \$45.000 USD

²⁰⁶ CORTE IDH, *Caso Osorio Rivera y Otros Vs Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2013.

Anzualdo Castro Vs Perú ²⁰⁷ (2009)	\$14.000,00 USD	\$15.000,00 USD	US \$140.000,00 USD	\$80.000,00 USD	Félix Anzualdo (padre): \$50.000,00 USD Iris de Anzualdo (madre): \$50.000,00 USD Marly Anzualdo (hna): \$50.000,00 USD
Gómez Palomino Vs Perú ²⁰⁸ (2005)	\$5.000,00 USD	\$3.000,00 USD	\$50.000,00 USD	\$100.000,00 USD	Victoria Palomino (madre): US \$ US \$80.000,00 USD Esmila Conislla (conviviente): US 10.000,00 USD

En el Caso del Sr. Duchicela, se definirá en primer lugar el monto concerniente a daño material, mismo que incluye daño emergente y pérdida de ingresos; para posteriormente identificar el monto por daño inmaterial, y; finalmente, el valor relativo a costas y gastos.

4.2.9 Daño material

4.2.9.1 Daño emergente:

Con el fin de hallar al Sr. Duchicela y la verdad de lo acontecido, la Sra. Escobar emprendió acciones y gestiones ante autoridades administrativas y judiciales, realizando varios intentos por llegar a Perú; lo que ha generado gastos; mas, en virtud de que no cuentan con documentos de respaldo para justificar estos gastos por haber transcurrido 25 años, la Sra. Escobar solicitaría a la Corte que fije en equidad la compensación de los gastos incurridos.

²⁰⁷ CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009.

²⁰⁸ CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005.

De igual forma, en cuanto a los gastos en salud, la Sra. Escobar solicitaría a la Corte que fije en equidad el monto que corresponde a la atención médica y medicamentos que tanto ella como Paulina Duchicela han tenido que recibir, pues, a causa de la desaparición del Sr. Duchicela, la Sra. Escobar presentó un cuadro de depresión, afecciones gástricas, inflamación neuronal provocada por los nervios y estrés; mientras que a Paulina Duchicela le sobrevino una afección neuronal permanente por la que es medicada.

En el *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*, se puede observar que la familia de la víctima realizó gestiones similares a las efectuadas por la Sra. Escobar como acciones ante autoridades civiles y administrativas, viajes, contrataron un investigador privado; definiendo la Corte como indemnización por daño emergente el valor de \$15000; pronunciándose la Corte en los siguientes términos:

208. La Corte reconoce que las acciones y gestiones realizadas por los familiares del señor Anzualdo Castro para intentar localizarlo generaron gastos que pueden ser considerados como daño emergente, en particular en lo referente a las acciones ante diferentes autoridades civiles, administrativas y judiciales. La contratación de un investigador no ha sido demostrada [...].

210. La Corte tiene presente que la familia Anzualdo no conserva documentos de soporte de los gastos señalados, lo cual es razonable luego de transcurridos más de 15 años desde la desaparición, por lo que fija en equidad la cantidad de US \$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América)[...].

En virtud de la similitud de los gastos incurridos por la Familia del Sr. Duchicela y la Familia del Sr. Anzualdo, considerando también que, en ambos casos, estas familias no poseían documentos de justificación de gastos por lo que la Corte falló en equidad, se solicita a la Corte que establezca como monto por daño emergente el valor de \$25000 USD, pues mientras en el Caso citado transcurrieron 15 años desde la desaparición en tanto que en el Caso del Sr. Duchicela 25 años.

4.2.9.2 Pérdida de ingresos

El Sr Duchicela desapareció en 1988, a los 36 años de edad, cuando la esperanza de vida de un hombre ecuatoriano era de 65,52 años²⁰⁹; restándole por vivir aproximadamente 30 años.

Tomando en consideración el salario básico por año, desde 1988 al 2014, el Sr. Duchicela habría percibido como mínimo \$38028 USD; a éste monto se le tendría que sumar \$16320, valor que corresponde a la remuneración que habría recibido desde el 2015 al 2018, adoptando como base el salario básico de \$340 USD establecido hasta el 2014. En la siguiente matriz se procede a desarrollar lo indicado:

Año²¹⁰	Salario Básico	Salario Básico por año (salario en USD*12)
1988	24 USD	288
1989	31 USD	372
1990	39 USD	468
1991	36 USD	432
1992	40 USD	480
1993	44 USD	528
1994	32 USD	384
1995	33 USD	396
1996	30 USD	360
1997	25 USD	300
1998	18 USD	216
1999	8 USD	96
2000 y 2001	56 USD	1344
2002 y 2003	105 USD	2520

²⁰⁹Cfr. DATOS MACRO. *Esperanza de Vida al Nacer*. Internet. <http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/ecuador>, 24 de marzo de 2014.

²¹⁰Cfr. EL COMERCIO. *Tras la dolarización, salarios crecieron al 12%Anual*. Internet. http://www.elcomercio.com/negocios/dolarizacion-salarios-crecieron-anual_0_825517541.html, 10-12-2012.

EL HOY. *Evolución del Salario Mínimo Vital en Ecuador*. Internet. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/evolucion-del-salario-minimo-vital-24560.html>, 29-12-1994.

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR. *Análisis del Salario Mínimo Vs Costo de la Canasta Básica 1990-2009*. Internet. http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SALARIO%20MINIMO%20VITAL%20VS%20COSTO%20CANASTA%20FAMILIAR%20BASICA%201990-2009____.pdf, a 25 de marzo de 2014. <http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/ecuador>. Actualizada a 24 de marzo de 2014.

2004	135 USD	1620
2005	150 USD	1800
2006	160 USD	1920
2007	170 USD	2040
2008	200 USD	2400
2009	218 USD	2616
2010	240 USD	2880
2011	264 USD	3168
2012	292 USD	3504
2013	318 USD	3816
2014	340 USD	4080
Total 1		38.028 USD

Año	Salario Básico	Salario Básico Anual
2015- 2018	340	\$16.320 USD
Total 2		\$16.320 USD

total 1 + total 2	\$ 54.348 USD
--------------------------	---------------

Siendo así, en los 30 años restantes de vida, el Sr. Duchicela habría percibido como mínimo \$54.348. Sin embargo, ha de exponerse a la Corte que si bien se hace un cálculo en base al salario básico, el Sr. Duchicela recibía un ingreso adicional por concepto de viáticos y bonificaciones propias de su posición de Sargento de Aviación y de agregado de la Misión Diplomática del Ecuador, incrementando estos conceptos al monto antes dicho en al menos un 30%.

4.2.9.3 Daño inmaterial:

En el *Caso Osorio Rivera y familiares Vs Perú*, el Sr. Osorio fue víctima de desaparición forzada y siendo padre de familia y esposo, se fijó el monto indemnizatorios de la siguiente manera:

En primer término, la Corte considera que las circunstancias que rodearon la detención y posterior desaparición del señor Jeremías Osorio Rivera fueron de una naturaleza tal que le causaron profundo temor y sufrimiento. En casos anteriores, la Corte Interamericana estimó que circunstancias similares habían causado a la víctima un grave perjuicio moral que debía ser valorado en toda su dimensión a la hora de fijar una indemnización por ese concepto. A la luz de este criterio, la Corte considera que el señor Jeremías Osorio Rivera debe ser compensado por concepto de daño inmaterial y ordena en equidad el pago de US\$ 80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América). La mitad de dicha cantidad deberá ser entregada a la señora Santa Fe Gaitán Calderón, y la otra mitad deberá ser repartida en partes iguales, entre las hijas e hijo del señor Jeremías Osorio Rivera, a saber, Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán y Jersy Jeremías Osorio Gaitán.

En segundo término, la Corte estima que Santa Fe Gaitán Calderón, Edith Laritza Osorio Gaytán, Neida Rocío Osorio Gaitán, Vannesa Judith Osorio Gaitán y Jersy Jeremías Osorio Gaitán han experimentado grandes sufrimientos o sus proyectos de vida se vieron afectados como consecuencia de la desaparición forzada del señor Jeremías Osorio Rivera. Por lo anterior, la Corte fija en equidad la cantidad de US\$ 45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto del daño inmaterial, a favor de Santa Fe Gaitán Calderón, así como de cada uno los hijos de Jeremías Osorio Rivera [...]²¹¹

En la matriz comparativa de los montos asignados por cada concepto indemnizatorio, en tres de los casos más recientes de la Corte IDH en lo concerniente a desapariciones forzadas ocurridas en Perú, se puede notar que en el caso de los estudiantes Anzualdo Castro y Gómez Palomino, el valor por daño inmaterial fue de \$80000 USD, mientras que en el caso del Sr. Osorio, que era un esposo y padre de familia, el monto se fijó en \$100000 USD. Por otra parte, a la familia directa del Sr. Osorio; es decir, esposa e hijos, se les otorgó \$45000 USD a cada uno.

En este sentido, tomando como referencia el rol que desempeñaba el Sr. Osorio como principal sustento para su esposa e hijos, al igual que ocurría en el Caso del Sr. Duchicela, se solicita por el daño inmaterial sufrido por el Sr. Duchicela el valor de \$100000 USD, y por el daño sufrido por la Sra. Escobar, Paulina y Jessica Duchicela, se solicita el valor de \$45000 USD para cada una.

²¹¹ CORTE IDH. *Caso Osorio Rivera y Otros Vs Perú*, op. cit., párr. 288 y 289.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

1. El Sargento Enrique Duchicela era un Miembro de la Misión Diplomática de Ecuador en Lima; y, desapareció en Perú el 27 de mayo de 1988, cuando agentes del Ejército peruano lo detuvieron arbitrariamente e ilegalmente, en virtud de que el Sr. Duchicela habría estado desempeñando actividades de espionaje a favor del Estado ecuatoriano.
2. Ante la desaparición del Sr. Duchicela, el Estado peruano no emprendió las investigaciones para esclarecer los hechos, sin iniciarse los correspondientes procesos judiciales para juzgar, sancionar y reparar a los familiares de la víctima. Por su parte, el Estado ecuatoriano no realizó las acciones formales pertinentes para rescatar a su funcionario; a su vez, sus autoridades ocultaron la verdad e hicieron pública una versión falsa en torno a esta desaparición, engañando a la familia del Sr. Duchicela y la Sociedad ecuatoriana.
3. El contexto de vulneración sistemática y generalizada, que se vivía en Perú, hizo posible que el Sr. Duchicela desaparezca en manos agentes del Ejército peruano, que tenían en su práctica incorporada la desaparición forzada y ejecución de personas.
4. El Estado peruano faltó a sus obligaciones de precautelar la vida e integridad del Sr. Duchicela como miembro de la Misión Diplomática ecuatoriana; e inobservó las disposiciones del Convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas en lo concerniente a la inviolabilidad personal e inmunidad de jurisdicción penal; con lo que en general, faltó a su deber de adoptar las medidas necesarias para prevenir violaciones a los derechos de los agentes diplomáticos de los Estados que los envían. Por su parte, el Estado ecuatoriano, estaba obligado a reclamar por la vida de su funcionario, el esclarecimiento de los hechos, así como a prestar toda la asistencia a la familia del Sr. Duchicela, lo cual omitió.
5. Los derechos humanos conculcados en el Caso Duchicela corresponde a los múltiples derechos que se violan en el marco de una desaparición forzada. Así, a la luz de la

Convención Americana de Derechos Humanos, fueron vulnerados los derechos a: la libertad personal (artículo 7 de la Convención), la integridad personal (artículo 5 de la Convención), la vida (artículo 4 de la Convención), a la personalidad jurídica (artículo 3 de la Convención), a las Garantías Judiciales (Artículo 8 de la Convención), la Protección Judicial (artículo 25 de la Convención), la verdad, incumplimiento del Estado frente a su obligación de iniciar una investigación de oficio; violación del Artículo 1.1 (Obligación de respetar los derechos) respecto a los artículos 3, 4, 5, 7 8, 25 de la Convención.

6. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema idóneo para conocer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en contra del Sr. Duchicela; y, en virtud de que en el caso se cumplen las condiciones necesarias, el 31 de abril de 2013, se presentó la correspondiente petición, en contra de los Estados ecuatoriano y peruano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7. Tanto el Sr. Duchicela como la Familia directa del Sr. Duchicela (esposa e hijas) fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos, reconocidos en la Convención. Siendo que la familia, como consecuencia directa de la desaparición forzada del Sr. Duchicela y la posterior negativa de los Estados a investigar los hechos del Caso, experimentaron daños materiales e inmateriales; se han establecido determinadas medidas de reparación de orden indemnizatoria, simbólica, satisfacción, de garantía y no repetición, y rehabilitación.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y Artículos

HERRERA, Juan Carlos, *Breve Historia del Espionaje*. Madrid, Editorial Nowlitu, 2012.

LÓPEZ, Hermilo, *Tratado de Derecho Diplomático y Consular*. México, Editorial Porrúa, 2006.

SIMMEL, Georg, *Secreto y Sociedad Secreta*. Madrid, Alianza editorial, 1986.

UCEDA, Ricardo, *Muerte en el Pentagonito. Los Cementerios Secretos el Ejército peruano*. Bogotá, Editorial Planeta, 2004.

VILARIÑO, Eduardo, *Curso de Derecho Diplomático y Consular*. Madrid, Tecnos, 2007.

VILLEGAS, Cesar. “Artículo Marco Jurídico de las Personas que Participan en Actos de Violencia – Una Respuesta del Derecho Internacional”. *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, VII, México, 2007.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, *El Enemigo en el Derecho Penal*, Coyoacán, Ediciones, 2007.

Normativa

Carta De Las Naciones Unidas, San Francisco, 26 de junio de 1945.

Constitución De La República Del Ecuador, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Constitución Política Del Perú, 12 de julio de 1979.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, San José - Costa Rica, noviembre de 1969.

Convención Sobre La Prevención Y El Castigo De Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive Los Agentes Diplomáticos, Nueva York, 14 de diciembre de 1973.

Convención De Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961.

Convencion De Viena Sobre Relaciones Consulares, 24 De Abril De 1963.

Ley Organica De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica, Registro Oficial Suplemento N.- 337 de 18 de mayo de 2004.

Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional, Registro Oficial Suplemento N.- 52, 22 de octubre de 2009.

Ley Orgánica Del Servicio Exterior, Decreto Supremo 2268, Registro Oficial 353 de 15 de octubre de 1964.

Protocolo Facultativo Sobre La Jurisdicción Obligatoria Para La Solución De Controversias Facultativo Para La Solución De Controversias, Viena, 18 de abril de 1961.

Jurisprudencia

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, *Caso de Zohra Madoui v. Algeria*, Comunicación No. 1495/2006, 94º, 28 de octubre de 2008

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, *Caso de Messaouda Kimouche v. Algeria*, Comunicación No. 1328/2004, 90º período de sesiones, CCPR/C/90/D/1328/2004, 10 de julio de 2007.

CORTE IDH, *Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú*. Sentencia de. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 7 de febrero de 2006.

CORTE IDH. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Sentencia de. Reparaciones y Costas, 10 de septiembre de 1993.

CORTE IDH. *Caso Anzualdo Castro Vs. Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de septiembre de 2009.

CORTE IDH. *Caso Bácamá Velásquez Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, 25 de noviembre de 2000.

CORTE IDH. *Caso Blake.Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, 24 de enero de 1998.

CORTE IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 18 de septiembre de 2003.

CORTE IDH, *Caso Cantoral Benavides Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 18 de agosto de 2000.

CORTE IDH, *Caso Castillo Páez Vs. Perú*. Sentencia de Reparaciones y Costas; 27 de noviembre de 1998.

CORTE IDH. *Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de mayo de 2010.

CORTE IDH. *Caso Conteras y otros Vs. El Salvador*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2011.

CORTE IDH. *Caso Durand y Ugarte Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, 16 de agosto del 2000.

CORTE IDH. *Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de noviembre de 2003.

CORTE IDH. *Caso Fleury y otros Vs. Haití*. Sentencia de Fondo y Reparaciones, 23 de noviembre de 2011.

CORTE IDH. *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 21 de enero de 1994.

CORTE IDH. *Caso García y Familiares Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2012.

CORTE IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005.

CORTE IDH, *Caso González Medina y Familiares Vs. República Dominicana*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; 27 de febrero de 2012.

CORTE IDH. *Caso Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de julio de 2004.

CORTE IDH. *Caso J Vs. Perú*. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 27 de noviembre de 2013.

CORTE IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2006.

CORTE IDH, *Caso Loayza Tamayo Vs Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de septiembre de 1997.

CORTE IDH. *Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 4 de septiembre de 2012.

CORTE IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 15 de septiembre de 2005.

CORTE IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 25 de octubre de 2012.

CORTE IDH. *Caso Neira Alegría y otros Vs Perú*. Sentencia de Fondo, 19 de enero de 1995.

CORTE IDH, *Caso Osorio Rivera y Otros Vs Perú*. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2013.

CORTE IDH. *Caso Daniel Tibi Vs. Ecuador*. Sentencia Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 7 de septiembre de 2004.

CORTE IDH. *Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia*. Sentencia de Reparaciones y Costas, 27 de febrero de 2002.

CORTE IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Sentencia de Fondo, 29 de julio de 1988.

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Case of Janowiec and Others V. Russia*, Applications nos. 55508/07 and 29520/09, decision of April 16th, 2013.

Informes

AGREGADO AÉREO, C. E, *Informe en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández*, 17 de agosto de 2008.

CIDH, *INFORME N° 49/00, Caso 11.182 -Adolfo Gerbert Asencios Lindo, Rodolfo Dynnik Asencios Lindo, Marco Antonio Ambrosio Concha y Carlos Florentino Molero Coca – Perú*, 13 de abril de 2000.

CIDH, *INFORME N° 44/00, Caso 10.820, Américo Zavala Martínez – Perú*, 13 de abril de 2000.

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, Ecuador 2010, Tomo III.

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, 28 de agosto de 2003.

FAE - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA, *Informe sobre la desaparición del Señor SGOP. TEC. AVC. Enrique Roberto Duchicela Hernández y las acciones realizadas*, 1988.

FAE, D. d, *Informe de la desaparición de Enrique Duchicela*, 1988.

AGREGADO AÉREO, CRNL. EMC. JORGE ESTRELLA VALLADARES, *Informe presentado en Relación a las Últimas Informaciones Difundidas En Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández*, 17 agosto 2008.

Web

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. *Acción Extraordinaria de Protección N.- 97-2011-MCH*. Internet.

http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/17f48b86-dd27-4946-8ade-b51d14d83b6b/p_i.pdf?guest=true.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. *Expediente N.-082012 EP*. Internet. http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/542e8cd9-5915-4873-b820-7ce39f8d9929/auto_sala_de_admision.pdf?guest=true.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. *Acción Extraordinaria de Protección*. Internet.

http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2013f55-b9c7-4910-a190-4a5ad2573301/a_e.pdf?gu.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Definición de espionaje*. Internet. http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=espionaje&val_aux=&origen=REDRAE.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Definición de espía*. Internet. http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=espionaje&val_aux=&origen=REDRAE.

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS. *El ciclo de inteligencia*. Internet. <http://www.intelpage.info/el-ciclo-de-la-inteligencia.html>. (s.f.).

ESCUELA DE LAS AMÉRICAS. *Manual de Estudio de Contrainteligencia*. Internet. <http://www.soaw.org/docs/SOA%20Contrainteligencia%201-60.pdf>.

DATOS MACRO. *Esperanza de Vida al Nacer*. Internet. <http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/ecuador>, 24 de marzo de 2014.

EL COMERCIO. *Tras la dolarización, salarios crecieron al 12%Anual*. Internet. http://www.elcomercio.com/negocios/dolarizacion-salarios-crecieron-anual_0_825517541.html, 10-12-2012.

EL HOY. *Evolución del Salario Mínimo Vital en Ecuador*. Internet. <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/evolucion-del-salario-minimo-vital-24560.html>, 29-12-1994.

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR. *Análisis del Salario Mínimo Vs Costo De La Canasta Básica 1990-2009*. Internet. http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SALARIO%20MINIMO%20VITAL%20VS%20COSTO%20CANASTA%20FAMILIAR%20BASICA%201990-2009____.pdf, a 25 de marzo de 2014.

Varios

EL COMERCIO. *La Desaparición de un Espía Ecuatoriano*. 5 de diciembre de 2004.

DIARIO LA REPÚBLICA. *Ex Agente confiesa la Eliminación de Espías Peruano y Ecuatoriano*. 06 de febrero de 2007.

JUZGADO CUATRO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. *Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional*. Expediente de la causa 1087.

JUZGADO SEGUNDO DE INQUILINATO DE PICHINCHA. *Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Relaciones Exteriores*. Expediente de la causa 0842 VP.

ACCIÓN DE PERSONAL: Incorporada al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 277.

CURRÍCULUM VITAE DEL SEÑOR DUCHICELA. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 214.

CURRÍCULUM VITAE DEL SEÑOR DUCHICELA. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 214.

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE JESÚS SOSA. Tomada del Artículo “Ex agente confiesa la eliminación de espías peruano y ecuatoriano”, publicado en el Diario peruano “La República”, 06 de febrero de 2007.

NOTARIA PRIMERA DEL ECUADOR. *Declaración Juramentada realizada por Dra. Marta Rosario Escobar Andrade*. 23 de abril de 2013.

DIARIO LA REPÚBLICA DE PERÚ. *Declaración de Jesús Sosa*. 05 de marzo de 2010.

NOTA 4-2-121-88. *Dirigida al Sr. Ministro*. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.

OFICIO NR.AH-1-0-80-155. del 13 de noviembre de 1980. Incorporado al Expediente de la causa 1087 de Acceso de la información pública, Marta Escobar e hijas contra el Ministerio de Defensa Nacional, Juzgado Cuatro de lo Civil de Pichincha, foja 153 y 173.

PARTIDA DE NACIMIENTO DE ENRIQUE DUCHICELA, Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

PARTIDAS DE NACIMIENTO DE ENRIQUE ROLANDO DUCHICELA GONZÁLES. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

PARTIDA DE MATRIMONIO ENTRE ENRIQUE DUCHICELA Y MARTA ESCOBAR. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador

PARTIDAS DE NACIMIENTO DE PAULINA Y JESSICA DUCHICELA. Dirección General de Registro Civil, Identificación, y Cedulación, Ecuador.

TÉLEX 181. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.

TÉLEX 182. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.

TÉLEX 185. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.

TÉLEX 190. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández

TÉLEX 196. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.

TÉLEX 200. Anexo A del Informe presentado por el Agregado Aéreo, Crnl. Emc. Jorge Estrella Valladares al Sr. Jefe del CC.FF.AA. Grad. Fabián Varela Moncayo, en relación a las últimas informaciones difundidas en Lima- Perú sobre el Caso, Enrique Duchicela Hernández.